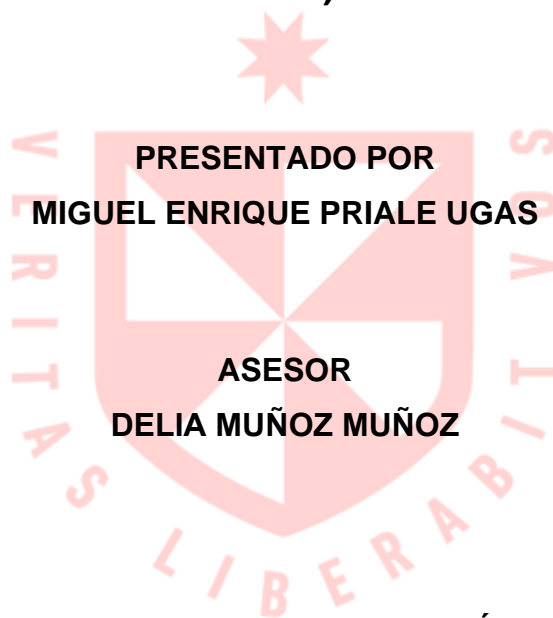




**INSTITUTO DE GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE POSGRADO**

**INVERSIÓN PÚBLICA, DESIGUALDAD Y CONFLICTIVIDAD
SOCIAL: UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS EFECTOS
DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA EQUIDAD Y
CONFLICTIVIDAD DE CUSCO, CAJAMARCA Y PUNO (2012-
2022)**



**PRESENTADO POR
MIGUEL ENRIQUE PRIALE UGAS**

**ASESOR
DELIA MUÑOZ MUÑOZ**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS**

**LIMA – PERÚ
2024**



CC BY-NC-ND

Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada

El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



INSTITUTO DE GOBIERNO Y DE GESTIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE POSGRADO

INVERSIÓN PÚBLICA, DESIGUALDAD Y CONFLICTIVIDAD
SOCIAL: UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS EFECTOS DE LA
INFRAESTRUCTURA EN LA EQUIDAD Y CONFLICTIVIDAD DE
CUSCO, CAJAMARCA Y PUNO (2012-2022)

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR
EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

PRESENTADO POR:
MIGUEL ENRIQUE PRIALE UGAS

ASESOR:
DELIA MUÑOZ MUÑOZ

LIMA, PERÚ

2024

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a Carmen Rosa Osorio Llanos.

AGRADECIMIENTOS

Muchas personas me apoyaron en este trabajo. Algunas con plena conciencia, y la mayoría sin saberlo. Todas muy valiosas. Laura Calderón, quien me animó a seguir la maestría. Eduardo Caveró, Nicole Ramos, Claudia Vera, quienes dieron valiosos aportes al análisis económico y político. Los colegas del BID y Banco Mundial que trabajan en la delicada situación de Haití, Mali y Sahel, respectivamente. A mis socios y amigos, Gustavo Guerra-García y Fernando Valenzuela, por esas insondables charlas de la historia y realidad peruana. Finalmente, a María Delfina y Juan Francisco, mis padres, que me enseñaron la disciplina matemática que me ha servido para alcanzar metas, como este trabajo.

Índice de contenido

INTRODUCCIÓN	9
CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO	14
1.1. Estado de la cuestión.....	14
1.1.1. Brechas en infraestructura y desigualdad en el Perú.....	14
1.1.2. Radiografía de los conflictos sociales y brechas de servicios en el Perú	23
1.2. Revisión de literatura	27
1.2.1. Sobre inversión pública y desigualdad	27
1.2.2. Sobre desigualdad y conflictividad	34
1.2.3. Sobre inversión, desigualdad y conflictividad	45
1.3. Marco conceptual y teórico	47
1.3.1. Desigualdad y brechas socioeconómicas	47
1.3.2. Conflictividad social.....	53
1.3.3. La correlación positiva: Inversión pública y su impacto en la reducción de la desigualdad y el cierre de brechas.....	56
1.3.4. Aproximaciones teóricas sobre desigualdad y conflictividad social	57
1.3.5. Planteamiento e idea central del trabajo	61
CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	64
2.1. El modelo econométrico y la relación inversión, brechas y conflictos.....	64
2.2. Procedimiento metodológico.....	67
CAPÍTULO 3: CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS	72
3.1. Cusco.....	72
3.1.1. Inversión en infraestructura 2012-2022	72
3.1.2. Evolución de indicadores socioeconómicos.....	75
3.1.3. Conflictividad social regional.....	79
3.2. Cajamarca	84
3.2.1. Inversión en infraestructura 2012-2022.....	84
3.2.2. Evolución de indicadores socioeconómicos.....	88
3.2.3. Conflictividad social regional.....	92
3.3. Puno.....	97

3.3.1.	Inversión en infraestructura 2012-2022.....	97
3.3.2.	Evolución de indicadores socioeconómicos.....	99
3.3.3.	Conflictividad social regional.....	101
CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y PROPUESTA DE VALOR		106
4.1.	Estadística descriptiva	106
4.1.1.	Correlaciones entre variables	112
4.2.	Estimación del modelo econométrico	115
4.2.1.	Especificación del modelo	116
4.2.2.	Descripción de las variables	116
4.3.	Resultados del modelo econométrico	118
4.3.1.	Resultados de la estimación: Inversión pública y desigualdad	119
4.3 2.	Resultados de la estimación: Desigualdad y conflictividad social	122
CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN Y APORTES		126
5.1.	Análisis y lineamientos para mejorar impacto de las inversiones.....	126
5.1.1.	Sobre los hallazgos en la ejecución del gasto y sus efectos en la desigualdad y los conflictos	126
5.1.2.	Propuesta de lineamientos.....	127
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA.....		131
Bibliografía.....		134

Índice de tablas

Tabla 1.1. Datos consolidados	67
Tabla 1.2. Indicadores para la construcción del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).....	69

Índice de gráficos

Gráfico 1.1: Pobreza por sectores en el 2019	16
Gráfico 1.2: Hogares con acceso a un paquete de servicios básicos 2021 (% del total de hogares)	18
Gráfico 1.3: Brecha de Acceso Básico a la Infraestructura de Corto Plazo.....	21
Gráfico 1.4: Brecha de Acceso Básico a la Infraestructura de Largo Plazo	21
Gráfico 1.5: Productiva y PEA Ocupada según industria productiva (2007-2017)	24
Gráfico 1.6: Distribución regional del PIB: Costa, Sierra y Selva, 1795-2017 (%)	25
Gráfico 1.7: Conflictos sociales en el Perú (ambientales, minería e hidrocarburos) entre el año 2013 y 2023.....	26
Gráfico 1.8: Relaciones entre diversos aspectos de la desigualdad.....	30
Gráfico 1.9: Evolución de la pobreza monetaria y multidimensional en el Perú (2004-2023).....	52
Gráfico 2.1: Inversión Pública ejecutada por función en la región de Cusco (2012-2022).....	72
Gráfico 2.2: Índice de Gini en la región de Cusco (2012-2022).....	76
Gráfico 2.3: Población con al menos una necesidad básica insatisfecha en la región de Cusco (2012 – 2022)	77
Gráfico 2.4: Promedio de conflictos sociales en la región de Cusco (2012-2022)	79
Gráfico 2.5: Distribución de conflictos sociales por Unidad Territorial en 2022 (%)	80
Gráfico 2.6: Distribución de conflictos sociales por tipo en la región de Cusco (2012-2022).....	81
Gráfico 2.7: Obras públicas a nivel nacional en mayo de 2024.....	84
Gráfico 2.8: Inversión Pública ejecutada por función en la región de Cajamarca (2012-2022).....	85
Gráfico 2.9: Índice de Gini en la región de Cajamarca (2012-2022).....	88
Gráfico 2.10: Población con al menos una necesidad básica insatisfecha en la región de Cusco (2012 – 2022)	89
Gráfico 2.11: Promedio de conflictos sociales en la región de Cajamarca (2012-2022)	92

Gráfico 2.12: Distribución de conflictos sociales por tipo en la región de Cajamarca (2012-2022)	94
Gráfico 2.13: Inversión Pública ejecutada por función en la región de Puno (2012-2022)	97
Gráfico 2.14: Índice de Gini en la región de Puno (2012-2022)	99
Gráfico 2.15: Población con al menos una necesidad básica insatisfecha en la región de Puno (2012 – 2022)	100
Gráfico 2.16: Promedio de conflictos sociales en la región de Puno (2012-2022)	102
Gráfico 2.17: Distribución de conflictos sociales por tipo en la región de Puno (2012-2022)	103
Gráfico 3.1: Evolución de conflictos sociales por región	106
Gráfico 3.2: Evolución del Índice de Gini por región	107
Gráfico 3.3: Evolución del porcentaje de personas pobres multidimensional por región	108
Gráfico 3.4: Evolución del gasto ejecutado en inversión pública por región	109
Gráfico 3.5: Descriptivos de variables en Cajamarca.....	110
Gráfico 3.6: Descriptivos de variables en Cusco	111
Gráfico 3.7: Descriptivos de variables en Puno.....	111

RESUMEN

En los últimos veinte años, el Perú ha experimentado un crecimiento económico sostenido, pero las disparidades regionales y la conflictividad social persisten. Desde 2010, el Estado ha incrementado la inversión pública en infraestructura en regiones rezagadas, buscando reducir brechas socioeconómicas y mitigar tensiones sociales. Sin embargo, la investigación empírica sobre sus efectos en la desigualdad y conflictividad a nivel subnacional es limitada. Esta investigación explora la relación entre el aumento de la inversión pública en infraestructura, la reducción de brechas socioeconómicas y la disminución de la conflictividad social en Cusco, Cajamarca y Puno durante 2012-2022. El estudio se basa en dos relaciones causales principales: el vínculo positivo entre el incremento del gasto público en infraestructura y la equidad en la distribución del ingreso, y la relación inversa entre menores niveles de desigualdad socioeconómica y una menor conflictividad social.

La metodología emplea un enfoque de estudio de casos múltiples y un modelo econométrico de datos de panel. Se analizan datos de inversión pública devengada del Ministerio de Economía y Finanzas, informes de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, y el índice de Gini e Índice de Pobreza Multidimensional de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI. El análisis econométrico utiliza variables instrumentales para estimar los efectos de la inversión pública sobre las disparidades socioeconómicas y la conflictividad social. Este estudio busca proporcionar evidencia empírica sobre la eficacia de la inversión pública en infraestructura como herramienta para reducir la desigualdad y mitigar conflictos sociales en regiones históricamente rezagadas del Perú, con el objetivo de informar futuras políticas de desarrollo regional.

Palabras clave: Inversión pública, infraestructura, desigualdad socioeconómica, conflictividad social, desarrollo regional.

ABSTRACT

In recent decades, Peru has experienced sustained economic growth, but regional disparities and social conflict persist. Since 2010, the State has increased public investment in infrastructure in lagging regions, seeking to reduce socioeconomic gaps and mitigate social tensions. However, empirical research on its effects on inequality and conflict at the subnational level is limited. This research explores the relationship between increased public investment in infrastructure, the reduction of socioeconomic gaps, and the decrease in social conflict in Cusco, Cajamarca, and Puno from 2012 to 2022. The study is based on two main causal relationships: the positive link between increased public spending on infrastructure and equity in income distribution, and the inverse relationship between lower levels of socioeconomic inequality and lower social conflict.

The methodology employs a multiple case study approach and a panel data econometric model. Data on public investment accrued by the Ministry of Economy and Finance, reports on social conflicts from the Ombudsman's Office, and the Gini index and Multidimensional Poverty Index from the National Household Survey conducted by the INEI are analyzed. The econometric analysis utilizes instrumental variables to estimate the effects of public investment on socioeconomic disparities and social conflict. This study seeks to provide empirical evidence on the effectiveness of public investment in infrastructure as a tool to reduce inequality and mitigate social conflicts in historically lagging regions of Peru, with the aim of informing future regional development policies.

Keywords: Public investment, infrastructure, socioeconomic inequality, social conflict, regional development.

PAPER NAME	AUTHOR
Trabajo_investigacion_8.8.2024_VFinal e nviado a turnitin.docx	MIGUEL ENRIQUE PRIALE UGAS

WORD COUNT	CHARACTER COUNT
40189 Words	235753 Characters

PAGE COUNT	FILE SIZE
150 Pages	1.1MB

SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Aug 8, 2024 11:35 AM GMT-5	Aug 8, 2024 11:41 AM GMT-5

● **16% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 14% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 11% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 8 words)



Delia Munoz

INTRODUCCIÓN

El Perú es un país que ha mostrado un significativo crecimiento económico en los últimos veinte años, teniendo una tasa promedio de crecimiento anual del PBI de 3.7% entre los años 2001 y 2022 (INEI, 2023). Sin embargo, persisten importantes brechas socioeconómicas y de desigualdad entre grupos poblacionales y entre regiones. En 2023 el coeficiente de Gini fue de 0.43, uno de los más elevados de América Latina, mientras que la pobreza monetaria alcanzó al 29% de la población (INEI, 2022). Estas brechas se manifiestan también en términos de acceso a servicios públicos esenciales e infraestructura básica entre zonas rurales y urbanas. De acuerdo con el INEI (2022), la cobertura de agua potable y saneamiento presenta grandes diferencias entre Lima (95%) y regiones como Loreto (69%) o Cajamarca (59%).

En este contexto, la conflictividad social en el Perú es un fenómeno recurrente, manifestándose a través de protestas sociales, huelgas y paros que afectan frecuentemente la actividad económica y el orden público (Defensoría del Pueblo, 2020). Esto se explicaría en parte por las mencionadas brechas socioeconómicas no atendidas.

Tradicionalmente en el Perú, la asignación presupuestal a inversión en infraestructura ha sido insuficiente. El promedio de esta inversión como porcentaje del PBI en la última década ha sido de apenas 3%, por debajo del 5% recomendado para impulsar el desarrollo (ComexPerú, 2022a). Esta situación ha limitado la superación de brechas en el acceso a servicios básicos y conectividad en amplias zonas del país.

En este marco, el trabajo propone como objetivos de la investigación examinar y entender la relación entre los niveles de inversión pública en infraestructura, el cierre de brechas socioeconómicas y una disminución en la conflictividad social. Es decir, cuantificar en qué medida incrementos en la inversión en infraestructura se han traducido históricamente, o podrían traducirse prospectivamente, en mejoras tangibles en términos de desarrollo e inclusión social que reduzcan focos de descontento ciudadano.

No obstante, los estudios que analizan empíricamente esta relación en el contexto peruano son aún escasos. Por ello, la presente investigación busca

aportar evidencia al respecto, examinando el vínculo entre estas variables en las últimas dos décadas y explorando la direccionalidad de sus efectos. La pregunta que orienta esta investigación es ¿Cuál es la relación entre el cierre de brechas en desigualdad por inversión pública en infraestructura y la conflictividad social en el Perú, entre los años 2012 y 2022?

El argumento central del proyecto de investigación es que, un incremento del gasto efectivo, sostenible, focalizado y participativo, en inversión pública en infraestructura en regiones rezagadas del Perú entre 2012 y 2022 habría tenido un efecto positivo reduciendo las brechas y disparidades socioeconómicas en esas regiones. Asimismo, esa menor desigualdad podría haber tenido, bajo ciertas condiciones, una disminución de la conflictividad social en dichas zonas en los últimos años. Para contrastar empíricamente estas relaciones causales propuestas, la investigación plantea un modelo económico con un análisis econométrico con datos de panel, examinando comparativamente las dinámicas recientes de inversión pública, desigualdad y conflictos sociales en las regiones de Cusco, Cajamarca y Puno.

Como objetivo general, se busca analizar el impacto de la inversión pública en infraestructura sobre indicadores de desigualdad socioeconómica y conflictividad social en el Perú en el periodo 2012-2022. De manera específica, estimar econométricamente la relación entre inversión pública en infraestructura, índices de desigualdad y tasas de conflictividad social en el Perú. Asimismo, determinar si existe evidencia de que una mayor inversión en infraestructura se asocia a una reducción en los niveles de desigualdad socioeconómica. De la misma manera, evaluar si los cambios en desigualdad derivados de mayor inversión en infraestructura se relacionan con menores tasas de conflictividad social.

El gasto público en inversión en infraestructura se considera una política primordial para impulsar el desarrollo económico y la inclusión social en los países (Calderón et al., 2022). A través de un mejoramiento en la dotación de capital físico en áreas como transporte, comunicaciones, saneamiento, electricidad e irrigación, la inversión pública en infraestructura puede impactar de manera sustancial al promover la actividad productiva, mejorar la prestación de servicios en sectores sociales y fomentar la integración territorial, especialmente en zonas históricamente rezagadas (Fay et al., 2017).

Considerando esta relevancia, resulta de interés para la política pública analizar el vínculo empírico que existe entre los niveles de inversión en infraestructura de un país y el progreso en términos de bienestar y cohesión social. Sobre todo, en una economía emergente como la peruana, donde la conflictividad social se ha erigido como un factor desestabilizador que responde precisamente al arraigo de amplias brechas socioeconómicas entre grupos de la población (Panfichi y Coronel, 2014).

Sin embargo, los estudios económicos que modelan y cuantifican la relación entre la inversión pública en infraestructura y los indicadores de desigualdad de ingresos, pobreza y conflictividad en el contexto peruano siguen siendo limitados. Con base en la disponibilidad de bases de datos oficiales para el período 2012-2022, esta investigación busca contribuir en esa dirección.

Los resultados que se obtengan permitirán enriquecer la discusión sobre los retornos e impactos distributivos que se pueden esperar de la inversión pública en el Perú en materia de desarrollo inclusivo. Asimismo, se derivarán implicancias útiles para la focalización de la inversión en infraestructura en aquellas regiones y sectores donde ésta pueda tener un efecto más decisivo cerrando brechas y mitigando factores subyacentes a la conflictividad. La idea detrás es que una política adecuada de inversiones puede tener efectos potentes en la desigualdad, y finalmente, una reducción importante de conflictos.

El documento se estructura en tres capítulos. El primero presenta el estado de la cuestión y una revisión bibliográfica sobre inversión pública, desigualdad y conflictos sociales en el Perú. Asimismo, el marco teórico sobre la relación entre estas tres variables aplicable al Perú además describe la metodología y diseño de investigación, las fuentes de datos que se emplean y el modelo econométrico planteado.

En el segundo capítulo elabora una caracterización socioeconómica de cada una de las regiones analizadas y un comparativo entre ellas de los principales indicadores. Luego se estudia la evolución de la inversión pública en infraestructura durante 2012-2022 en cada región y los proyectos priorizados. Seguidamente, se examinan los indicadores de desigualdad, pobreza y acceso a servicios, así como los reportes de conflictividad social para las tres regiones antes y después del boom de inversión pública registrado.

El tercer capítulo presenta los principales hallazgos del análisis realizado para contrastar el planteamiento de investigación. Inicia con estadísticas descriptivas que caracterizan la evolución temporal en la última década de las variables de interés en cada una de las regiones de estudio -Cusco, Cajamarca y Puno-, así como las diferencias sistemáticas encontradas al comparar entre estas unidades territoriales. Seguidamente, se especifica un modelo econométrico de datos panel para evaluar cuantitativamente los efectos de la mayor y tipología de inversión pública en infraestructura materializada entre 2012 y 2022 sobre indicadores de equidad, bienestar y conflictividad social a nivel departamental. De la misma manera, en la sección de discusión se contrastan las evidencias con la planteamiento inicial y literatura previa; se determina un soporte parcial a la relación postulada entre incrementos de inversión pública y mejoras en equidad y gobernabilidad. Asimismo, se comentan limitaciones del estudio y futuras extensiones requeridas para consolidar estas conclusiones

Esta investigación concluye recapitulando el argumento propuesto y el contraste con el marco teórico de la investigación, para verificar la relación entre la desigualdad, inversión pública y conflictividad social en el Perú. Propone en esta línea, algunas recomendaciones de política para la programación, la ejecución y el funcionamiento de los proyectos de inversión pública, que incorpore la dimensión de gobernabilidad, el diálogo y la reducción de conflictos sociales.

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO

En este capítulo, se efectúa un análisis exhaustivo del panorama actual en relación con las disparidades en infraestructura, la inversión pública, la desigualdad y la conflictividad social en Perú y América Latina durante los últimos años. Además, se exploran las teorías y conceptos que ofrecen una comprensión de la interconexión entre estas variables. En este contexto, se examinan en detalle los marcos teóricos, destacando la propuesta teórica explicativa específica para los escenarios de Cusco, Cajamarca y Puno en el período comprendido entre 2012 y 2022. Para concluir, se describen los aspectos metodológicos de la investigación y se presenta la estrategia analítica diseñada para llevar a cabo el estudio.

1.1. Estado de la cuestión

En esta sección se presenta un estado de la cuestión sobre la desigualdad persistente en el Perú, sus múltiples dimensiones y su relación con las brechas de acceso a servicios básicos y la inversión pública en infraestructura. Se analiza cómo estas deficiencias en la provisión de servicios por parte del Estado y la percepción de falta de beneficios tangibles del modelo extractivo para las poblaciones locales se vinculan con la creciente conflictividad social en diversas regiones del país, especialmente los denominados conflictos socioambientales relacionados con actividades mineras e hidrocarburíferas. El estado de la cuestión aborda las manifestaciones regionales de la desigualdad, la insuficiente inversión en infraestructura básica, el rezago en la provisión de servicios públicos y sus implicancias en términos de conflictividad y cuestionamiento al orden social vigente.

1.1.1. Brechas en infraestructura y desigualdad en el Perú

La desigualdad en el Perú persiste como un problema estructural que afecta el desarrollo del país. A pesar del notable crecimiento económico experimentado en las últimas décadas, los indicadores de desigualdad se han mantenido altos y las brechas entre diferentes grupos poblacionales continúan ampliándose. Según datos del INEI (2022), el coeficiente de Gini en el Perú pasó de 0.46 en 2004 a 0.40 en 2022. Si bien muestra una leve mejora, este último

valor sigue ubicando al país entre los más desiguales de América Latina y evidencia una alta concentración del ingreso. Asimismo, en 2022 el decil más pobre experimentó una preocupante concentración del 2% del ingreso total. Esta proporción contrasta notablemente con el decil más rico que acumula el 31% del ingreso total (CEPLAN, 2024).

La pobreza monetaria también se ha mantenido en niveles preocupantes. Aunque el índice de pobreza disminuyó desde un 58.7% en 2004 a 20.2% en 2019 según el INEI, la pandemia de COVID-19 revirtió esta tendencia aumentando la pobreza al 27.5% en 2022, lo que significó un retroceso de 10 años (INEI, 2023; INEI, 2022). Asimismo, la pobreza extrema subió del 2.0% al 5.0% entre 2019 y 2022.

Más allá de las cifras nacionales, la desigualdad en Perú muestra significativas disparidades entre regiones y entre áreas urbanas y rurales. Por ejemplo, según el informe sobre Pobreza Monetaria en el Perú, el ingreso mensual promedio por persona en 2022 fue de S/ 1,089, lo que representa un incremento del 1.4% en relación al año previo, pero una reducción del 9.2% en comparación con 2019 (INEI, 2022). Esta tendencia se dio en un contexto de persistente inflación que afecta negativamente el poder adquisitivo de la población.

Además, al analizar los ingresos por deciles, se evidencia una clara desigualdad. Mientras que los ingresos del decil 1 (menores ingresos) disminuyeron un 1.1% en el año 2022, los del decil 9 aumentaron un 1.1%, y los del decil 10 se incrementaron en un 2.8%. Estas diferencias resaltan la brecha económica en la sociedad peruana, poniendo de manifiesto la necesidad de enfrentar la desigualdad y la vulnerabilidad económica que impactan a gran parte de la población (INEI, 2022).

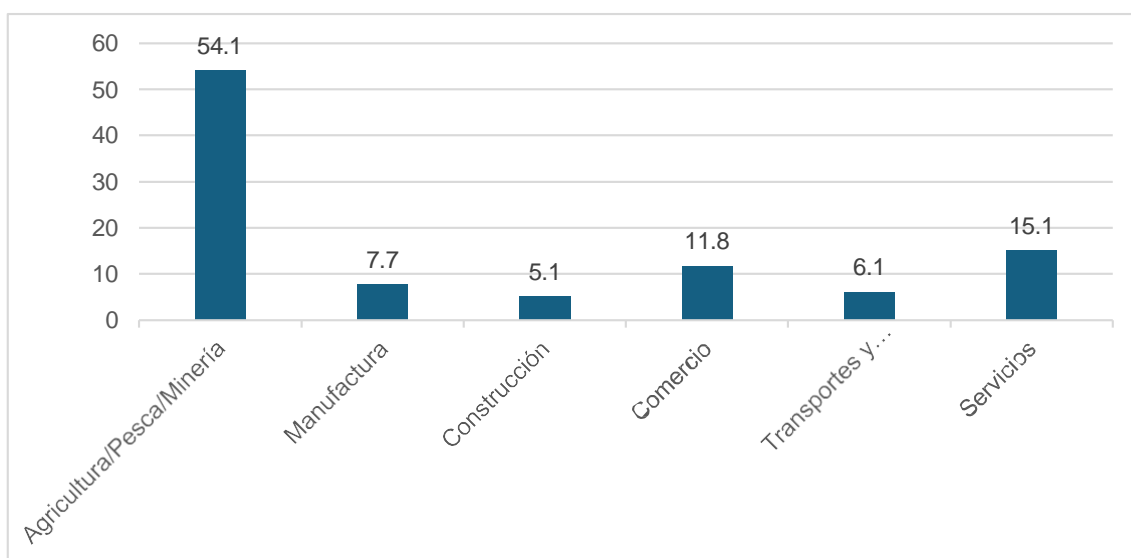
En este contexto, es fundamental destacar la información relacionada con la pobreza extrema, que afecta a los peruanos que no pueden cubrir el costo de una canasta básica de alimentos. Según el INEI (2022), este umbral fue de S/. 226 soles mensuales en 2022. Alrededor de 1 millón 673 mil peruanos forman parte de esta población que enfrenta diariamente los efectos devastadores del hambre, una situación que se agrava en las áreas urbanas. Esto pone en evidencia las deficiencias en las políticas económicas, laborales y sociales, que

dejan a millones de peruanos rezagados, sin esfuerzos suficientes para generar cambios significativos en esta realidad (INEI, 2022).

Estas desigualdades se reflejan en otros indicadores socioeconómicos. Regiones como Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno muestran los porcentajes más altos de población pobre, oscilando entre el 39.4% y el 43.3%. En marcado contraste, Ica destaca como la única región con el menor nivel de pobreza, situándose entre el 3.4% y el 6.8% de su población en situación de pobreza (INEI, 2022).

Estos datos revelan no solo la variabilidad geográfica en los índices de pobreza, sino también disparidades significativas en función del género, área de residencia y nivel educativo. La concentración de la pobreza en las zonas rurales, donde el 41.1% de la población vive en condiciones de pobreza, contrasta con el 24.1% registrado en las áreas urbanas. Asimismo, las cifras de pobreza por sectores productivos en 2019 señalan que el 54.1% se concentra en agricultura, pesca y minería. Mientras que 11.8% en el sector comercio (Gráfico 1).

Gráfico 1.1: Pobreza por sectores en el 2019



Fuente: Francke (2023b). Elaboración propia

El nivel educativo igualmente influye en los índices de pobreza, siendo del 36.8% para aquellos con educación primaria, del 28.3% para los de secundaria y del 11.2% para aquellos con educación superior. La situación de los niños en situación de pobreza se vuelve aún más crítica cuando se examinan sus

condiciones de salud y bienestar. De acuerdo con el INEI (2022), el 42.4% de los niños y niñas entre 6 y 36 meses sufren de anemia, un problema que ha mostrado un incremento en los últimos tres años. Esta problemática alcanza niveles especialmente elevados en algunas regiones del país, con tasas de prevalencia alarmantes, como en Puno con un 69.9%, Cusco con un 57.4%, Huancavelica con un 54.2% y Ucayali con un 53.7%. En contraste, algunas regiones muestran tasas más bajas y moderadas, como Cajamarca con un 28.7%, Lima provincias con un 29.8%, y Tacna con un 32.7%. De manera similar, el porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que padecen desnutrición crónica aumentó, pasando del 11.5% en 2021 al 11.7% en 2022. Además, la tasa de mortalidad infantil en Puno es 3.6 veces mayor que la registrada en Lima.

De otro lado, persisten altas desigualdades económicas por género. La diferencia salarial entre hombres y mujeres es del 26%, mientras que los afroperuanos ganan en promedio 500 soles menos que el ingreso nacional promedio. Asimismo, en 2022, el 27,8% de las mujeres y el 27,2% de los hombres en el país se vieron afectados por la pobreza (Francke, 2023a; INEI, 2022).

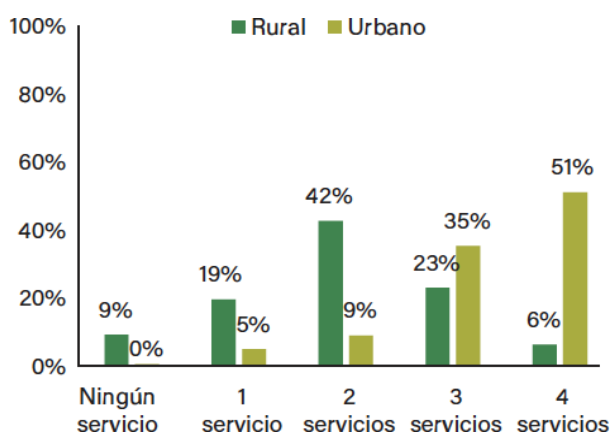
Finalmente, la desigualdad y las brechas en el acceso a servicios básicos entre los peruanos son alarmantes, como revelan las estadísticas. De acuerdo con el INEI, en 2022 la pobreza rural alcanzó el 40% frente al 22% en zonas urbanas. Además, menos de un tercio de los colegios rurales cuenta con servicios de luz, agua y desagüe, mientras que sólo el 5% de hogares rurales tiene computadora, siete veces menos que en ciudades (INEI, 2022).

Según Francke (2023b), sólo la mitad de los hogares pobres tiene desagüe en su vivienda y menos de 30% en pobreza extrema. El hacinamiento afecta al 9,2% de hogares pobres y al 14,5% en pobreza extrema. Si bien el acceso a telefonía móvil es alto en ambos grupos (90,9% y 84,4%), la conexión a internet y tenencia de computadoras muestra una enorme brecha: 14,3% frente a 5,2%, respectivamente (INEI, 2022). Esta exclusión está vinculada a la falta de acción efectiva por parte del Estado. Según Francke (2023a), han sido insuficientes las políticas integradas y de largo plazo para el desarrollo económico en áreas rurales, así como la provisión de servicios básicos e inversión en infraestructura, lo que contribuye a la perpetuación de la pobreza y la exclusión.

En parte, esto indica que la inversión pública no está centrada en cerrar las brechas existentes. Esto resalta el principal problema de la inversión pública en los últimos años: la respuesta estratégica de los diferentes niveles de gobierno no aborda de manera efectiva las necesidades prioritarias de la población.

En esta línea, el Banco Mundial (2023) señala que solo el 40% de los hogares tienen acceso a los cuatro servicios básicos fundamentales: agua potable, saneamiento, electricidad e internet. Sin embargo, este acceso no está uniformemente distribuido. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2022), en 2022, el 24.1% de la población urbana y el 41.1% de la población rural vivían en condiciones de pobreza. Además, el informe técnico del año 2022 reveló que el 48.3% de los hogares en situación de pobreza carecían de acceso a una red pública de desagüe dentro de la vivienda. De estos hogares, el 13.3% utilizaban un pozo séptico, el 3.4% una letrina, el 12.2% un pozo ciego o negro, el 1.2% un río, acequia o canal, y el 14.3% no contaba con ningún sistema de desagüe. Además, el 50.5% de la población no tenía acceso al servicio de agua potable a través de una red pública las 24 horas del día. En cuanto a la electricidad, el 92.2% de los hogares en pobreza no contaban con este servicio de red pública, lo que obligó al 2.8% a utilizar velas y al 0.9% a depender solo de la luz del día. El informe también indica que el 3.8% de la población carecía de alumbrado eléctrico y que el 40.1% no tenía acceso a internet (Gráfico 2).

Gráfico 1.2: Hogares con acceso a un paquete de servicios básicos 2021 (% del total de hogares)



Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAH, 2021)

Esta situación es preocupante, ya que la falta de acceso a servicios básicos también afecta el disfrute de otros derechos fundamentales. Según el informe de la ENAHO (2021), la pobreza extrema afectó al 14.6% de la población en áreas rurales, mientras que en áreas urbanas fue del 2.6%. Al comparar estos datos con los porcentajes de pobreza en el país, se observa un aumento de 2.5 puntos porcentuales en la pobreza extrema en áreas rurales y un incremento de 0.5 puntos porcentuales en áreas urbanas, lo que representa aumentos significativos. Por lo tanto, las tasas de pobreza son considerablemente más altas en las zonas rurales, y la brecha de pobreza en estas áreas es el doble que en las zonas urbanas. Este hecho se refleja en el indicador de brecha de pobreza, que alcanzó el 12.5% en el área rural, en comparación con el 5.8% en el área urbana.

Asimismo, Machado y Toma (2017) encontraron que la inversión pública no solo tiende a aumentar el PBI sino también contribuye a una menor desigualdad —al menos en lo que a desigualdad de ingresos concierne—. La investigación también encontró que la inversión pública no parece ocasionar un *trade off* entre equidad y eficiencia, sino que, por el contrario, tiende a mejorar tanto los resultados macroeconómicos como distributivos.

En este punto, resulta complicado prever si las disparidades empezarán a reducirse de manera significativa en las próximas generaciones. Ciertas desigualdades se convierten en obstáculos que atrapan a las personas, reproduciendo su condición de pobreza y transmitiéndola a las generaciones siguientes (Remy, 2015). En efecto, la infraestructura juega un papel esencial en la reducción de la pobreza, tanto a corto como a largo plazo, al mejorar la productividad laboral, reducir los costos domésticos y ampliar las oportunidades (Aparicio et al., 2011). Es crucial abordar la desigualdad, ya que limita el crecimiento económico al restringir el rendimiento productivo de ciertos sectores de la sociedad (Stezano, 2021). Ignorar estos problemas significaría, además, desperdiciar las habilidades de ciertos grupos, resultando en una pérdida de talento, eficiencia y contribuciones al desarrollo económico (ComexPerú, 2019). Las desigualdades en el acceso a educación y salud, al disminuir las capacidades y oportunidades, no solo tienen efectos localizados, sino que

también imponen restricciones significativas a la innovación y a los incrementos de productividad (CEPAL, 2018).

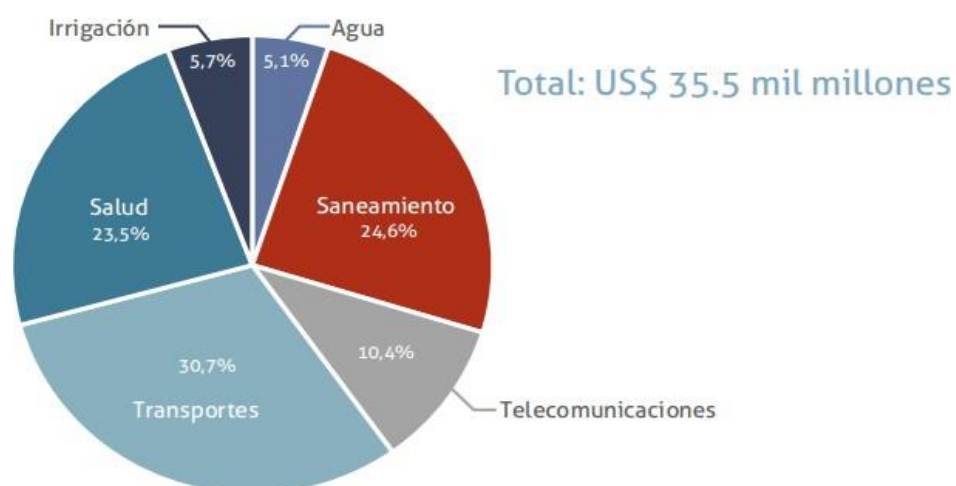
Ahora bien, el Perú actualmente enfrenta problemas de falta de liderazgo económico sólido, inversiones estancadas y una creciente inestabilidad política. Situación que no solo afecta nuestra competitividad en el mercado, restringiendo el crecimiento económico, sino que, aún más preocupante, ha impedido que muchos peruanos tengan acceso a servicios básicos de calidad en tiempos tan críticos como la más grande crisis sanitaria en tiempos modernos (ComexPerú, 2022b; Luna, 2023). Servicios como electricidad pública, suministro de agua potable, saneamiento, educación primaria y conectividad vial, por mencionar algunos, todavía son inaccesibles para una parte significativa de la población rural del país (Luna, 2023; ComexPerú, 2019). Esta preocupante situación de nuestro sector infraestructura, se ve evidenciada en el Índice de Competitividad Global 2019, el cual posicionaba al Perú en el puesto 88 de 141 países. Así pues, incluso en un contexto prepandémico, cuando el Perú se jactaba de un crecimiento anual del PBI del 4.5%, el más alto en toda la región, el Foro Económico Mundial resaltaba un atraso significativo nuestro en cuanto a la conectividad del sector Transportes, la accesibilidad del sector Energía y el suministro de agua potable del sector Saneamiento (Instituto Peruano de Economía, 2023).

En el estudio “Brecha de Infraestructura de Acceso Básico 2019-2038”¹, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (2020), se señala que la brecha de infraestructura en el Perú para un corto plazo (5 años), denominada como brecha al “Perú Potencial”, es de 35.5 mil millones de dólares (Bonifaz et al., 2020). Es decir, se requeriría de S/. 117,183 millones para, en un plazo de 5 años, lograr el nivel básico de infraestructura que correspondería a un país con características socioeconómicas y geográficas similares a las de Perú. De esta inversión, el 31% se destinaría al Sector Transportes, el 25% al sector Saneamiento, el 24% al sector Salud y el 10% a l sector Telecomunicaciones (Gráfico 3). En cuanto a la brecha en el acceso a infraestructura básica a largo plazo (20 años), se requeriría una inversión de 110.1 mil millones de dólares para

¹ El estudio toma en cuenta los efectos de la pandemia en nuestra economía.

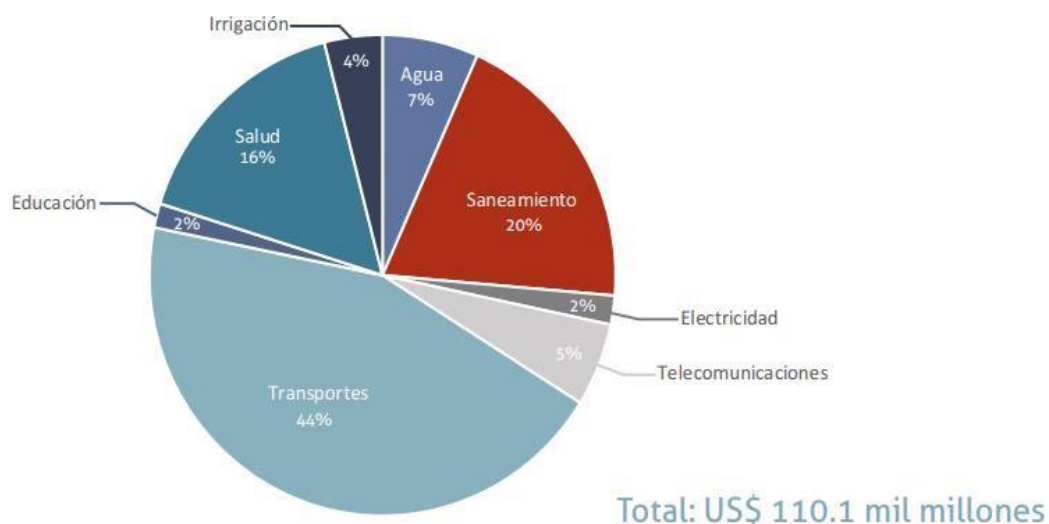
alcanzar el nivel de infraestructura de países desarrollados². En este caso, el 44% de esta inversión se enfocaría en el sector de Transportes, el 20% en Saneamiento, el 26% en Salud y el 7% en Agua (Gráfico 4) (Bonifaz et al., 2020).

Gráfico 1.3: Brecha de inversión pública para el acceso a Infraestructura Básica a Corto Plazo (%)



Fuente: Bonifaz et al., 2020.

Gráfico 1.4: Brecha de inversión pública para el acceso a Infraestructura Básica a Largo Plazo (%)



Fuente: Bonifaz et al., 2020.

² Se toma como referencia a países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los países de la Alianza del Pacífico.

Asimismo, es importante notar que la mayor parte de esta brecha se encuentra condensada en áreas rurales y subsectores particulares. En este sentido, el estudio revela que un 89% de la diferencia en términos de agua y saneamiento a largo plazo se concentra en las zonas rurales de Perú. Por otro lado, en el sector de telecomunicaciones, el 68.7% de la brecha en acceso básico a largo plazo se refiere a la telefonía móvil, mientras que, en el sector del transporte, la brecha se explica principalmente por la falta de inversión en carreteras (65.6%) y ferrocarriles (28.7%) (Bonifaz et al., 2020). En efecto, los resultados mencionados previamente señalan que existe un largo trayecto por delante. Para los autores, la brecha no solo representa los resultados del acceso básico desigual que vivimos en nuestro país. Va mucho más allá. Está vinculada con el desarrollo e implementación de mecanismos que mejoren la calidad de los servicios públicos, optimicen la previsión y planificación multianual de recursos, perfeccionen la gestión y control de proyectos de inversión pública, y fomenten una coordinación constante entre el sector público en sus distintos niveles y el sector privado. Así pues, es indispensable crear un ambiente estable y favorable para la inversión en el país con el objetivo de convertirnos en un país más competitivo y con una mejor calidad de vida para sus habitantes.

No obstante, si bien el efecto de la pandemia ha contribuido al agravamiento de las brechas, el estado ruinoso de la infraestructura en el Perú, y en general en América Latina y el Caribe era altamente conocido desde el siglo pasado. En este sentido, Pessino et al., (2018) tratan de explicar el porqué de la calidad tan inferior de la infraestructura que manejamos en ALC: hallando que (i) no se realiza una correcta evaluación de proyectos ex ante y ex post; (ii) no se elaboran planes de infraestructura nacionales integrales (planes específicos por sector y se desconocen las interdependencias los sistemas de infraestructura); (iii) la existencia de sobrecostos como resultados no naturales de la construcción de infraestructura (transparencia de procesos) y, (iv) alta intensidad de barreras burocráticas (Pessino et al., 2018).

De igual manera, Pessino et al. (2018) señalan que los gobiernos latinoamericanos enfrentan problemas tanto de ineficiencia técnica como de ineficiencia en la asignación de recursos. Las consecuencias son graves. Según el Barómetro de las Américas, sólo el 19% de peruanos estaba satisfecho con la

democracia en 2023, reflejando la desconfianza hacia las instituciones democráticas y tendencias hacia la violencia y autoritarismo (IEP; 2023; Ojo Público, 2022).

Frente a ese panorama, la ausencia de un Estado garante de derechos y servicios básicos, sumado a la percepción de desconfianza en las instituciones hace plausible la conflictividad social. Como advierte Figueroa (1995), una crisis distributiva se genera cuando la pauperización de las masas sobrepasa cierto umbral de tolerancia social. Las variaciones en la distribución del ingreso tienen un impacto en las transformaciones cualitativas en el funcionamiento de la sociedad. En ese sentido, la creciente pauperización absoluta y relativa de amplios sectores de la población peruana derivaría en cuestionamientos al orden social, conflictividad social y la falta de reconocimiento de las reglas institucionales formales.

Un estudio reciente realizado por IPSOS sobre desigualdad en América Latina examinó las opiniones de 360 líderes de 14 países de la región respecto a las causas de los conflictos sociales en 2020 (IPSOS, 2020). Los resultados muestran que el 67% de los encuestados considera que la desigualdad social es una de las principales causas en América Latina, mientras que la corrupción, identificada por el 63%, ocupa el segundo lugar. En el caso específico del Perú, la corrupción ocupa el primer lugar como causa de conflictos según la percepción de los líderes encuestados, con un 69%. Le sigue la desigualdad social, mencionada por el 65%. En tercer lugar, está la debilidad institucional, considerada causal por el 37%.

1.1.2. Radiografía de los conflictos sociales y brechas de servicios en el Perú

Los conflictos sociales son una realidad cotidiana en el Perú. De acuerdo con los datos de la Defensoría del Pueblo, los denominados "conflictos socioambientales" son los más frecuentes, llegando a representar el 62.3% del total de conflictos registrados. Dentro de este tipo, el subtipo relacionado con la minería es el más numeroso, alcanzando el 67.2% (Defensoría del Pueblo, 2023).

Esta alta conflictividad socioambiental, especialmente vinculada a la minería, está relacionada con la gran expansión que ha tenido la industria extractiva en las últimas décadas, penetrando en territorios cada vez más frágiles y afectando a poblaciones más vulnerables. Entre 1993 y 1997, por ejemplo, la superficie asignada para exploración minera en el país se multiplicó de 4 a 24 millones de hectáreas (Paredes, 2017).

Según Arce (2017), uno de los factores determinantes de la conflictividad social en el Perú es la falta de cumplimiento de compromisos y mejora en el acceso a servicios en comunidades vinculadas a la industria extractiva, en un contexto de marcada heterogeneidad productiva entre regiones. El crecimiento económico de las últimas décadas ha sido sumamente asimétrico. Mientras algunos sectores vinculados a la exportación de materias primas se han expandido enormemente, gran parte del territorio nacional se mantiene con actividades de subsistencia y niveles alarmantes de pobreza. Así, la minería y los hidrocarburos representan el 60% de las exportaciones, pero sólo el 15% del PBI y 1.2% del empleo nacional, según datos de la ENAHO en 2017 (Gráfico 5).

Gráfico 1.5: Productiva y PEA Ocupada según industria productiva (2007-2017)

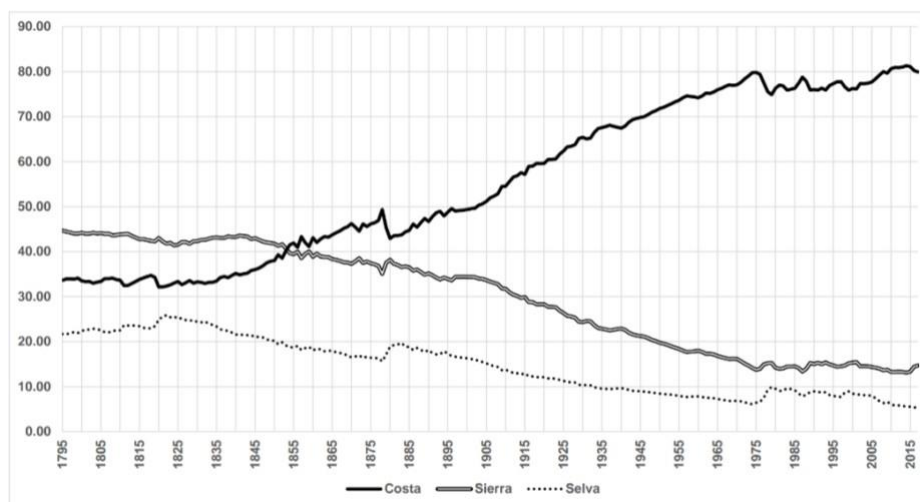
Rama por tipo de productividad	VA/PEA ocupada 2007	PEA ocupada 2017	% PEA ocupada 2017
Productividad alta	203305	381076	2.3%
Minería y extracción de hidrocarburos	224546	204560	1.2%
Finanzas	2022861	140622	0.8%
Electricidad y agua	114366	35894	0.2%
Productividad media	26952	3966265	23.7%
Industria	30136	1591200	9.5%
Construcción	23816	980020	5.9%
Transportes y comunicaciones	23682	1395045	8.3%
Productividad baja	10511	12412363	74.1%
Servicios sociales y personales	18701	5041789	30.1%
Venta al por mayor y menor	11107	3234311	19.3%
Agricultura, caza, silvicultura y p	4620	4136263	24.7%

Fuente: Cavero, 2017.

Esta dualidad se expresa también entre Lima y el resto de las regiones. La capital concentra más del 80% del PBI nacional, con sectores densos en tecnología y servicios, mientras otras zonas permanecen dependientes de actividades extractivas primarias con escaso valor agregado (Seminario et al., 2019). Los territorios donde operan grandes proyectos mineros o de

hidrocarburos se caracterizan por abundantes recursos naturales, pero con índices de alta conflictividad con demandas de mayores servicios y el derecho a la consulta previa (Arce, 2017). Así, como mencionan Seminario et al., (2019), la posibilidad de que una región que experimentó pobreza en 1795 mantenga esa condición hasta el año 2017 es del 94%, en comparación con una probabilidad del 95% de que una región que ya era rica en 1795 continúe siéndolo en el mismo período (Gráfico 6).

Gráfico 1.6: Distribución regional del PIB: Costa, Sierra y Selva, 1795-2017 (%)

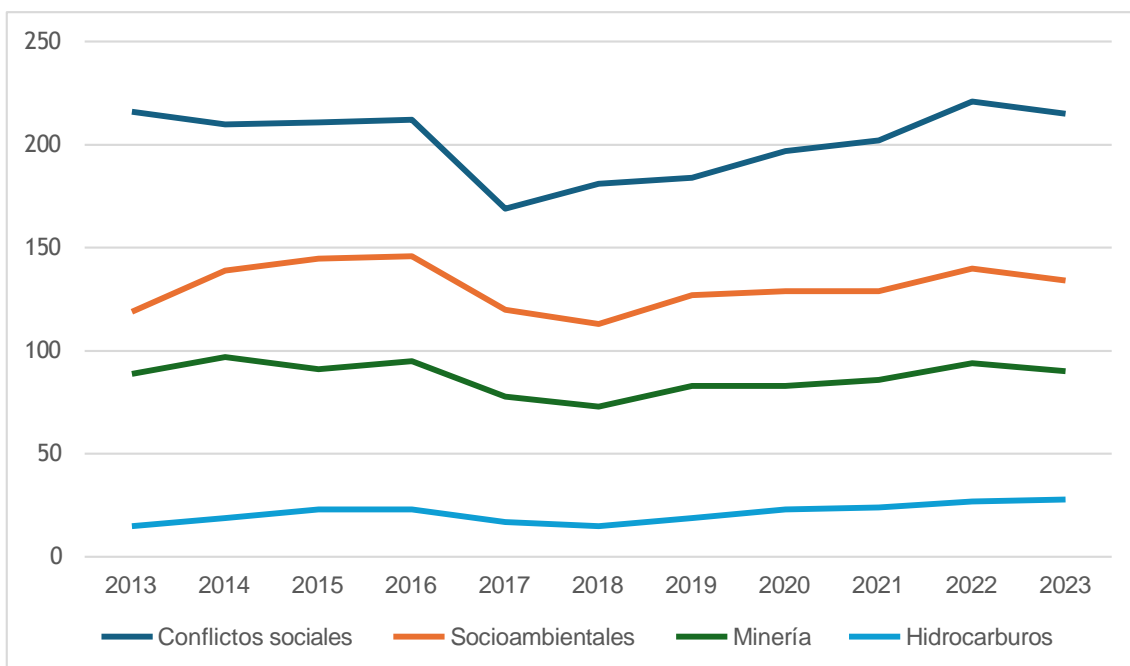


Fuente: Seminario et al., 2019

Cuando las comunidades locales perciben que no existen beneficios tangibles de la explotación de recursos en sus territorios, mientras observan enormes ganancias de las empresas y altos bonos para funcionarios regionales, se intensifican los cuestionamientos hacia el modelo extractivo (Arce, 2017; Paredes, 2017). Por ello, el manejo de conflictos socioambientales en el Perú requiere estrategias integrales que atiendan las profundas desigualdades regionales en términos de acceso a la riqueza y la persistencia de amplios sectores del país en la pobreza y el atraso económico.

En cuanto a la cantidad de conflictos, los datos de la Defensoría del Pueblo para el periodo 2013-2023 muestran un crecimiento sostenido en el número de conflictos socioambientales y específicamente vinculados a la minería en el país (Gráfico 7).

Gráfico 1.7: Conflictos sociales en Perú relacionados con el medio ambiente, la minería y los hidrocarburos (2013-2023)



Fuente: Defensoría del Pueblo, 2013-2023. Elaboración propia.

Respecto a los tipos de conflictos, la gran mayoría están relacionados con los impactos ambientales y sociales de los proyectos mineros, tanto en la fase de exploración como de explotación. Las principales fuentes de tensión son el uso y posible contaminación de fuentes de agua, los pasivos ambientales, la contaminación por relaves, polvo y químicos, así como los impactos en la salud de las poblaciones (Defensoría del Pueblo, 2023).

En cuanto a la ubicación de los conflictos, las regiones con mayor número de casos reportados han sido Loreto, Cusco, Apurímac, Puno, Piura y Áncash. Esto se explica por la gran cantidad de proyectos y concesiones mineras e hidrocarburíferas existentes en dichos territorios, así como por sus frágiles ecosistemas y presencia de poblaciones indígenas y campesinas altamente vulnerables. Las demandas surgidas en los conflictos sociales de diciembre de 2023 indican que el 31% de ellas corresponden a la competencia de los gobiernos regionales o locales. Estas demandas se centran principalmente en la provisión de servicios públicos, la transparencia e integridad, la protección del medio ambiente y la erradicación de actividades ilegales, entre otros temas.

1.2. Revisión de literatura

En esta sección se presenta una revisión de la literatura sobre la relación entre desigualdad, inversión pública en infraestructura y conflictividad social en el Perú. Se examinan diversos estudios que analizan desde una perspectiva conceptual y empírica los vínculos entre estos tres fenómenos. Se abordan las distintas dimensiones de la desigualdad (económica, política, social) y cómo estas se vinculan con el surgimiento de conflictos, especialmente en contextos extractivos y zonas con brechas de desarrollo. Asimismo, se revisa la literatura existente sobre los impactos de la inversión pública en infraestructura en la reducción de desigualdades socioeconómicas y sus potenciales efectos en la mitigación de conflictividad social. Si bien se identifican vacíos y limitaciones en los estudios previos, la revisión sugiere una relación entre mayores niveles de inversión en infraestructura, cierre de brechas de desigualdad y disminución de conflictos, especialmente a nivel regional y local.

1.2.1. Sobre inversión pública y desigualdad

Considerando el impacto de la desigualdad en la sociedad y la economía, ¿cómo se puede intervenir para cerrar las brechas a través de la inversión pública? Por 'brecha' entendemos una demanda no satisfecha, ya sea en términos de cobertura o de calidad de los servicios proporcionados por la infraestructura pública, como movilidad, transitabilidad, saneamiento, riego, electrificación y comunicaciones. Además de sus efectos sobre la productividad y, por ende, el crecimiento económico, la inversión pública también debería contribuir a una mayor igualdad de oportunidades para los ciudadanos y a una reducción de la desigualdad de ingresos (Machado y Toma, 2017).

Jaramillo & Alcázar (2022) identificaron al capital físico y humano como el canal a través del cual la inversión pública reduce la desigualdad. Ellos explican que, en una economía simplificada, los hogares cuentan con dos tipos de recursos (capital físico y trabajo). Dotaciones que son utilizadas en la producción

de bienes y servicios para luego convertirse en ingresos (salarios y dividendos). Ahora bien, el aporte de una inversión pública toma relevancia cuando la productividad del capital físico y humano se extiende a largo plazo. Zhang, Wang y Chen (2012) argumentan que el gasto público debería tener un impacto progresivo en la economía. En efecto, el gasto público influye en la economía de dos maneras: i) contribuyendo al crecimiento económico como parte de la demanda agregada, y ii) mejorando la eficiencia (productividad) del capital físico en empresas y hogares (Zhang et al., 2012). Por otro lado, Becker (2007) señala que los proyectos de inversión pública que incluyen mejoras en los sectores de salud o educación favorecen la acumulación de capital humano, lo cual tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico al aumentar la productividad y eficiencia de los individuos.

Aunque la inversión pública puede mejorar la dotación de recursos en los hogares y aumentar la capacidad productiva (lo que se traduce en una mayor producción económica), este crecimiento económico no garantiza una mejor distribución del ingreso. En otras palabras, la inversión pública por sí sola no genera efectos redistributivos (Kuznets, 1955). Jaramillo y Alcázar (2022) descubrieron que, para América Latina y el Caribe, se requeriría una inversión significativa para lograr una reducción mínima de la desigualdad. Además, indicaron que el impacto de la inversión pública varía según el nivel de gobierno: en el caso peruano, la inversión pública a nivel nacional y municipal tiene un impacto limitado en la reducción de la desigualdad, mientras que en los gobiernos regionales, el efecto es casi nulo. Según los autores, esta baja efectividad se debe a dos problemas institucionales principales: (1) el sesgo urbano, donde las brechas y necesidades son menores, y (2) las deficiencias en los modelos de implementación, que se centran excesivamente en la construcción de obras y descuidan su implementación efectiva, lo que impide proporcionar los mejores servicios a la población (Jaramillo & Alcázar, 2022). Además, la efectividad de los proyectos está estrechamente ligada a la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales (ONU, 2009). En este sentido, fortalecer las capacidades y proporcionar acompañamiento técnico por parte del Gobierno central, especialmente a las municipalidades más pobres y pequeñas, son factores clave para la efectividad de la inversión y para determinar

la regresividad o progresividad de las políticas de gasto (Jaramillo & Alcázar, 2022).

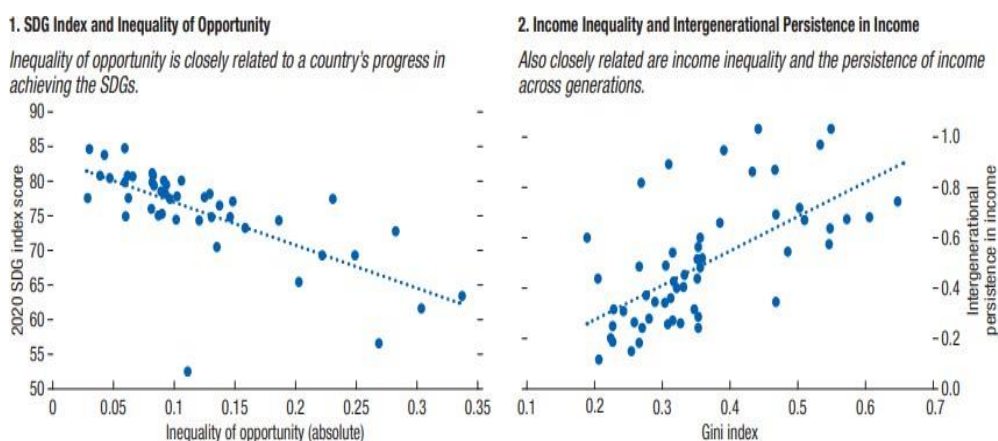
La inversión pública es esencial, especialmente en un contexto de crisis. El Informe Monitor Fiscal octubre 2020 del Fondo Monetario Internacional (FMI) mostró que el aumento del gasto público en las economías avanzadas y emergentes contribuyó a reactivar la actividad económica después del colapso más abrupto y profundo de la economía mundial contemporánea provocado por el Covid-19 (FMI, 2020). Así pues, el Fondo Monetario Internacional afirma que, en economías y mercados emergentes, un incremento en la inversión pública equivalente al 1% del Producto Bruto Interno (PBI) tiene el potencial de aumentar el PBI en un 2.7%, impulsar la inversión privada en un 10% y, crear entre 20 y 33 millones de empleos³, directa e indirectamente, siempre y cuando dicho gasto público sea de alta calidad y no se vea afectado negativamente por la carga actual de la deuda pública y privada, lo que podría disminuir la respuesta del sector privado a estos estímulos. En efecto, el multiplicador del gasto puede tener efectos progresivos particularmente altos cuando la incertidumbre macroeconómica es alta: la inversión pública es fundamental para el crecimiento económico y la generación de empleo, lo cual es esencial para la recuperación de un país, especialmente en un contexto tan crítico como la pandemia.

Sin embargo, la pandemia no solo ha subrayado la necesidad de un gasto público eficiente para la recuperación de un país, sino que también ha expuesto las desigualdades y condiciones de pobreza preexistentes en economías tanto avanzadas como emergentes. Además, las desigualdades han intensificado el impacto de la pandemia, y la crisis ha amplificado estas desigualdades. En particular, la pandemia agravó las disparidades en el acceso a servicios básicos como atención sanitaria, educación de calidad e infraestructura digital, lo que puede perpetuar las brechas de ingresos a lo largo del tiempo. Por esta razón, durante la crisis, las políticas gubernamentales se han enfocado en proporcionar oportunidades equitativas a todos, tratando de reducir las brechas en el acceso a servicios públicos de calidad.

³ El gasto público tiene la capacidad de crear, de manera directa, entre 2 y 8 puestos de trabajo por cada millón de dólares gastado en infraestructura, y entre 5 y 14 empleos por cada millón invertido en investigación y desarrollo, energía renovable y edificios eficientes (FMI, 2020).

En efecto, el Informe Monitor Fiscal Abril 2021 del Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló que los países con un acceso superior a la atención médica experimentaron tasas de mortalidad más bajas, que los países con mayores niveles de pobreza relativa registraron más casos de infección, y que el número de niños que dejaron la escuela en países emergentes fue de 6 millones —y se prevé que los niños que no completan su educación enfrenten disminuciones permanentes en sus ingresos y en sus oportunidades en la vida. Así pues, es imperativo que los hacedores de política, a fin de brindar respuestas políticas gubernamentales eficientes, reconozcan que varios aspectos de la desigualdad —los ingresos, la riqueza y las oportunidades— se refuerzan mutuamente (Gráfico 8) (FMI, 2021).

Gráfico 1.8: Relaciones entre diversos aspectos de la desigualdad



Fuente: Informe Monitor Fiscal abril 2021 (FMI, 2021)

En el contexto nacional peruano, el Reporte sobre la Eficiencia del Gasto Público para 2022 reveló que la inversión pública alcanzó los S/ 46,589 millones, marcando un aumento del 19% en comparación con el período anterior. Este incremento se debe en gran medida al desempeño de los gobiernos subnacionales. A continuación, se ofrece un análisis más detallado de las inversiones públicas, desagregado por niveles territorial (nacional, regional y local).

A nivel nacional, el Gobierno peruano invirtió S/ 16,838 millones, lo que representa un aumento del 2.7% respecto al año anterior, con una ejecución presupuestal del 91%, la más alta entre los tres niveles de gobierno. En el ámbito regional, los Gobiernos regionales ejecutaron S/ 9,247 millones en proyectos, lo que implica un aumento del 31.4% en comparación con 2021, estableciendo un récord histórico en inversión pública regional. Sin embargo, el informe también señaló que cuatro regiones no gastaron ni la mitad de sus presupuestos: Huánuco (32%), Cajamarca (41%), Áncash (45%) y Tumbes (48%). En contraste, Apurímac y Tacna lideraron en ejecución de inversiones, con avances del 91% y 88%, respectivamente (Gráfico 07).

Finalmente, a nivel local, los Gobiernos locales también lograron un récord en la ejecución de inversiones, con un total de S/ 20,504 millones ejecutados, un 31% más que en 2021. No obstante, su avance fue del 63%, el menor entre los niveles de gobierno.

Durante 2022, el país enfrentó una crisis política persistente a nivel del Gobierno central, lo cual tuvo un impacto en el comportamiento del gasto público. Al cierre del año, el gasto público total alcanzó los S/ 210,182 millones, lo que representa un aumento del 5.3% respecto al año anterior (2021) (ComexPerú, 2023). Los sectores con mayores fondos no utilizados fueron transporte y educación, con un monto no ejecutado de S/ 6,160 millones y S/ 3,475 millones, respectivamente. Estos fondos no utilizados equivalen a la construcción de aproximadamente 1,381 kilómetros de carretera asfaltada y a la educación de más de 163 mil niños (ComexPerú, 2023).

En términos globales, Perú mejoró su posición en el ranking mundial de gasto público, ascendiendo del puesto 57 en 2021 al puesto 54 en 2022. Sin embargo, es más relevante considerar el gasto público en relación con el PIB. En este aspecto, Perú ocupa la posición 149 de 192 países en términos de gasto público como porcentaje del PIB. En 2022, el gasto público per cápita en Perú fue de S/ 6,400, un incremento de S/ 900 en comparación con los S/ 5,400 gastados en 2021. Si comparamos con diez años atrás, cuando el gasto público per cápita era de S/ 4,200, Perú actualmente ocupa el puesto 102 de 192 países analizados en el ranking de gasto público per cápita.

La pregunta que emerge es: ¿cuál es la contribución de la infraestructura económica a la creación de riqueza, al crecimiento y al desarrollo económico?

Perrotti y Sánchez (2011), en su investigación sobre la brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe, examinaron la evolución de las inversiones en los cuatro sectores principales de infraestructura económica: energía, transporte y telecomunicaciones, y agua y saneamiento. Su estudio indica que se requeriría una inversión anual equivalente al 6.2% del PIB, lo que representa aproximadamente 320,000 millones de dólares (según datos de 2012), para lograr un efecto progresivo del gasto público.

No obstante, en la práctica, los sectores de infraestructura están interrelacionados y la dinámica de un sector impacta a los demás. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2014) sostiene que los análisis aislados realizados por Perrotti y Sánchez ofrecen resultados incompletos. De acuerdo con la CEPAL, los cuatro sectores de infraestructura interactúan de manera cada vez más estrecha, generando sinergias que manifiestan efectos de complementariedad y sustitución. Por ejemplo, en ciertos sistemas de peaje en redes viales, se observa una complementariedad entre las telecomunicaciones y el transporte. Adicionalmente, la mejora en el transporte en áreas remotas puede propiciar el desarrollo de nuevos asentamientos, lo que incrementa la demanda de servicios tales como agua, electricidad y telecomunicaciones. Las preocupaciones ambientales también pueden inducir cambios en la matriz de transporte, reduciendo la dependencia de vehículos de combustión fósil y fomentando el uso de transporte eléctrico o bicicletas (Lardé & Sánchez, R., 2014).

1.2.1.1. El gasto público en infraestructura y cierre de brechas

Los autores Fay et al., (2017) exponen que América Latina y el Caribe (ALC) no tiene la infraestructura que necesita o merece según su nivel de ingreso. Asimismo, afirman que el nivel de infraestructura de América Latina y el Caribe es deficiente respecto a lo necesario para promover la integración social y lograr un mayor nivel de crecimiento y prosperidad. En este sentido, los autores se enfocan en que se debería aumentar el gasto público a fin de cerrar esta brecha de inversión en infraestructura teniendo en cuenta tres puntos: i) el

desempeño de América Latina y el Caribe en infraestructura varía por país y por sector; ii) nos deberíamos enfocar en la brecha en el servicio en lugar de la brecha de inversión: es decir, que ante la pregunta “¿cuánto se necesita?”, la respuesta siempre debería ser “¿para qué?” —cuya respuesta, a su vez, debe estar dada por las metas de desarrollo económico y los objetivos sociales y medioambientales de cada nación, además de sus preferencias sobre el rol que debe desempeñar la infraestructura y otras inversiones para lograr dichas metas—, y ii) el enfoque sobre la brecha en inversión debería concentrarse en obtener más recursos.

Sin embargo, Fay et al. (2017) también atestigua que cerrar la brecha en el servicio no es ni debería implicar únicamente aumentar el gasto público. Existen otras dos maneras en que la brecha en el servicio puede reducirse e incluso cerrarse: asegurándose que el gasto esté bien orientado y que sea eficiente. De manera similar, Guild (1998) sostiene que la inversión en infraestructura tiene impactos tanto desde la perspectiva de la oferta, con una mayor disponibilidad de factores de producción, como desde la perspectiva de la demanda, al facilitar el acceso a los mercados. Además, el autor identifica tres tipos de impactos derivados de la inversión en infraestructura: sectoriales (encadenamientos), sociales (ingreso, acceso y consumo) e interregionales (equidad o divergencias entre regiones).

Así entonces, la infraestructura económica representa un insumo de capital fundamental para la producción y generación de riqueza, además de ser un elemento necesario en todas las etapas de desarrollo de las economías (Jaramillo & Alcázar, 2022; Arteaga et al., 2019). Por otro lado, es importante también que la infraestructura no quede rezagada en el tiempo. La infraestructura debe cambiar y modernizarse a medida que un país se desarrolle: las preocupaciones ambientales y el cambio climático traen consigo nuevos obstáculos, pero también nuevas oportunidades (Fay et al., 2017). En este sentido, autores como Aparicio, Jaramillo y San Román (2011) indican que la inversión en infraestructura tiene un impacto significativo en la disminución de la pobreza y las disparidades regionales. No obstante, esta progresividad teórica del gasto público no se ve respaldada por la data —o al menos no en el impacto deseado.

En conclusión, el hallazgo principal que se rescata en los diversos estudios es que, si bien el aumento en la inversión pública impulsa la actividad económica, existen diversos factores que limitan el potencial redistributivo, como deficiencias en la focalización, problemas de implementación de los proyectos de inversión, limitaciones en la gestión de gobiernos locales, entre otros (Regjo et al., 2022).

Por lo tanto, se requieren mejoras en la eficiencia del gasto público en infraestructura, tanto en la orientación a las poblaciones con mayores rezagos, como en los procesos de ejecución y sostenibilidad de los proyectos (Regjo et al., 2022; Podestá, 2020; Armendáriz et al., 2021; Arteaga et al., 2019). El aumento de la inversión por sí solo parece tener un efecto progresivo muy marginal en la práctica. Se necesitan intervenciones integrales que alineen el cierre de brechas de infraestructura con resultados tangibles en términos de inclusión social y productiva (Arteaga et al., 2019).

1.2.2. Sobre desigualdad y conflictividad

La relación entre desigualdad y conflictos sociales es un área de estudio crucial en ciencias sociales. Esta revisión examina cómo las dinámicas de poder, distribución de recursos, y reconocimiento étnico y racial influyen en la aparición y naturaleza de los conflictos sociales. Considerando esto, es posible dividir la literatura en tres cuerpos teóricos que tratan de responder a la pregunta cuál es la relación entre desigualdad y conflictos sociales. Por un lado, la literatura enfocada en la desigualdad económica. Esta rama de la literatura explora cómo la distribución desigual de la riqueza y los recursos económicos contribuyen a la generación de tensiones y conflictos dentro de una sociedad. Por otro lado, la literatura sobre desigualdad política y poder. Esta área de estudio se centra en cómo la desigualdad en la distribución del poder político y la representación influye en la emergencia de conflictos sociales. Dentro de este cuerpo se examina el papel de las instituciones en la administración del poder y la influencia de la corrupción y la exclusión política en la generación de descontento social. Por último, la literatura sobre desigualdad social y reconocimiento. Esta vertiente se enfoca en la desigualdad social basada en la etnicidad, raza, religión, género,

y la exclusión de ciertos grupos de la participación social y económica marca tipos de conflictos sociales.

1.2.2.1. Desigualdad Económica y Conflictos Sociales

La perspectiva explicativa que facilitó un entendimiento más profundo de los conflictos sociales y civiles se centró en el análisis de la distribución del ingreso, el desempleo y las políticas estatales dentro del contexto de la globalización económica (OXFAM, 2019).

En primer lugar, desde una perspectiva global, los estudiosos que examinan la relación entre desigualdad y conflictos sociales convergen en sus argumentos, aunque desde diferentes perspectivas metodológicas y contextuales (Miller et al. 2020, Brahmachari 2019; Brathwaite et al., 2016; Joko, 2017). Brahmachari (2019) presenta un análisis integral, enlazando la globalización económica y las políticas neoliberales con un incremento en la desigualdad y los conflictos civiles, enfatizando que las desigualdades van más allá de la mera disparidad de ingresos. Esta línea de investigación se complementa con Brathwaite et al. (2016), quienes, mediante un enfoque de variables instrumentales, establecen una relación causal entre la pobreza y los conflictos civiles, desafiando las teorías convencionales centradas en las quejas políticas. Paralelamente, Joko (2017) utiliza un análisis de regresión de datos de panel para demostrar cómo un aumento en la disparidad de ingresos en Indonesia conduce a más conflictos sociales. A pesar de las diferencias en los enfoques metodológicos y los contextos específicos, estos estudios colectivamente resaltan un consenso emergente: la desigualdad económica y la pobreza son factores cruciales en la génesis de conflictos civiles, subrayando la importancia de abordar estas cuestiones para la estabilidad social y política (Miller et al., 2020; OXFAM, 2019).

Desde una mirada en América Latina, Haslam y Ary Tanimoun (2016) se enfocan en el conflicto entre empresas mineras y comunidades locales en América Latina, utilizando un análisis estadístico basado en un conjunto de datos original de 640 propiedades mineras. Los autores examinan las causas y consecuencias de los conflictos locales, a diferencia del enfoque en la “maldición

de los recursos” a nivel nacional, que ha dependido en gran medida del análisis cuantitativo. El objetivo es evaluar cuantitativamente las principales afirmaciones causales de la literatura sobre los determinantes de conflictos sociales en comunidades afectadas por la minería. Se identifican tres planteamientos principales: las características de las empresas y sus propiedades, las características socioeconómicas de la población circundante y las características socioambientales. Su análisis revela que tanto las preocupaciones distributivas como las de subsistencia son válidas y generalizables, destacando la importancia de la escasez de oportunidades económicas como lógica subyacente a los conflictos entre empresas y comunidades.

En esa misma línea, uno de los primeros estudios que aborda los determinantes económicos y sociopolíticos de los conflictos socioambientales en el Perú es el realizado por Castro (2013). El autor examina los conflictos socioambientales en el país, señalando que el significativo crecimiento económico experimentado en los últimos años no se ha traducido necesariamente en un incremento del bienestar para la población, particularmente en las zonas afectadas por la minería. A pesar de una reducción en las tasas de pobreza, los conflictos sociales han aumentado, impulsados por las consecuencias económicas y sociales del modelo de mercado predominante. Este estudio se centra en la elaboración de una tipología de distritos afectados por conflictos socioambientales, utilizando variables tales como el nivel de pobreza monetaria, las necesidades básicas insatisfechas, la proporción de la población activa en la agricultura, el nivel educativo, la altitud del distrito y el tamaño de la población. Se destaca que la mayoría de los conflictos socioambientales se concentran en distritos donde más del 50% de la población vive en condiciones de pobreza, siendo esta situación de pobreza un factor relevante en el malestar y descontento social que puede desembocar en conflictos.

De manera complementaria, el estudio realizado por Castellares y Fouché (2017) se enfoca en los determinantes de los conflictos sociales en zonas de producción minera en Perú, utilizando información distrital sobre cada conflicto social y empresa minera entre 2008 y 2015. Este análisis subraya que tanto los factores socioeconómicos específicos de los distritos como aquellos relacionados con las empresas mineras influyen de manera significativa en la

probabilidad de que ocurran conflictos socioambientales. A diferencia de investigaciones previas, el estudio revela que un aumento en los precios internacionales de los principales metales extraídos no se relaciona de manera significativa con la probabilidad de conflictos en los distritos mineros.

A pesar de continuar con una limitada investigación cuantitativa al respecto, Mendoza y Celestino (2019) realizan un análisis econométrico detallado y correlacional, utilizando datos de la Defensoría del Pueblo del 2010 al 2017. Aplican metodologías de datos de panel con efectos fijos y aleatorios, identificando factores como el PBI per cápita, la desigualdad en la distribución de ingresos, y la percepción pública del sistema democrático electoral como directamente relacionados con la generación de conflictos. En contraste, la tasa de subempleo, el ingreso relativo de las mujeres, la participación del sector minero y de hidrocarburos, y el uso de internet se relacionan inversamente. Su investigación destaca la predominancia de conflictos medioambientales vinculados a la minería, aunque señalan que una mayor participación de la producción minera en la estructura productiva regional implica una menor tasa de conflictos, controlando otros factores. El caso de la región de Ancash, donde la explotación minera y las disputas sobre recursos hídricos desencadenaron conflictos, ejemplifica cómo la desigualdad en la distribución de los beneficios de los recursos naturales puede provocar tensiones sociales.

Si bien el análisis de Mendonza y Celestino (2019) brindan alcances de la desigualdad en la distribución de ingresos en zonas mineras, Arellano-Yanguas (2011) profundiza en el marco de la política local y económica y el impacto de la redistribución de ingresos de recursos naturales a gobiernos subnacionales en Perú, concluyendo que estas políticas económicas han exacerbado los conflictos políticos locales. A través de evidencia estadística y trabajo de campo, Arellano demuestra cómo el nuevo paradigma localista en la gestión de recursos naturales ha sido contraproducente en un contexto donde las instituciones políticas nacionales no brindan apoyo adecuado.

Arellano identifica dos tipos principales de conflictos en el contexto minero peruano. El Tipo 1 involucra conflictos entre comunidades locales y empresas mineras, centrados en la apropiación de recursos locales por parte de las empresas y la resistencia de las comunidades locales. El Tipo 2, por su parte, se refiere a conflictos entre actores políticos locales y jurisdicciones administrativas

en torno al acceso y uso de los ingresos de recursos naturales transferidos por el gobierno central. Estos conflictos no ocurren en un vacío histórico, sino contra un trasfondo de agravios acumulados contra los poderes políticos y económicos centralizados. En su análisis, Arellano proporciona evidencia estadística que vincula el aumento de las rentas mineras y las transferencias fiscales a los gobiernos subnacionales con un mayor conflicto local. Estos conflictos se centran en la apropiación por parte de las empresas mineras de recursos locales, como tierra, agua y entornos locales no contaminados, y en los intentos de las comunidades locales de resistir u obtener compensación.

A pesar de la riqueza de datos y análisis, existe una limitación en la comprensión de la complejidad de los conflictos sociales. Muchos estudios de este cuerpo teórico se enfocan en correlaciones estadísticas y modelos econométricos, lo cual puede no capturar completamente la naturaleza multidimensional y los matices de los conflictos sociales, especialmente en contextos específicos como el Perú. Además, hay un énfasis en los aspectos económicos, mientras que otros factores como la cultura, la historia y la psicología social podrían no estar suficientemente explorados.

En resumen, esta revisión literaria establece una base sólida que subraya la importancia crítica de la desigualdad económica en la generación de conflictos sociales. Sin embargo, revela vacíos en la comprensión integral de las dinámicas de conflicto, indicando la necesidad de enfoques más holísticos y multidisciplinarios para abordar plenamente la complejidad de esta relación. Esta comprensión parcial señala hacia la necesidad de investigaciones futuras que integren dimensiones adicionales y exploren más profundamente los mecanismos subyacentes en la relación entre desigualdad y conflictos.

1.2.2.2. Desigualdad en el Poder Político y Conflictos Sociales

Otra área de estudio se centra en cómo la desigualdad en la distribución del poder político y la representación influye en la emergencia de conflictos sociales. Particularmente, como la relación entre regímenes autoritarios y la incidencia de conflictos, así como la manera en que las prácticas democráticas y la inclusión política pueden mitigar o exacerbar las tensiones sociales. Dentro

de este cuerpo, también se examina el papel de las instituciones en la administración del poder y la influencia de la corrupción y la exclusión política en la generación de descontento social.

Desde esta perspectiva, Stewart (2008) adopta un enfoque más amplio y cualitativo, argumentando que las desigualdades horizontales (diferencias en dimensiones económicas, sociales, políticas o de estatus cultural entre grupos culturalmente definidos) son una causa importante de conflictos. Stewart plantea que no solo la desigualdad económica, sino también las disparidades políticas, sociales y culturales entre grupos pueden ser catalizadores de conflictos. Un caso ilustrativo es el apartheid en Sudáfrica, donde desigualdades agudas en todos los aspectos mencionados llevaron a la movilización política y eventualmente a la violencia. El estudio de Stewart (2008) sugiere que la desigualdad en diferentes esferas de la sociedad puede interconectarse y exacerbar las tensiones, llevando a conflictos. Esta perspectiva amplía la comprensión del conflicto más allá de la mera desigualdad económica, destacando la importancia de considerar la desigualdad desde múltiples dimensiones.

En el análisis de la conflictividad social en el Perú, Panfichi y Coronel (2014) analizan cómo el autoritarismo de Fujimori, enfocado en intereses capitalistas, redujo las manifestaciones de descontento social, mientras que Ballón (2006) observa un aumento en los conflictos sociales en las democracias neoliberales subsiguientes, pese a intentos de re-democratización y descentralización.

Ambos textos convergen en resaltar la importancia de las demandas por una distribución más equitativa de los beneficios económicos y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. En el período post-Fujimori, a pesar del crecimiento económico, las políticas neoliberales no lograron atender adecuadamente estas demandas, llevando a un incremento en los conflictos, especialmente en cuestiones socioambientales. Esto refleja una tensión continua en la sociedad peruana entre el desarrollo económico y la justicia social.

Esto queda mucho más claro en las obras de Basombrio et al., (2016) y Durand (2011), quienes ofrecen visiones complementarias que enriquecen la comprensión del fenómeno. Basombrio et al., (2016) se centran en la cuantificación de la conflictividad y su relación con variables económicas y

políticas, mientras que Durand examina las percepciones de desigualdad y las características de los movimientos sociales actuales. Basombrio considera correlaciones entre la intensidad de la conflictividad y factores socioeconómicos como la pobreza, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), y la educación. Estos análisis resaltan que, aunque hay una relación entre la desigualdad socioeconómica y la conflictividad, esta no es uniforme ni exclusiva, indicando que la desigualdad es un factor importante pero no el único que incide en la conflictividad social.

Además, se analiza la relación entre la conflictividad y la economía regional, específicamente en el contexto de la inversión minera, donde se encuentra una correlación significativa entre la intensidad de los conflictos y la inversión en minería. Este vínculo entre economía regional y conflictividad refleja cómo la desigualdad en la distribución de beneficios económicos puede ser un caldo de cultivo para conflictos sociales.

Por otro lado, Durand (2011) enfatiza en la percepción de injusticia y exclusión entre los actores sociales, particularmente en relación con las industrias extractivas y su impacto en las condiciones de vida locales. Estos análisis reflejan cómo la desigualdad, más allá de su expresión económica, se manifiesta en una distribución desigual de recursos sociales, oportunidades, y beneficios del desarrollo económico.

Además, la autora argumenta que los movimientos sociales actuales en Perú, como CONACAMI y AIDSESEP, presentan reivindicaciones distintas a las tradicionales demandas salariales, enfocándose en derechos de propiedad y condiciones de vida, en oposición a grandes capitales transnacionales. Esto señala un cambio significativo en las formas de organización y en las agendas de estos movimientos, que reflejan una respuesta más amplia y compleja a la desigualdad y sus impactos.

Ambos autores coinciden en que los conflictos sociales en el Perú no son fenómenos aislados, sino que están profundamente relacionados con procesos estructurales de desigualdad y crisis de representación política. Mientras Basombrio subraya la importancia de las condiciones económicas y políticas, Durand pone énfasis en la percepción de desigualdad y exclusión por parte de las comunidades afectadas.

En resumen, la interacción entre la cuantificación de conflictos de Basombrio y el análisis cualitativo de Durand (2011) sobre las percepciones y características de los movimientos sociales proporciona una comprensión más rica del fenómeno de la conflictividad en Perú. Ambos enfoques destacan la importancia de considerar tanto las condiciones materiales como las percepciones y experiencias de desigualdad para comprender la compleja dinámica de los conflictos sociales en el contexto peruano.

Ahora bien, esta discusión es complejizada por Quispe (2021) y Alesina y Angeletos (2005). Quispe, en su estudio, resalta que la corrupción en los niveles de gobierno local contribuye significativamente a la inestabilidad política y social, así como a la ocurrencia de conflictos sociales. Esta corrupción, según Quispe, agrava la insatisfacción social y erosiona la confianza en las instituciones democráticas. Este enfoque se alinea con la observación de Alesina y Angeletos sobre cómo la corrupción incrementa la desigualdad y la injusticia, llevando a una demanda más alta de políticas redistributivas. Alesina y Angeletos sugieren que en sociedades donde la desigualdad es percibida como resultado de la corrupción, hay un mayor apoyo para políticas que intenten corregir esta desigualdad.

Además, Alesina y Angeletos señala que las sociedades tienden a aceptar más fácilmente las desigualdades que perciben como resultado del esfuerzo individual o la capacidad, en comparación con aquellas originadas en la corrupción o el amiguismo. Este punto es especialmente relevante en el contexto del estudio de Quispe, ya que los conflictos y la insatisfacción en Pilcuyo están fuertemente ligados a percepciones de corrupción y mala gestión, no a diferencias basadas en el esfuerzo o la capacidad individual. De este modo, el diálogo entre Quispe (2021) y Alesina y Angeletos (2005) arroja luz sobre cómo las dinámicas de corrupción y desigualdad interactúan de manera compleja para influir en la estabilidad política y la demanda de políticas redistributivas, especialmente en contextos locales específicos donde la corrupción ha erosionado la confianza en las instituciones y exacerbado la desigualdad económica.

Aunque este cuerpo teórico ofrece una visión profunda sobre la relación entre la desigualdad política y los conflictos, presenta ciertas limitaciones. Primero, podría beneficiarse de un análisis más profundo de cómo las

estructuras de poder y políticas específicas afectan a diversos grupos sociales y regiones dentro de Perú. Además, aunque se aborda la corrupción, podría explorarse más detalladamente cómo interactúa con otros factores políticos y económicos en la generación de conflictos. Por último, aunque se examinan los movimientos sociales, un análisis más detallado de su evolución y respuesta a políticas específicas podría enriquecer la comprensión de la conflictividad.

En conclusión, esta revisión literaria evidencia una relación compleja entre desigualdad política, prácticas democráticas, corrupción y conflictos sociales. Resalta la importancia de considerar la desigualdad desde múltiples dimensiones para comprender la dinámica de los conflictos en sociedades como Perú. Sin embargo, revela la necesidad de investigaciones adicionales que profundicen en cómo las interacciones específicas entre factores políticos, económicos y sociales contribuyen a la conflictividad social.

1.2.2.3. Desigualdad Social, Reconocimiento y Conflictos Sociales

Una tercera vertiente se enfoca en la desigualdad social basada en la etnicidad, raza, religión, género, y otros marcadores de identidad social. Investiga cómo la discriminación, el racismo, y la exclusión de ciertos grupos de la participación social y económica completa pueden llevar a conflictos. Esta literatura aborda temas de reconocimiento y respeto a la diversidad cultural y étnica, y cómo la falta de estos puede generar tensiones y conflictos en una sociedad.

En ese sentido, uno de los primeros estudios que explora la relación entre desigualdad y conflictos sociales en Perú, centrándose en cómo la desigualdad extrema, especialmente de carácter étnico, ha influido en la acción colectiva y los movimientos sociales en el país, fue el de Muñoz et al., (2006). Según los autores, en 2006 se documentaba que la desigualdad en Perú era tan extrema como en Brasil y está profundamente entrelazada con factores étnicos, lo que ha llevado históricamente a movilizaciones violentas, pero no necesariamente a movilizaciones étnicas explícitas.

El estudio resalta que, a pesar del alto grado de desigualdad horizontal y la falta de reacciones violentas frente a ella, ha existido una acción colectiva

constructiva. Sin embargo, estas acciones han enfrentado desafíos debido a sistemas políticos corruptos y centrados en sí mismos, que limitan su efectividad y contribuyen a la persistencia de la desigualdad. Además, se observa que a las personas más pobres les resulta más difícil la acción colectiva, lo que perpetúa la desigualdad.

El estudio examina también por qué la acción colectiva es violenta o no, encontrando que las acciones de violencia controlada de las comunidades organizadas a menudo actúan como instrumentos de negociación o diálogo. En el caso de Espinar, centrado en la minería, se observa la formación de movimientos colectivos en respuesta a políticas de expropiación de tierras y otros problemas causados por la actividad minera. De este modo, Muñoz et al., (2006) ilustran la complejidad de la acción colectiva en el Perú, mostrando cómo factores como la pobreza, la vulnerabilidad, las fallas del Estado, el contexto institucional, y la identidad étnica y comunal, interactúan para influir en la naturaleza y los resultados de estas acciones.

Es último punto es abordado a detalle por Caumartin et al., (2008) al analizar la interacción entre la etnicidad, la violencia política y las desigualdades horizontales en estos Bolivia, Guatemala y Perú, destacando el fuerte componente étnico en la estructura de desigualdad de la región. Según los autores, la relación entre desigualdad y conflictos sociales se ve profundamente influenciada por las desigualdades horizontales entre grupos indígenas y no indígenas, aspecto que ha persistido a lo largo del tiempo y ha sido moldeado por la historia y la geografía del país. A diferencia de Bolivia y Guatemala, donde la identidad indígena y la participación política adoptan formas distintas, en Perú, el proceso de asimilación y la búsqueda de integración en diversos climas políticos han sido predominantes. Este enfoque en la asimilación ha llevado a una situación donde, a pesar de las profundas desigualdades socioeconómicas y culturales, la movilización étnica ha sido limitada y la identidad indígena, aunque presente, no ha sido un catalizador fuerte para la acción colectiva a gran escala o conflictos sociales violentos en la misma medida que en otros países latinoamericanos con grandes poblaciones indígenas. Sin embargo, esta asimilación no ha eliminado las desigualdades ni ha prevenido la violencia, como lo demuestra el surgimiento y la intensidad de los conflictos socio ambiental, los cuáles poseen implicancias étnicas y de participación política significativas.

Por ejemplo, en su análisis, Arce (2017) se centra en la creciente confrontación entre el Estado y los movimientos sociales, analizando cómo las tensiones entre las políticas neoliberales y las demandas de los movimientos sociales han llevado a un aumento de los conflictos en regiones ricas en recursos. El autor describe cómo la “nueva minería” ha cambiado el panorama de las protestas. Las nuevas técnicas mineras, que requieren menos mano de obra no calificada pero más recursos como agua y tierra, han llevado a que los actores involucrados en las protestas sean principalmente poblaciones rurales y urbanas afectadas por la extracción. Estas demandas a menudo incluyen cuestiones relacionadas con la tierra, el agua, el paisaje y la protección del medio ambiente. Además, Arce (2017) destaca la importancia de la movilización de recursos y los procesos de encuadre en el éxito de las protestas, así como la importancia económica relativa de la minería en comparación con otras actividades como la agricultura.

Por otro lado, Guzmán-Barrón (2011) presenta una perspectiva sobre los conflictos sociales, principalmente centrados en las zonas donde se desarrollan actividades extractivas. El autor plantea que estas actividades a menudo entran en conflicto con las necesidades y estilos de vida de las comunidades locales, especialmente en lo que respecta a recursos como la tierra y el agua. Esta fuente también profundiza en la conceptualización de la desigualdad, viéndola como un producto histórico de la concentración de oportunidades y una distribución desigual de recursos, exacerbada por procesos de exclusión y opresión.

Otro aspecto relevante es el paradójico escenario de movilizaciones y protestas sociales en un contexto de auge macroeconómico, lo cual es atribuido a la extrema desigualdad en la distribución de ingresos y activos. Este fenómeno es explicado por la teoría del "efecto túnel" de Hirschman, donde la tolerancia a la desigualdad tiene un límite y, al no ver mejoras, desemboca en protestas y violencia (Schuldt, 2011). Las diferencias significativas en el gasto promedio personal entre diferentes grupos socioeconómicos y regiones del país también se destacan, lo que subraya la persistente desigualdad a pesar del crecimiento económico.

Aunque este cuerpo de literatura proporciona una comprensión valiosa sobre cómo la desigualdad social basada en marcadores de identidad puede conducir a conflictos, presenta ciertas limitaciones. Primero, podría beneficiarse

de un análisis más profundo de cómo se manifiestan y se experimentan estas desigualdades en la vida cotidiana de los grupos afectados. Además, aunque se abordan los efectos de la discriminación y la exclusión, se necesita más investigación sobre las estrategias efectivas para combatir estas desigualdades y promover una mayor inclusión y reconocimiento social.

En resumen, esta revisión literaria destaca la desigualdad social basada en la identidad como un factor crucial en la generación de conflictos en Perú, especialmente en el contexto de actividades extractivas y regiones con disparidades económicas notables. Sin embargo, revela la necesidad de una mayor comprensión de las dinámicas cotidianas de la desigualdad social y estrategias para abordar efectivamente estos problemas y promover una sociedad más inclusiva y equitativa.

En conclusión, la literatura sugiere que la desigualdad en Perú es un factor clave en la gestación de conflictos sociales, especialmente en contextos de actividades extractivas y en regiones con notables disparidades económicas. Estos conflictos se ven agravados por factores como la percepción de la democracia, el nivel de ingresos, el subempleo, y la distribución desigual de la riqueza. La comprensión de estos factores es esencial para abordar efectivamente la problemática de los conflictos sociales en el Perú.

1.2.3. Sobre inversión, desigualdad y conflictividad

Diversos estudios han analizado los vínculos entre la desigualdad socioeconómica y la ocurrencia de conflictos sociales, tanto a nivel conceptual como empírico. En términos generales, se plantea que altos niveles de desigualdad generan malestar social, percepciones de injusticia distributiva y falta de oportunidades, lo cual aumenta las tensiones entre grupos y el riesgo de acciones colectivas violentas (Stewart, 2008; Østby, 2008).

En el contexto peruano, el crecimiento económico de las últimas décadas no se ha traducido en mejoras sustanciales en términos distributivos, manteniéndose como uno de los países más desiguales de América Latina. Autores como Arce (2017) y Tanaka (2012) señalan que esta situación de exclusión y limitado progreso social de grupos históricamente postergados

explica en gran medida los altos niveles de conflictividad, especialmente socioambiental, que exhibe el país.

Frente a este panorama, la inversión pública en infraestructura emerge como una variable estratégica, con el potencial de mitigar demandas sociales y reducir la conflictividad a través de un efecto mediador: el cierre de brechas de desigualdad socioeconómica entre regiones y grupos poblacionales (Regjo et al., 2022).

En el caso peruano, Escobal y Ponce (2002) analizan el impacto de la inversión en infraestructura vial sobre los ingresos agropecuarios de las zonas rurales en la década de 1990. Sus estimaciones sugieren que dicha inversión está correlacionada con un incremento de los ingresos rurales, especialmente de la sierra peruana, lo que habría contribuido a reducir la pobreza y las brechas urbano-rurales.

Asimismo, Del Carpio (2023) estudia los efectos socioeconómicos de las asociaciones público-privadas (APP) en infraestructura de transporte. Concluye que este tipo de proyectos tienen un efecto positivo en el empleo, la reducción de tiempos y costos de transporte, y el mayor acceso a servicios sociales. Todo esto se traduce en mejoras en el bienestar de poblaciones antes aisladas.

Calle (2016) analiza el caso específico del proyecto vial Pichanaki-Puerto Inca en la selva peruana durante los años 1990. El estudio compara indicadores socioeconómicos de la zona antes y después de la construcción de la carretera, confirmando mejoras significativas en acceso a salud y educación, integración al mercado laboral, y diversificación productiva.

Si bien la literatura previa entrega evidencia base sobre esta relación entre las variables de interés, aún existen vacíos en términos de investigación al respecto. Se requieren más estudios a nivel regional/local, así como explorar otras fuentes de información (cualitativa, percepción ciudadana) que permitan robustecer los hallazgos. Asimismo, es necesario determinar los mecanismos causales con mayor precisión, aislando el efecto de la inversión en infraestructura de otros factores contextuales.

La revisión de la literatura previa sugiere que existe evidencia a favor del planteamiento sobre los vínculos entre mayor inversión pública en infraestructura y la reducción de la desigualdad socioeconómica y conflictividad social en el Perú.

Si bien los estudios disponibles presentan limitaciones, principalmente derivadas de la data utilizada y el alcance geográfico, coinciden en señalar efectos positivos de proyectos de infraestructura vial, transporte, comunicaciones, entre otros, sobre indicadores de bienestar de poblaciones históricamente excluidas.

El mecanismo subyacente tiene que ver con el mejor acceso a servicios básicos, la integración de estas zonas a los mercados laborales y productivos, y en general el desarrollo de sus economías locales. Todo esto se constituye en oportunidades concretas de progreso material para grupos usualmente rezagados, mitigando percepciones de inequidad y agravios que podrían motivar acciones colectivas violentas.

1.3. Marco conceptual y teórico

En esta sección se expone el estado del conocimiento actual teórico sobre la relación entre la desigualdad, la inversión pública y la conflictividad social. Asimismo, se abordan las diversas dimensiones y enfoques de la desigualdad, destacando su naturaleza multidimensional que trasciende la mera distribución de ingresos. Asimismo, se examina el rol de la inversión en infraestructura pública en el Perú como herramienta para reducir las brechas de acceso a servicios y cerrar las disparidades territoriales. Adicionalmente, se analiza la dinámica de los conflictos sociales, sus causas subyacentes y la importancia de comprender sus múltiples facetas más allá de las manifestaciones visibles, a fin de abordarlos de manera integral y promover la transformación colectiva. Por último, se presenta el planteamiento a evaluar sobre la relación entre desigualdad, inversión pública y conflictividad social.

1.3.1. Desigualdad y brechas socioeconómicas

Desde una perspectiva económica, la desigualdad se define como la disparidad en la distribución de bienes, ingresos y rentas entre los distintos miembros de una población dentro de una zona geográfica (ACNUR, 2018). Sin

embargo, la desigualdad no debe limitarse a un enfoque unidimensional centrado únicamente en los ingresos. Este fenómeno no se refiere exclusivamente a la riqueza o pobreza monetaria, ni a la posesión de activos. También involucra aspectos como la expectativa de vida y la capacidad de acceso a servicios esenciales, como salud, educación de calidad y otros servicios públicos en general (ONU, 2019). En consecuencia, la concepción de desigualdad está vinculada a las condiciones de vida que pueden afectar la dignidad de las personas y restringir sus derechos, lo cual no solo impide la satisfacción de necesidades básicas y disminuye el bienestar económico, sino que también limita la integración social plena (Stezano, 2021).

En este contexto, la teoría de la desigualdad desarrollada por Roemer (1998) a finales del siglo XX adopta un enfoque multidimensional. Esta teoría no solo considera la dimensión monetaria de la desigualdad, medida por las diferencias en ingresos, sino que también aborda el acceso desigual a oportunidades laborales, educación, felicidad, salud, esperanza de vida, activos y movilidad social, entre otros factores (Souza et al., 2017). Según Souza et al. (2017), la desigualdad, medida en términos de ganancias económicas individuales, depende en gran medida de dos aspectos: i) el esfuerzo individual y ii) las circunstancias fuera del control de los individuos, tales como raza, género, origen socioeconómico, así como diferencias politológicas e institucionales entre sectores (Souza et al., 2017). Además, es pertinente incluir el acceso a activos e infraestructura pública en este análisis. El capital privado y el capital público, funcionando en sinergia, son fundamentales para generar valor y riqueza en un sentido amplio del término.

Gaudin y Pareyón (2020) abordan la desigualdad desde dos grandes dimensiones en su definición. La primera, desde un enfoque unidimensional, se centra exclusivamente en las diferencias de ingreso, o lo que se denomina desigualdad de ingreso. Este enfoque busca comprender cómo los distintos grupos de hogares contribuyen a la generación y distribución de la riqueza nacional. La segunda dimensión, abordada desde una perspectiva multidimensional, examina la desigualdad en términos de resultados y oportunidades. Este enfoque no solo considera la distribución de los recursos, sino que también toma en cuenta factores adicionales como la clase social, el género y el grupo étnico, los cuales influyen en la dotación inicial de factores que

los individuos poseen. En este sentido, la desigualdad multidimensional se refiere a la disparidad en el acceso a derechos y factores de producción, afectando así la capacidad de las personas para obtener bienes y servicios y, por ende, modificando los indicadores de productividad, ingreso y bienestar entre distintos grupos poblacionales (Gaudin & Pareyón, 2020).

En términos de medición, WIR (2018) señala que cualquier métrica utilizada para calcular la desigualdad económica se basa en la distribución de ingresos o riqueza. El Banco Mundial (s.f.) identifica al Coeficiente de Gini como uno de los índices más comunes para medir la desigualdad monetaria. Stezano (2021) destaca su utilidad por su facilidad de aplicación y por permitir comparaciones tanto entre países como a lo largo del tiempo. El Coeficiente de Gini, que varía entre 0 y 1, representa el grado de desigualdad en la distribución de la riqueza, donde 0 indica igualdad absoluta y 1 denota desigualdad total (Medina, 2001). Según Gaudin y Pareyón (2020), el Coeficiente de Gini se obtiene a partir de la curva de Lorenz, representando el área entre esta curva y la línea de igualdad, dividido por el área total bajo la línea de igualdad, que refleja el ingreso promedio de todos los individuos en una sociedad.

Sin embargo, el Coeficiente de Gini ha enfrentado críticas significativas como medida de desigualdad. En primer lugar, resulta complejo definir un umbral aceptable de desigualdad de ingresos. En segundo lugar, la concentración del ingreso en el decil más rico puede distorsionar la medida de la desigualdad promedio, afectando la eficacia del índice. Por ejemplo, en 2021 en Perú, el decil más rico acumulaba el 31.9% del ingreso nacional, mientras que el decil más pobre solo obtenía el 1.8% (CEPAL, 2022; Del Castillo Negrete, 2015).

Así pues, Gaudin & Pareyón (2020) comentan que, aunque se prefiera al índice de Gini como una medida de prosperidad debido a su facilidad de acceso y comparación a lo largo del tiempo, en la actualidad este indicador resulta insuficiente para analizar las desigualdades, así como los conflictos que de ésta se generen. En tiempos recientes, han emergido nuevas perspectivas que reconocen que las disparidades en los ingresos reflejan también la acumulación de otras formas de desigualdad, tales como el acceso a la educación y la salud, la movilidad social, el género, la edad, el grupo étnico o el territorio. En este contexto, Royce (2008) destaca que la falta de una infraestructura adecuada perpetúa un ciclo en el que ciertos grupos quedan atrapados en categorías

sociales desfavorecidas, con escasos recursos y oportunidades. Estos grupos tienden a ser estigmatizados culturalmente y excluidos social y políticamente, y se enfrentan a un mercado laboral caracterizado por bajos salarios y baja productividad.

La medición de la desigualdad utilizando exclusivamente el Coeficiente de Gini, centrado en términos monetarios, resulta insuficiente e incompleta. En años recientes, se han desarrollado enfoques que reconocen que las disparidades en los ingresos están intrínsecamente relacionadas no solo con la distribución de la riqueza, sino también con otras formas de desigualdad, como el acceso a educación y salud, la movilidad social, y factores vinculados al género, la edad y la etnicidad (Gaudin & Pareyón, 2020).

Para medir la desigualdad desde un enfoque multidimensional, Colafranceschi et al. (2013) proponen la desagregación por dimensiones. De acuerdo con esta perspectiva, cuantificar la desigualdad multidimensional implica sumar la desigualdad en cada dimensión específica (Maasoumi, 1986). La construcción de índices multidimensionales de desigualdad requiere definir dimensiones específicas y establecer criterios de agregación y ponderación, considerando también el grado de sustituibilidad entre las variables y sus respectivos niveles de aversión a la desigualdad (Atkinson et al., 2002).

Para estimar el impacto de la desigualdad, Stezano (2021) propone la pobreza multidimensional como un indicador clave. El autor argumenta que la pobreza no solo es un resultado de la desigualdad, sino también un factor que perpetúa la desigualdad en las naciones. Stezano (2021) define la pobreza como la exclusión resultante de la falta de los recursos necesarios para acceder a las condiciones materiales de existencia propias de una sociedad, conforme a su configuración histórica.

Desde 2010, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en colaboración con la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI), ha desarrollado el Índice Global de Pobreza Multidimensional (IPM-Global) para complementar las métricas tradicionales de pobreza monetaria. Aunque el ingreso es un componente necesario, no constituye una medida suficiente del bienestar social. Esta metodología evalúa diez indicadores agrupados en tres dimensiones: educación (medida a través de años de escolaridad y asistencia escolar), salud (a través de mortalidad infantil y

nutrición) y calidad de vida (evaluada mediante el acceso a electricidad, saneamiento, agua potable, vivienda, bienes y combustible para cocinar) (Defensoría del Pueblo, 2022).

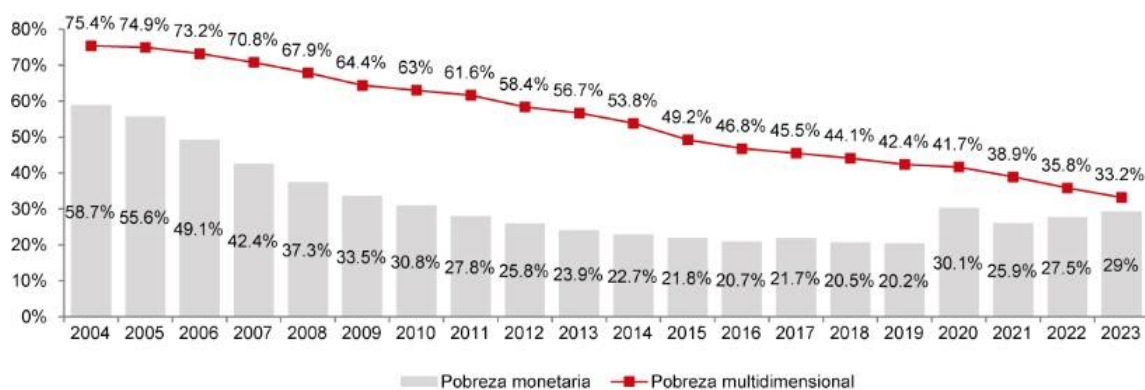
El IPM-Global 2023 revela que, de los 110 países analizados, 1,100 millones de los 6,100 millones de personas estudiadas viven en condiciones de pobreza multidimensional, de las cuales aproximadamente el 18% experimenta pobreza multidimensional severa. Además, el informe indica que entre 824 y 991 millones de estas personas carecen de acceso adecuado a saneamiento, vivienda o combustible para cocinar; 600 millones viven en hogares con al menos una persona desnutrida, y cerca de la mitad de los hogares pobres no cuenta con al menos un miembro que haya completado seis años de escolaridad, con excepción de Europa y Asia Central (Defensoría del Pueblo, 2022).

En los años siguientes, varios países comenzaron a adoptar un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) a nivel nacional o local como una medida oficial para evaluar la pobreza multidimensional. En el caso de Perú, este índice fue incorporado a la Red de Pares de Pobreza Multidimensional (MPPN, por sus siglas en inglés) en 2013 (OPHI, s.f.). Sin embargo, fue en marzo de 2016 cuando el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en colaboración con OPHI, comenzó a recibir capacitaciones específicas sobre la medición de la pobreza multidimensional. Posteriormente, en julio de 2021, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), en conjunto con el INEI, publicó el informe técnico titulado "Integración del Enfoque de Pobreza Multidimensional en el Proceso de Actualización de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social". Este informe propone la incorporación de un enfoque multidimensional en la estrategia sectorial y la implementación de un sistema de medición de la pobreza alineado con esta perspectiva (Defensoría del Pueblo, 2022).

El informe técnico "Pobreza Multidimensional en el Perú" de la Defensoría del Pueblo (2022) revela que, a nivel departamental, la prevalencia de la pobreza multidimensional supera a la pobreza monetaria en todas las regiones, excepto en Callao. Según el informe, Moquegua es la región con la menor cantidad de personas en situación de pobreza multidimensional. No obstante, al adoptar un enfoque basado en ingresos, las regiones que anteriormente se consideraban las más pobres, como Puno (42.6%), Pasco (42.1%) y Huancavelica (41.2%), son reemplazadas por Loreto (60.8%), Huánuco (54.1%) y San Martín (53.6%).

Además, se identifica a Madre de Dios como la región con la mayor disparidad entre los enfoques, con una tasa de pobreza monetaria del 7.7% frente a una tasa de pobreza multidimensional del 43.7% (Gráfico 9). Esta comparación indica que, a pesar de la disminución de la pobreza medida en términos de ingresos, este avance no necesariamente conduce a la reducción de desigualdades en dimensiones como educación, salud, empleo y condiciones de vivienda y servicios públicos.

Gráfico 1.9: Evolución de la pobreza monetaria y multidimensional en el Perú (2004-2023)



Fuente: ComexPerú (2024)

Por otro lado, la Sociedad de Comercio Exterior (2022), comenta que, si analizamos el nivel de ejecución en las regiones consideradas como los más afectados en términos multidimensionales, observamos que Loreto, Huánuco y San Martín lograron altos niveles de ejecución —ejecutando el 72.2%, 62.4% y 75.3% de su presupuesto departamental asignado a inversión pública respectivo—. Porcentajes bastante altos teniendo en cuenta que, en los últimos cinco años, los gobiernos locales solo lograron ejecutar, en promedio el 56.9% del presupuesto asignado.

Después de analizar las diferentes perspectivas y enfoques para medir la desigualdad, se ha determinado que en esta investigación se utilizarán tanto el Coeficiente de Gini como el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Esta

elección se fundamenta en la necesidad de abordar la desigualdad desde un enfoque integral, considerando tanto la dimensión monetaria como las múltiples dimensiones que afectan el bienestar de las personas.

El Coeficiente de Gini, a pesar de sus limitaciones, sigue siendo ampliamente utilizado como una métrica reconocida para medir la desigualdad de ingresos y riqueza. Su facilidad de cálculo y comparabilidad a lo largo del tiempo lo convierten en un indicador valioso para analizar la distribución del ingreso dentro de una población. No obstante, es crucial complementarlo con otras medidas que capturen las diversas facetas de la desigualdad.

En este sentido, el IPM resulta una herramienta indispensable para evaluar la desigualdad multidimensional. Al considerar dimensiones como la educación, la salud y las condiciones de vida, el IPM permite tener una visión más completa de las privaciones que enfrentan las personas más allá de la carencia de ingresos. Además, su enfoque multidimensional permite identificar las intersecciones entre diferentes formas de desigualdad, lo que es fundamental para el diseño de políticas públicas efectivas.

La combinación de estas dos métricas permitirá obtener una comprensión más profunda de la desigualdad en el contexto de estudio. Mientras que el Coeficiente de Gini proporcionará información sobre la distribución del ingreso, el IPM revelará las desigualdades en el acceso a servicios básicos, oportunidades educativas y condiciones de salud. Juntos, estos indicadores brindarán una mirada holística de las disparidades existentes, lo que es esencial para el desarrollo de estrategias integrales y efectivas para reducir la desigualdad en todas sus dimensiones.

1.3.2. Conflictividad social

El conflicto social es un proceso dinámico que surge de la interacción entre dos o más partes que tienen intereses contrapuestos sobre el acceso o control de recursos escasos, el logro de metas incompatibles entre sí, o la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas. Cuando los mecanismos institucionales resultan insuficientes para procesar estas diferencias de forma constructiva, los actores adoptan acciones colectivas que representan una

amenaza al orden público o la gobernabilidad. Involucra la interacción antagónica entre actores interdependientes que perciben sus metas, cosmovisiones, acceso a recursos escasos o satisfacción de necesidades básicas como incompatibles.

El conflicto social tiene un carácter productivo y es un mecanismo fundamental de resolución de tensiones y cambio social (Coser, 1956). No implica necesariamente violencia política, sino que denota oportunidades de innovación e inclusión de grupos marginados en la toma de decisiones (Della Porta, 2009). De acuerdo con este enfoque, el conflicto social constituye un motor del cambio social, un mecanismo de resolución de tensiones acumuladas y una oportunidad para la innovación institucional, la inclusión de grupos marginados y la reformulación de las relaciones de poder.

Diversos factores inciden en el surgimiento y escalamiento de situaciones de conflicto social. A nivel estructural, el contexto económico, legal y político delimita el campo de acción de los actores y la distribución asimétrica del poder (Tanaka et al., 2011). Las deficiencias en el funcionamiento de instituciones formales e informales también juegan un rol importante. Asimismo, es clave considerar los intereses explícitos y ocultos de las partes, la información y los canales de comunicación disponibles, el tipo de relaciones sociales preexistentes, y los valores culturales en tensión (Paredes, 2017).

La evolución típica de un conflicto social transita desde una fase de latencia, donde subyace la controversia sin manifestarse abiertamente, hacia instancias de escalamiento, que pueden desembocar en protestas, llegar a una situación de crisis e incluso violencia para luego, potencialmente, entrar en un proceso de diálogo, negociación y búsqueda de acuerdos (Tanaka et al., 2011). La dinámica y desenlace del conflicto dependerán en gran medida de la voluntad política de las autoridades para abordar las demandas ciudadanas y la implementación efectiva de los compromisos que se alcancen. Así, más que desactivar frontalmente la protesta social, el objetivo debería ser promover una institucionalidad que potencie la participación, la inclusión y el consenso.

Una primera tipología se basa en el nivel o alcance geográfico del conflicto, que puede ser local, regional, nacional o incluso internacional, si involucra la participación de actores extranjeros. Otra clasificación tiene que ver con el ámbito público o privado en que se manifiesta con mayor intensidad, ya

sea el Poder Judicial, la administración pública, el Poder Legislativo o los medios de comunicación (Tanaka et al., 2011; USAID, 2012).

Asimismo, los conflictos pueden distinguirse según el tipo de acceso en disputa. Por ejemplo, entre instituciones del Estado que compiten por la propiedad o el control de un recurso estratégico; entre comunidades locales y empresas privadas que pugnan por el usufructo o la preservación de un territorio y sus bienes naturales; o entre grupos sociales que reclaman la satisfacción de necesidades básicas (Paredes, 2017).

Otra clasificación relevante refiere a la etapa del proceso en que se encuentra el conflicto: latencia, escalamiento o emergencia, crisis, estancamiento o des-escalamiento. Identificar la fase permite anticipar trayectorias probables y definir intervenciones diferenciadas (USAID, 2012).

Finalmente, una tipificación frecuente es por la materia objeto del conflicto. Por ejemplo: recursos hídricos, hidrocarburos, tierras y territorios, áreas naturales protegidas, entre otros. Si bien útil para la categorización, etiquetar un conflicto no es un acto aséptico, sino que conlleva efectos políticos. Puede reforzar la estigmatización de determinados actores, focalizar en exceso las dimensiones confrontacionales en contextos de crisis, o invisibilizar los factores subyacentes que afectan a múltiples casos con características compartidas (USAID, 2012; Paredes, 2017).

Para realizar un análisis comprehensivo de las situaciones de conflicto social es preciso examinar sus múltiples dimensiones, más allá de los aspectos coyunturales y aparentes. Una primera dimensión refiere a la interacción directa de las partes involucradas. Es el plano donde los actores enfocan sus demandas, expresan abiertamente sus diferencias, se enfrentan o negocian en búsqueda de acuerdos. Si bien el espacio de mayor visibilidad no agota la complejidad subyacente al conflicto (Tanaka et al., 2011).

Una segunda dimensión se ubica en las relaciones sociales estructurales entre los grupos a los que pertenecen las partes contendientes. Las tensiones actuales se explican en función de los vínculos históricos, políticos, económicos o culturales entre dichas colectividades. Esta dimensión contextualiza casos particulares dentro de un entramado más amplio de disputas distribuidas en el tiempo y el territorio (Paredes, 2017).

Por último, es preciso analizar los factores estructurales o macro-sociales que delimitan y condicionan el desarrollo del conflicto. El trasfondo económico, las políticas públicas implementadas, el régimen legal vigente, las relaciones de poder dominantes y el modelo de desarrollo imperante, moldean, facilitan u obstaculizan dinámicas específicas de confrontación entre actores. Identificar estas dimensiones subyacentes permite comprender patrones que se replican en múltiples casos de conflicto social (USAID, 2012).

En definitiva, un abordaje robusto y efectivo de las situaciones de conflicto social requiere trascender miradas unidimensionales, maniqueas o simplificadoras, para dar cuenta de una trama compleja de factores objetivos y subjetivos, historias compartidas y visiones encontradas, oportunidades y obstáculos. Sólo así será posible sentar bases sólidas para procesos integrales de transformación colectiva.

1.3.3. La correlación positiva: Inversión pública y su impacto en la reducción de la desigualdad y el cierre de brechas.

Algunos autores como Jaramillo y Alcázar (2022) argumentan que la inversión pública puede reducir la desigualdad al mejorar la dotación de capital físico y humano de los hogares. El aumento en productividad y eficiencia derivado de mejor infraestructura y servicios públicos se traduciría en mayores oportunidades económicas y salarios para los ciudadanos (Regjo et al., 2022).

En la misma línea, Zhang, Wang y Chen (2012) sostienen que el gasto público tiene un efecto progresivo en dos vías: 1) al impulsar la actividad económica agregada en el corto plazo, y 2) al incrementar la productividad de los factores de producción vía mejoras en capital físico e infraestructura pública. Asimismo, según Becker (2007), proyectos públicos en educación y salud fomentan la acumulación de capital humano, con efectos positivos en el crecimiento económico en el largo plazo.

Por otro lado, Kuznets (1955) señala que el crecimiento económico por sí solo no se traduce en una mejor distribución del ingreso de forma inherente. Es decir, se requieren políticas progresivas complementarias.

En la misma línea, Jaramillo y Alcázar (2022) en un estudio para América Latina, comprueban que se necesitarían grandes volúmenes de inversión pública para obtener reducciones marginales en las brechas de desigualdad. Además, identifican problemas como el sesgo urbano y deficiencias en la implementación que limitan los efectos redistributivos.

En síntesis, si bien existen argumentos teóricos sólidos que sustentan el potencial progresivo de la inversión pública, otros autores introducen importantes salvedades sobre la falta de automaticidad de estos efectos en la práctica y los desafíos para traducirlos en mejoras tangibles en equidad. Se requerirían intervenciones integrales con adecuada focalización para materializar los impactos redistributivos.

1.3.4. Aproximaciones teóricas sobre desigualdad y conflictividad social

La teoría posmoderna de conflictos sociales propuesta por Femenia (2014) y la teoría desarrollada por Johan Galtung (Calderón, 2009) representan dos enfoques novedosos y críticos para comprender la naturaleza multidimensional de los conflictos en la sociedad contemporánea. Ambas teorías se sustentan en una serie de perspectivas teóricas y conceptos clave que desafían los paradigmas tradicionales de análisis de conflictos.

Por un lado, Femenia (2014) define un conflicto como una situación generada entre personas interdependientes, donde una o ambas partes experimentan frustración de sus necesidades, enojo y desarrollan conductas dañinas. Esta definición resalta la importancia de considerar las dimensiones emocionales, psicológicas y estructurales que subyacen al origen y perpetuación de los conflictos, en consonancia con el postulado fundamental de Galtung de concebir los conflictos como realidades inherentes a todos los sistemas vivos y portadores de objetivos.

Uno de los pilares de la teoría de Femenia (2014) es la teoría de las necesidades humanas, propuesta inicialmente por Maslow y posteriormente desarrollada por Sen y otros autores en el campo económico. Esta perspectiva sugiere que los conflictos sociales surgen, en gran medida, de la insatisfacción de necesidades básicas como la supervivencia, la seguridad y la

autorrealización. Galtung, por su parte, destaca la importancia del proceso de concientización, inspirado en las ideas de Paulo Freire, como un elemento crucial para la transformación de los conflictos, adquiriendo una comprensión más profunda de la realidad, sus condicionantes históricas y las contradicciones subyacentes (Calderón, 2009).

Otro componente clave de la teoría posmoderna de Femenia (2014) es la teoría de la construcción social de la realidad, la cual postula que los seres humanos construyen marcos de entendimiento y realidades consensuales a través de procesos sociales e interacciones. Desde esta perspectiva, los conflictos son construcciones sociales moldeadas por circunstancias históricas, culturales y contextuales específicas. Galtung, por su parte, propone el triángulo actitud-comportamiento-contradicción (ABC) como un marco analítico para diseccionar los componentes esenciales de un conflicto, resaltando la importancia de ir más allá de las manifestaciones superficiales y explorar sus causas profundas, a menudo ocultas o invisibles (Calderón, 2009).

Ambas teorías reconocen el papel fundamental del lenguaje y las narrativas en la creación y legitimación de conflictos. Femenia (2014) destaca que las narrativas negativas o deshumanizantes pueden exacerbar las divisiones y justificar la violencia, mientras que las narrativas positivas y empáticas tienen el potencial de restaurar relaciones y mitigar los daños. Galtung, por otro lado, analiza la violencia como un meta conflicto y la conceptualiza en tres dimensiones: directa, estructural y cultural, resaltando la complejidad de los conflictos y la necesidad de abordarlos desde múltiples ángulos (Calderón, 2009; Álzate, 2007).

Finalmente, las dos teorías proponen enfoques para la transformación de conflictos. Femenia (2014) aboga por el diálogo apreciativo, centrándose en las fortalezas, logros y potencialidades de los individuos y grupos involucrados para generar un cambio positivo y constructivo. Galtung, por su parte, presenta el método Transcend, basado en la empatía, la no violencia y la creatividad, con el objetivo de trascender las contradicciones subyacentes y permitir la satisfacción de las necesidades de todas las partes (Calderón, 2009).

Si bien estas teorías ofrecen miradas frescas y valiosas sobre los conflictos sociales, también es importante considerar algunas críticas, como la posible percepción de ser demasiado abstractas o teóricas, dificultando su

aplicación práctica, o la tendencia a minimizar factores estructurales, económicos y políticos que también desempeñan un papel fundamental en la generación y perpetuación de conflictos (Alzate, 2007).

Ambos autores ofrecen un marco conceptual relevante para analizar la relación entre la inversión pública en infraestructura, la reducción de la desigualdad y la conflictividad social en el Perú. Permiten abordar este fenómeno desde una perspectiva multidimensional y estructural, considerando factores sociales, económicos, culturales y psicológicos.

Desde la teoría de las necesidades humanas de Maslow y Sen, se puede argumentar que una mayor inversión en infraestructura básica contribuye a satisfacer las necesidades más elementales de la población, como acceso a agua potable, saneamiento, electricidad y vías de comunicación. Al cubrir estas carencias, se facilita el posterior desarrollo de otras necesidades superiores, como seguridad, pertenencia, autoestima y autorrealización. La privación prolongada de estas necesidades básicas puede generar frustración y conflictividad social.

Por otra parte, la teoría de la construcción social de la realidad aporta una mirada sobre cómo la desigualdad estructural se perpetúa a través de narrativas y discursos que naturalizan las disparidades y legitiman la exclusión de ciertos grupos. Estas construcciones sociales pueden alimentar percepciones de injusticia, agravio y resentimiento hacia el Estado y los grupos privilegiados, fomentando un caldo de cultivo para la conflictividad.

Asimismo, las teorías narrativas resaltan el poder del lenguaje en la configuración de identidades y realidades sociales. Los relatos de marginación, discriminación y falta de oportunidades pueden reforzar la polarización entre grupos y alimentar ciclos de conflicto. En contraste, narrativas de reconocimiento, inclusión y movilidad social ascendente podrían mitigar tensiones y promover la cohesión.

El enfoque del diálogo apreciativo sugiere que, en lugar de centrarse en los déficits y problemas, es más efectivo identificar y potenciar los aspectos positivos y las capacidades existentes en las comunidades. Al visualizar escenarios deseables y diseñar propuestas colectivas viables, se generan procesos participativos que pueden canalizar constructivamente las demandas sociales y reducir la conflictividad.

En este marco teórico, una mayor inversión pública en infraestructura contribuiría a cerrar brechas en la satisfacción de necesidades básicas y a mejorar las condiciones materiales de vida de la población. Esto podría aminorar las percepciones de injusticia y desigualdad extrema que alimentan la conflictividad social.

No obstante, es importante complementar esta intervención con políticas que aborden las dimensiones simbólicas y culturales de la desigualdad. Promover narrativas inclusivas, el reconocimiento de identidades diversas y la participación ciudadana en la toma de decisiones puede ser crucial para desactivar los factores profundos que subyacen a los conflictos sociales.

En síntesis, estos enfoques teóricos sugieren que la inversión en infraestructura puede contribuir a reducir la conflictividad social al mejorar las condiciones materiales de vida y satisfacer necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, para lograr una transformación más profunda y sostenible de los conflictos, es necesario abordar también las dimensiones simbólicas, culturales y relacionales de la desigualdad a través de procesos participativos, narrativas inclusivas y el reconocimiento de identidades diversas.

Ahora bien, existen algunos estudios previos que analizan la relación entre desigualdad y conflicto social en el Perú. Figueroa (2001) encuentra que entre 1970 y 1995 existió una correlación entre tasas de pobreza, desigualdad y frecuencia de conflictos sociales, especialmente en la sierra peruana. Por su parte, Gonzales de Olarte y Samamé (1991) enfatizan el rol de factores político-ideológicos como articuladores entre las condiciones de pobreza rural y la insurgencia senderista durante los años 80 y principios de los 90. La ideología maoísta de Sendero Luminoso interpeló los agravios sociales en las zonas andinas y les dio un cauce organizativo, aprovechando las debilidades institucionales en esas áreas.

Otros autores como Degregori (1990) también resaltan el peso de las ideologías y marcos interpretativos en la emergencia de la violencia política en esta etapa. Si bien las desigualdades regionales y étnicas tienen un rol, la radicalización ideológica de ciertas organizaciones fue determinante para el despliegue del conflicto armado interno.

Más recientemente, estudios como los de Arce (2017) y Tanaka (2012) buscan mostrar los cambios en la naturaleza de la protesta social entre los

periodos de violencia (1980-2000) y posviolencia (2001-2011). Si bien persisten las desigualdades estructurales, los repertorios de acción colectiva se han diversificado, con demandas más orientadas a derechos sociales que a la toma del poder político.

1.3.5. Planteamiento e idea central del trabajo

La presente investigación plantea como idea central que un incremento en los niveles de inversión pública en infraestructura tiene un efecto directo en la reducción de las brechas socioeconómicas y la desigualdad en dichas localidades. Asimismo, la disminución resultante de las disparidades en el índice de Gini conlleva una menor conflictividad social en esas regiones en los últimos años, expresada en una reducción tanto de la frecuencia como de la intensidad de protestas y acciones contenciosas.

Este planteamiento se sustenta teóricamente en dos relaciones causales principales. La primera es el vínculo positivo que existe entre el incremento del gasto público, especialmente en infraestructura productiva y social, y la equidad en la distribución del ingreso (Arteaga et al., 2019). Autores como Jaramillo y Alcázar (2022) argumentan que la inversión pública puede reducir la desigualdad al mejorar la dotación de capital físico y humano de los hogares más vulnerables. Asimismo, Zhang, Wang y Chen (2012) sostienen que el gasto público tiene un efecto progresivo al expandir la actividad económica e impulsar la productividad de los factores vía mejoras en infraestructura. Por su parte, Becker (2007) plantea que proyectos públicos en educación y salud fomentan la acumulación de capital humano, con efectos positivos en el crecimiento y la equidad en el largo plazo.

Sin embargo, como advierten Jaramillo y Alcázar (2022), la mayor inversión pública no se traduce automáticamente en mejoras tangibles en términos de reducción de disparidades sociales, por lo que se requieren intervenciones integrales con una adecuada focalización para materializar impactos redistributivos significativos.

La segunda relación causal que sustenta el planteamiento es el vínculo inverso entre menores niveles de desigualdad socioeconómica y una menor conflictividad social. Aquí el soporte teórico proviene del enfoque de la teoría de

las necesidades humanas, propuesta por Maslow y posteriormente desarrollada por Amartya Sen y otros autores en el campo económico (Femenia, 2014). Esta perspectiva plantea que los conflictos sociales surgen, en gran medida, de la insatisfacción de necesidades básicas como la supervivencia, la seguridad y la autorrealización.

Bajo esta perspectiva, la desigualdad socioeconómica profunda implica la privación sistemática de necesidades fundamentales para grandes segmentos de la población. Cuando las personas y comunidades carecen de acceso a recursos básicos, servicios esenciales y oportunidades de desarrollo, experimentan frustración, agravio y resentimiento que pueden desembocar en tensiones y conflictos sociales. En esa línea, la teoría sugiere que al reducir las brechas de desigualdad y garantizar un nivel de vida digno para todos, se mitigan las fuentes de malestar que alimentan la conflictividad.

Asimismo, esta teoría se vincula con el enfoque de Galtung sobre la violencia estructural, la cual se refiere a la negación sistemática de las necesidades humanas básicas, ya sea por condiciones de explotación, represión política o desigualdades arraigadas en el sistema social. Desde este punto de vista, la desigualdad extrema constituye una forma de violencia indirecta que genera sufrimiento, limita el desarrollo humano y siembra las semillas del conflicto al perpetuar injusticias y agravios históricos (Castro, 2009; Alzate, 2007).

En esa línea, una menor desigualdad socioeconómica podría contribuir a desactivar los factores estructurales que subyacen a la conflictividad social. Al asegurar que todas las personas tengan acceso a recursos, servicios y oportunidades para satisfacer sus necesidades básicas, se reduce el caldo de cultivo para la frustración, la alienación y el resentimiento que pueden desencadenar protestas, disturbios y confrontaciones sociales. Una distribución más equitativa de la riqueza y el bienestar también puede fortalecer la cohesión social, el sentido de pertenencia y la confianza en las instituciones, factores clave para prevenir y gestionar conflictos de manera pacífica y constructiva.

De este modo, para la contrastación empírica del planteamiento se recurrirá a un análisis comparativo longitudinal entre tres regiones de interés: Cusco, Cajamarca y Puno.

Se evaluará, por un lado, la evolución de las inversiones en infraestructura ejecutadas durante el periodo 2012-2022, el comportamiento del índice de Gini y las brechas socioeconómicas inter-regionales e intra-regionales en ese período, así como los datos disponibles sobre la frecuencia y características de la conflictividad social registrada a nivel regional en los últimos años.

La identificación de correlaciones significativas entre estas tres variables permitiría aportar evidencias sobre la solidez de las relaciones causales propuestas por las teorías encapsuladas en el planteamiento. Así se buscará comprobar si efectivamente hubo impactos tangibles de la mayor inversión pública ejecutada en la última década en términos de la reducción de disparidades sociales y la mitigación de la conflictividad en Cajamarca, Cusco y Puno.

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. El modelo econométrico y la relación inversión, brechas y conflictos

La econometría es una rama de la economía que utiliza herramientas estadísticas, matemáticas y computacionales para analizar datos económicos. Los modelos econométricos son ecuaciones que establecen relaciones cuantitativas entre variables económicas y permiten hacer estimaciones. Esta combina herramientas de la teoría económica, la estadística y las matemáticas para el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales. En particular, busca establecer interrelaciones entre variables económicas, cuantificar efectos dinámicos, predecir tendencias y contrastar planteamiento, modelos o teorías de forma empírica.

Según Gujarati y Porter (2010), la gran utilidad de los modelos econométricos radica en su capacidad para cuantificar las relaciones causales entre variables económicas y estimar sus elasticidades, lo cual permite evaluar numéricamente los impactos de cambios en una variable sobre otras variables de interés. Además, los modelos bien especificados pueden usarse para propósitos predictivos y de simulación.

En esta investigación se plantea un modelo econométrico de datos de panel para estimar el efecto que ha tenido la mayor inversión pública en infraestructura ejecutada entre 2012 y 2022 sobre la reducción de las disparidades socioeconómicas y la mitigación de la conflictividad en regiones tradicionalmente rezagadas. En particular, se estudiarán los casos de Cusco, Cajamarca y Puno.

Jaramillo y Alcázar (2022) sostienen que la inversión pública en infraestructura es fundamental para cerrar brechas de desarrollo en el Perú y puede tener un impacto progresivo sobre la distribución del ingreso al expandir las oportunidades económicas de los hogares más vulnerables. De confirmarse empíricamente esta relación causal para las regiones analizadas, se esperaría observar una reducción de los indicadores de desigualdad socioeconómica en la década estudiada asociada al mayor gasto público en infraestructura materializado en esas regiones.

Asimismo, según la teoría de las necesidades humanas (Femenia, 2014), la eventual reducción de disparidades e insatisfacción de necesidades básicas como la supervivencia, la seguridad y la autorrealización debería haber contribuido a mitigar los agravios y percepción de exclusión de ciertos grupos poblacionales, conteniendo los incentivos para expresar sus demandas mediante protestas violentas (Muller, 1985). Por tanto, se buscará comprobar si efectivamente se dio en paralelo una disminución o estabilización de los indicadores de conflictividad social a nivel regional.

La estimación de funciones econométricas que modelen estas relaciones permitirá cuantificar la magnitud de los efectos e identificar si son estadísticamente significativos, controlando por otros factores socioeconómicos y regionales. Así se podrá aportar evidencia empírica sobre la solidez de los vínculos causales hipotetizados entre estas tres variables principales.

Ahora bien, en el aspecto del diseño de investigación, el estudio de casos es un enfoque implica un examen intensivo, holístico y en profundidad de casos particulares (Tansey, 2007). Según Tansey (2007), la investigación mediante estudios de caso busca comprender en detalle el cómo y el porqué de fenómenos complejos contemporáneos, donde el investigador tiene poco o nulo control sobre los eventos, en escenarios de la vida real. Por ello, este método resulta especialmente útil para analizar interacciones entre diversos factores en casos específicos.

Uno de los principales aportes de un estudio de casos es la posibilidad de incorporar el contexto histórico, social y cultural de las unidades de análisis a la explicación causal de los fenómenos (Tansey, 2007). Asimismo, permite adaptar los conceptos, teorías y planteamiento a las particularidades de cada caso examinado a profundidad.

En esta investigación se utiliza un diseño de estudio de casos múltiples, analizando comparativamente las regiones de Cusco, Cajamarca y Puno durante 2012-2022 como escenarios diferenciados. La elección de varios casos contrastables refuerza la robustez y generalización de los hallazgos, al permitir identificar regularidades en las relaciones encontradas (Aragón y Guibert, 2016). Además, posibilita evaluar si una teoría se cumple en algunos contextos regionales, pero no en otros.

En ese sentido, estudiar comparativamente la evolución económica y social reciente de Cusco, Cajamarca y Puno, tres regiones diversas en términos geográficos, productivos e históricos, permitirá determinar si hay consistencia temporal en las correlaciones observadas entre cada par de variables principales que conforman el planteamiento, tanto entre regiones como al interior de cada una, fortaleciendo así la inferencia sobre la relación causal que las vincula.

La elección de estas tres regiones responde a varios criterios. En primer lugar, Cusco, Cajamarca y Puno son regiones que históricamente han registrado importantes rezagos en indicadores socioeconómicos y altos niveles de pobreza respecto al promedio nacional (INEI, 2021). De acuerdo con el Mapa de Pobreza Monetaria del INEI (2022), la incidencia de la pobreza en el 2020 era superior al 30% en los tres casos, frente a un 20% a nivel nacional en el mismo año.

En segundo lugar, en términos geográficos, estas tres regiones representan tanto la sierra como la selva del país. Cusco y Puno son eminentemente serranos, en tanto Cajamarca contiene selva alta y rica biodiversidad. Esta diversidad geográfica y ecológica permitirá comprobar si los factores relacionales varían entre regiones con contextos bastante diferenciados.

Un tercer criterio es que poseen trayectorias dispares recientes tanto en términos de inversiones públicas en infraestructura como de dinámicas de conflictividad social, lo cual es relevante para el análisis comparativo longitudinal que se requiere realizar para poner a prueba el planteamiento.

Finalmente, un cuarto factor determinante ha sido la disponibilidad suficiente de bases de datos y estadísticas socioeconómicas regionales comparables entre 2012 y 2022 sobre las principales variables requeridas por la investigación: ejecución presupuestal en proyectos de inversión pública, indicadores de desigualdad, pobreza y condiciones de vida, así como reportes sistematizados de conflictos sociales para ese periodo, factores indispensables para la modelación econométrica.

En conjunto, la diversidad, representatividad y factibilidad analítica de estos tres casos regionales permitirán un examen robusto y generalizable de las relaciones causales hipotetizadas, determinando si se cumple el modelo teórico en distintos contextos geográficos y socioeconómicos del país.

El método econométrico se basa en el uso de datos reales para estimar parámetros desconocidos de relaciones cuantitativas entre variables

económicas, con el fin de contrastar planteamiento o bien predecir valores futuros (Gujarati y Porter, 2010). Una de sus principales ventajas es que los modelos bien contruidos permiten aislar y medir el efecto de cada variable independiente sobre una variable dependiente de interés.

En particular, los datos de panel combinan una dimensión temporal (misma unidad de observación a través del tiempo) y una dimensión transversal (varias unidades de observación en un momento determinado), permitiendo estudiar dinámicas cambiantes dentro de unidades y diferencias entre unidades en periodos específicos (Baltagi, 2013).

Aquí se usará un modelo de datos de panel con series de tiempo anuales 2012-2022 para tres unidades regionales: Cusco, Cajamarca y Puno. Esto permitirá evaluar efectos temporales como el impacto acumulado de mayor inversión pública sobre las disparidades socioeconómicas y la conflictividad en cada región, así como efectos transversales, al comparar diferencias sistemáticas entre las tres regiones y la consistencia de los resultados.

Además, dado que no todas las variables socioeconómicas relevantes son directamente observables o existen rezagos temporales en algunos efectos, se emplearán técnicas econométricas como Mínimos Cuadros Ordinarios (MCO) o variables instrumentales para obtener estimadores consistentes y no sesgados de las relaciones planteadas.

2.2. Procedimiento metodológico

Para generar los datos de esta investigación, se requirió la consolidación de tres fuentes de información distintas. En la tabla 1.1 se detallan las fuentes y las variables específicas que aportan al estudio desde el año 2012.

Tabla 1.1. Datos consolidados

Fuente	Tipo	Variables y métrica	Periodo
Transparencia	Datos	<i>Promedio de inversión pública</i>	2012 -
Económica – MEF	estructurados	<i>devengada en las regiones de</i>	2022

Fuente	Tipo	Variables y métrica	Periodo
		<i>Cusco, Cajamarca y Puno por función</i>	
Defensoría del Pueblo	Informes defensoriales	<i>Promedio de conflictos sociales anuales</i>	2012 - 2022
INEI – Enaho	Encuesta	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Índice de Gini regional anual</i> • <i>Proporción de personas acorde al Índice de Pobreza Multidimensional (Vásquez, 2012)</i> 	2012 - 2022

Para la variable de sobre la inversión pública devengada en las regiones de Cusco, Cajamarca y Puno por función, los datos estructurados provienen del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), específicamente del portal de Transparencia Económica. Representa el monto anual de inversión pública devengada en las regiones de Cusco, Cajamarca y Puno, desglosada por función presupuestal. Esta información es de vital importancia para el estudio, ya que permite cuantificar el nivel de inversión gubernamental en infraestructura y proyectos de desarrollo realizados en cada una de estas regiones durante el período comprendido entre los años 2012 y 2022. Al contar con estos datos, se podrá analizar si existe una relación entre el incremento de la inversión pública y la reducción de las disparidades socioeconómicas y la conflictividad social en estas zonas tradicionalmente rezagadas.

En cuanto al promedio de conflictos sociales anuales, esta variable se obtiene de los informes defensoriales elaborados por la Defensoría del Pueblo. Los informes recopilan y sistematizan información sobre los conflictos sociales que se han suscitado en el territorio peruano, incluyendo las regiones de Cusco, Cajamarca y Puno. El promedio anual de conflictos sociales en estas regiones permitirá evaluar si la mayor inversión pública ha contribuido a mitigar o contener los niveles de conflictividad social.

Para el índice de Gini regional anual, esta variable se obtiene de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) realizada anualmente por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Contar con el Índice de Gini regional anual para

Cusco, Cajamarca y Puno durante el período 2012-2022 permitirá evaluar si la mayor inversión pública ha tenido un impacto en la reducción de las desigualdades económicas dentro de estas regiones. Un descenso en el Índice de Gini indicaría una distribución más equitativa de los ingresos, lo que podría estar relacionado con el efecto progresivo de la inversión en infraestructura.

De manera conjunta, la proporción de personas acorde al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es una medida desarrollada por Vásquez (2012) que considera diferentes dimensiones de la pobreza. Para ello, se consideraron los siguientes indicadores:

Tabla 1.2. Indicadores para la construcción del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)

Categoría	Métrica	Se considera que una persona es pobre (con carencias) si:
Educación	% de personas con escolaridad familiar	El jefe del hogar al que pertenece ha completado la educación primaria o tiene un nivel educativo inferior.
	% de personas con matrícula infantil	El hogar en el que reside tiene al menos un niño en edad escolar (6-18 años) que no está matriculado y aún no ha completado la educación secundaria.
Salud	% de personas con asistencia a centro de salud	En caso de molestia, enfermedad o accidente, no accede a los servicios de salud porque: no tiene dinero, el centro de salud está lejos de su hogar o no cuenta con seguro médico.
Vivienda	% de personas con electricidad	Su vivienda no tiene electricidad
	% de personas con agua	Su vivienda no tiene acceso adecuado a agua potable.

Categoría	Métrica	Se considera que una persona es pobre (con carencias) si:
	% de personas con desagüe	Su vivienda no tiene desagüe con conexión a red pública.
	% de personas con piso de la vivienda	El piso de su vivienda está sucio, con arena o estiércol.
	% de personas con combustible de cocina	En su vivienda se usa generalmente carbón o leña para cocinar.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENAHO (2012-2022)

Esta variable se obtiene de la ENAHO del INEI y representa la proporción de personas que se encuentran en situación de pobreza multidimensional en las regiones de Cusco, Cajamarca y Puno durante el período 2012-2022. Al analizar la evolución de esta variable a lo largo del tiempo, se podrá determinar si la mayor inversión pública ha contribuido a reducir los niveles de pobreza multidimensional en estas regiones, lo que indicaría una mejora en las condiciones de vida de la población.

En ese sentido, el proceso metodológico se guiará de la siguiente manera:

1. Construcción de bases de datos en panel homologando las estadísticas interregionales y temporales. Se verificará la calidad, consistencia y comparabilidad de los datos como sustento para la modelación.
2. Especificación de modelos teóricos que representen las relaciones causales esperadas entre incrementos en la inversión pública en infraestructura y la reducción de brechas socioeconómicas y conflictos sociales.
3. Estimación econométrica inicial de los parámetros por MCO e inferencia estadística sobre la significancia de efectos. Se evaluarán supuestos como el de identificabilidad, multicolinealidad o autocorrelación.
4. Análisis e interpretación de la capacidad explicativa-predictiva, signos y significancia estadística de cada variable independiente sobre las dependientes, para las 3 regiones y en conjunto.
5. Comprobación del ajuste del modelo teórico inicial a los datos empíricos, evaluando el soporte estadístico a favor o en contra de las relaciones

causales hipotetizadas entre inversión pública en infraestructura, equidad social y conflictividad.

Finalmente, se plantean conclusiones y recomendaciones de política económica y social considerando los resultados observados.

CAPÍTULO 3: CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS

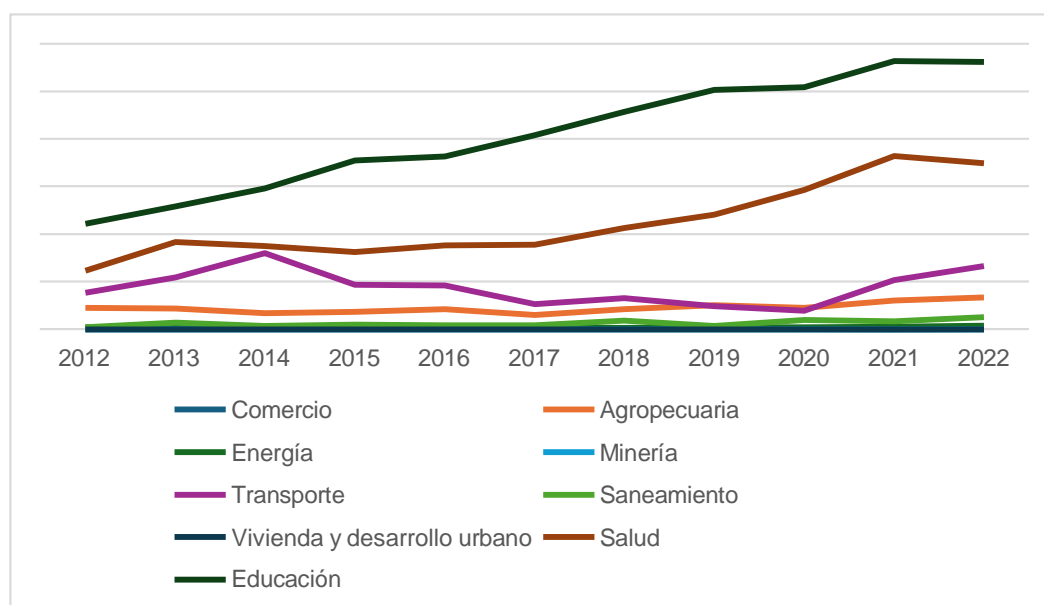
En este capítulo se analiza la evolución de la inversión pública ejecutada por función en tres regiones del Perú durante la última década (2012-2022): Cusco, Cajamarca y Puno. Asimismo, se examina la relación entre esta inversión y los indicadores socioeconómicos como el índice de Gini, la población con necesidades básicas insatisfechas y el nivel de conflictividad social.

3.1. Cusco

3.1.1. Inversión en infraestructura 2012-2022

En la última década, la región Cusco ha experimentado un significativo incremento en los niveles de inversión pública ejecutada, impulsada principalmente por los proyectos de gran envergadura relacionados con el sector educación, salud y la necesidad de mejorar la infraestructura vial. Según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el monto de inversión pública ejecutada en Cusco pasó de S/ 1,200 millones en 2012 a S/ 2,800 millones en 2022, lo que representa un aumento del 88%. Este crecimiento ha sido particularmente notable a partir de 2017, cuando se dio un impulso significativo a las inversiones en infraestructura vial y de transportes, así como en educación.

Gráfico 2.1: Inversión Pública ejecutada por función en la región de Cusco (2012-2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Transparencia Económica (s.f.)

En el caso de Cusco, los datos brindados permiten analizar la dinámica de la inversión pública en los últimos once años y comprender los patrones y tendencias que han prevalecido en diversos sectores clave. En primer lugar, es importante destacar el sector educativo como uno de los principales receptores de la inversión pública en la región. Los montos asignados a este rubro han experimentado un crecimiento sostenido durante el período analizado, pasando de 443, 857, 980 soles en 2012 a 1.125, 737, 915 soles en 2022. Esta tendencia ascendente refleja la prioridad que se ha otorgado al fortalecimiento del sistema educativo, lo cual es fundamental para impulsar el desarrollo humano y la formación de capital humano calificado.

De manera similar, el sector salud ha sido otro destinatario importante de la inversión pública en Cusco. Los montos asignados a este sector han aumentado significativamente, pasando de 247, 950, 041 soles en 2012 a 699, 273, 789 soles en 2022. Esta inversión en infraestructura y servicios de salud es crucial para mejorar el bienestar de la población y garantizar un acceso equitativo a la atención médica.

Por otro lado, sectores como el transporte, la energía y el saneamiento también han recibido importantes inversiones, aunque con fluctuaciones más notables a lo largo de los años. El sector transporte, en particular, ha experimentado picos de inversión significativos, como en 2014 con 321.679.981 soles y en 2022 con 266.136.381 soles. Estas inversiones en infraestructura vial y de transporte son fundamentales para facilitar la conectividad y el movimiento de bienes y personas dentro de la región y con otras regiones del país.

Sin embargo, es importante señalar que algunos sectores, como la minería, el comercio y la vivienda y desarrollo urbano, han recibido niveles de inversión pública relativamente bajos en comparación con otros sectores. Esto podría indicar la necesidad de reevaluar las prioridades de inversión y considerar un enfoque más equilibrado que aborde las necesidades de todos los sectores económicos y sociales.

Un aspecto notable es el sector agropecuario, que ha recibido una inversión pública sustancial, aunque con fluctuaciones significativas a lo largo de los años. Este sector es de vital importancia para la economía de Cusco, dada su tradición agrícola y ganadera. Sin embargo, las variaciones en los montos de

inversión podrían sugerir una falta de planificación estratégica a largo plazo o la influencia de factores externos, como las condiciones climáticas o los precios de los productos agrícolas.

Los datos presentados sobre la inversión pública en Cusco brindan una perspectiva valiosa sobre el estado actual de la inversión en la región. Si bien las cifras nos permiten identificar tendencias y patrones generales, es necesario complementarlas con un análisis más profundo y crítico que considere factores cualitativos y ejemplos concretos para obtener una comprensión más completa de la situación.

Otro aspecto preocupante es la volatilidad y falta de consistencia en la inversión en algunos sectores. Por ejemplo, en el caso del transporte, se observan fluctuaciones considerables de un año a otro, lo que podría dificultar la planificación y ejecución de proyectos a largo plazo. Esta situación se evidencia en la construcción de carreteras y otras obras de infraestructura vial, donde una inversión irregular podría resultar en retrasos, interrupciones y sobrecostos significativos.

Además, es importante cuestionar si la distribución actual de la inversión pública en Cusco está realmente alineada con las necesidades y prioridades de desarrollo de la región. Por ejemplo, a pesar de la importancia del sector agropecuario para la economía local, la inversión en este rubro no ha sido tan elevada como en otros sectores. Esta situación podría estar desatendiendo las necesidades de las comunidades rurales y limitando el potencial de desarrollo agrícola de la región.

En resumen, si bien la data muestra un esfuerzo por invertir en áreas cruciales como salud y educación, también revela desequilibrios e inconsistencias en la asignación de recursos que podrían estar comprometiendo el desarrollo integral y sostenible de la región de Cusco. Es necesario un análisis profundo y una planificación estratégica que considere las necesidades específicas de cada sector y asegure una distribución más equitativa y eficiente de la inversión pública.

En cuanto a proyectos emblemáticos, uno de ellos ha sido la construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica Machupicchu-Quillabamba-Cusco, con una inversión superior a los S/ 600 millones, que ha permitido mejorar el suministro de energía eléctrica en zonas rurales de la región. Asimismo, se han ejecutado

importantes obras viales como la Carretera Interoceánica Sur, la rehabilitación de la vía Cusco-Quillabamba y la construcción de la vía Cusco-Paruro, con montos de inversión que superan los S/ 1,500 millones en conjunto.

En el sector minero, destaca la inversión de más de S/ 800 millones en la ampliación de la mina Constancia, operada por la empresa Hudbay, así como las inversiones en exploración y desarrollo de proyectos como Las Bambas, Coroccohuayco y Quechua, que han dinamizado la economía regional y generado importantes ingresos fiscales.

Otro rubro relevante ha sido la inversión en saneamiento básico, con obras como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Jerónimo (S/ 145 millones), el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Cusco (S/ 150 millones), y diversos proyectos de agua y saneamiento en provincias como Anta, Calca y Urubamba.

Es importante mencionar que, si bien la ejecución de la inversión pública se ha concentrado principalmente en la provincia de Cusco y otras zonas urbanas, en los últimos años se han realizado esfuerzos por distribuir los recursos de manera más equitativa hacia las provincias alejadas y zonas rurales. Proyectos como la rehabilitación de la Carretera Cusco-Sicuani-Yauri y la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado en distritos de Chumbivilcas, Espinar y Canchis han buscado reducir las brechas de acceso a servicios básicos en estas zonas.

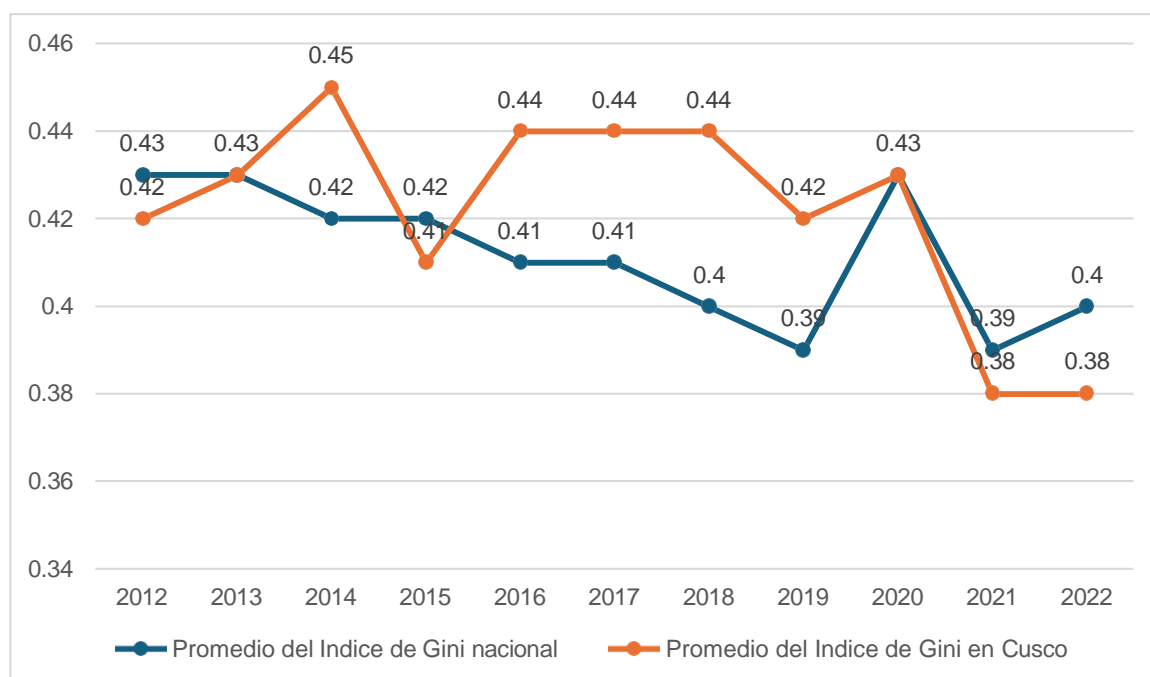
No obstante, persisten desafíos importantes en cuanto a la ejecución oportuna y eficiente de los proyectos, así como en la priorización de inversiones que atiendan las necesidades más apremiantes de la población cusqueña, especialmente en áreas como comercio, agropecuaria y el desarrollo productivo en zonas rurales.

3.1.2. Evolución de indicadores socioeconómicos

A pesar del significativo incremento en la inversión pública ejecutada en Cusco durante el periodo 2012-2022, los indicadores de desigualdad en la región no muestran una tendencia decreciente sostenida, lo que podría sugerir que los esfuerzos de inversión no han logrado traducirse en mejoras sustanciales en términos de reducción de brechas socioeconómicas.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, se ha mantenido relativamente estable en Cusco durante la última década, fluctuando alrededor de 0.40, con una leve disminución a 0.38 en 2022.

Gráfico 2.2: Índice de Gini en la región de Cusco (2012-2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENAHO (INEI, 2012-2022)

Los datos presentados sobre el índice de Gini y el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas en la región de Cusco desde 2012 hasta 2022 nos brindan una perspectiva importante sobre el estado de la desigualdad y las carencias en esta región, lo cual se relaciona directamente con la efectividad de la inversión pública realizada.

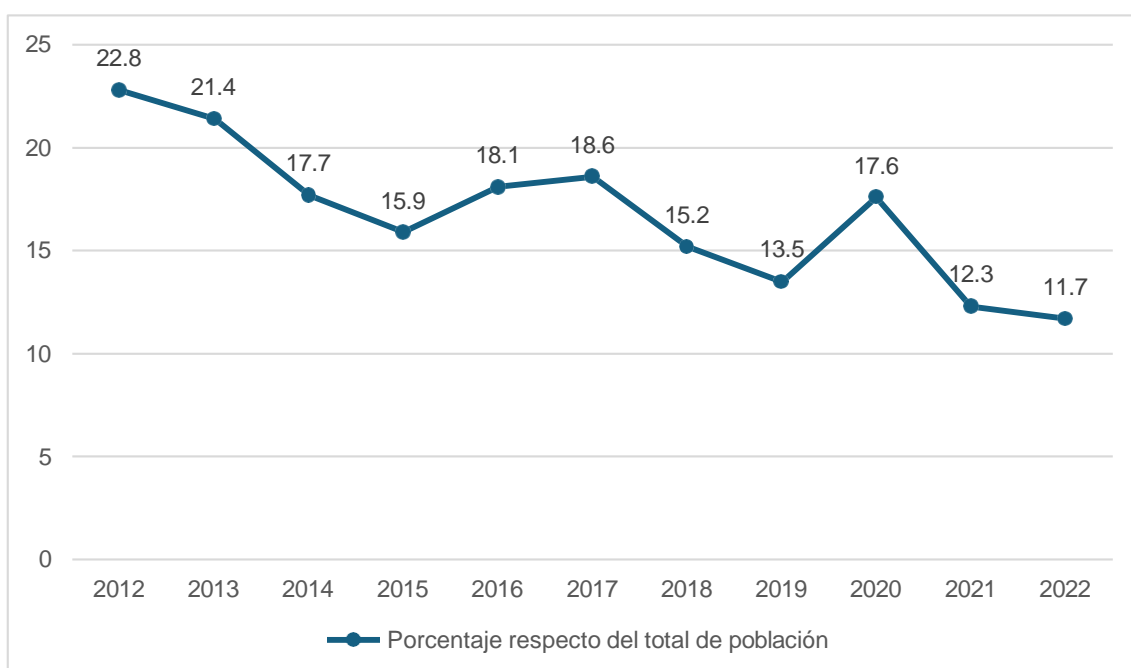
En cuanto al índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, se observa una tendencia fluctuante durante el período analizado. Si bien el índice ha disminuido de 0.42 en 2012 a 0.38 en 2021 y 2022, lo que indica una reducción en la desigualdad, aún se mantiene en niveles relativamente altos. Un índice de Gini cercano a 0.4 refleja una significativa brecha entre los niveles de ingresos de los hogares más ricos y los más pobres en la región.

Esta situación sugiere que, a pesar de los esfuerzos realizados a través de la inversión pública, persisten desafíos importantes para lograr una

distribución más equitativa de la riqueza y las oportunidades económicas en Cusco. Es posible que los beneficios de dicha inversión no estén llegando de manera efectiva a los sectores más vulnerables de la población, lo que perpetúa las disparidades existentes.

Por otro lado, el porcentaje de población con al menos una necesidad básica insatisfecha, como acceso a agua potable, saneamiento, vivienda adecuada, entre otras, ha mostrado una tendencia decreciente en la región de Cusco. Desde un 22.8% en 2012, este indicador se redujo a 11.7% en 2022, lo que representa un avance significativo en la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida de la población.

Gráfico 2.3: Población con al menos una necesidad básica insatisfecha en la región de Cusco (2012 – 2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENAHO (INEI, 2012-2022)

Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de esta disminución, aún existe un porcentaje considerable de personas que carecen de acceso a servicios básicos esenciales. Esta situación sugiere que los esfuerzos de inversión pública en áreas como vivienda, saneamiento y desarrollo urbano, aunque han tenido un impacto positivo, no han sido suficientes para erradicar por completo las carencias más apremiantes.

Además, es necesario analizar si la reducción en el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas ha sido homogénea en toda la región o si persisten bolsones de pobreza y marginación en determinadas zonas o comunidades. Esta información es crucial para enfocar de manera más efectiva los recursos de inversión pública hacia las áreas más vulnerables.

Las brechas se acentúan aún más al considerar las diferencias urbano-rurales. Según el INEI, el 40% de la población rural de Cusco se encontraba en situación de pobreza en 2022, en comparación con solo el 24% en zonas urbanas. Esta brecha se traduce en desigualdades en el acceso a servicios básicos, educación de calidad y oportunidades económicas. En ese sentido, aunque proyectos como la expansión de redes de agua y saneamiento han buscado cerrar estas brechas, persisten retos estructurales que requieren intervenciones integrales y sostenidas en el tiempo.

Los datos sugieren que la inversión pública en Cusco no ha logrado traducirse en una reducción significativa de la desigualdad debida, en parte, a que gran parte de estos recursos se han concentrado en proyectos de infraestructura física, sin prestar suficiente atención al desarrollo del capital humano y las capacidades productivas de los sectores más vulnerables. Si bien las obras viales, energéticas y de saneamiento son clave, también se requieren inversiones sustanciales en educación, salud y programas de generación de ingresos que empoderen a las poblaciones rurales y periurbanas.

Adicionalmente, persisten deficiencias en la articulación y coordinación de las intervenciones públicas a nivel regional y local. Muchos proyectos parecen responder a lógicas sectoriales desconectadas, sin una visión integral de desarrollo territorial que permita potenciar sinergias y maximizar el impacto redistributivo de la inversión. Se requiere fortalecer los mecanismos de planificación y gestión descentralizados para asegurar una mejor focalización de los recursos según las necesidades específicas de cada zona.

Por otro lado, no debe soslayarse el papel que han jugado los conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera en minar la efectividad de las inversiones públicas. Los constantes episodios de protesta, paralizaciones y enfrentamientos han dificultado la ejecución oportuna de proyectos, además de erosionar la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Abordar estos conflictos de manera constructiva y promover un verdadero diálogo intercultural

son condiciones necesarias para crear un entorno propicio para que la inversión pública rinda sus frutos en términos de desarrollo equitativo.

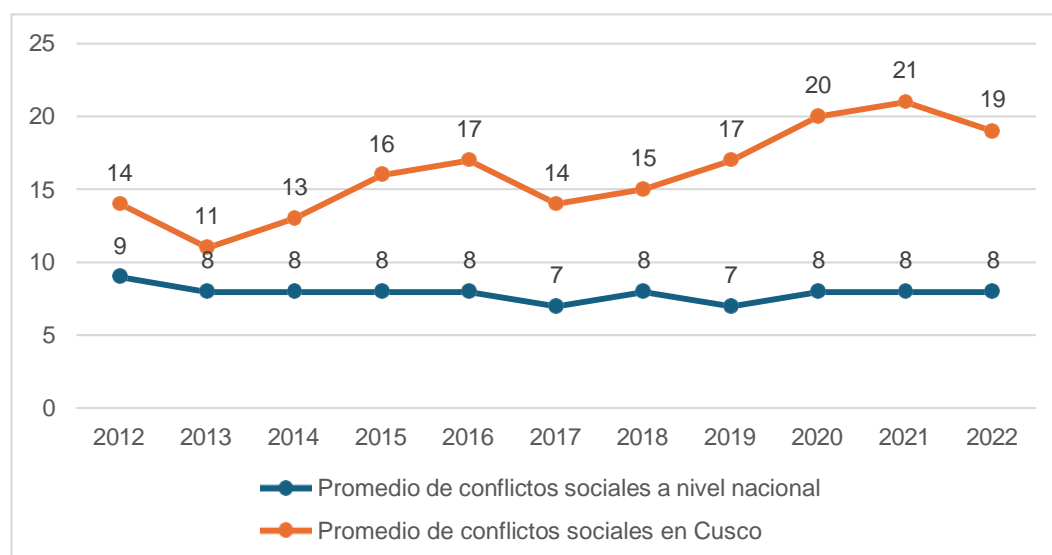
En síntesis, si bien Cusco ha experimentado un boom de inversión pública en la última década, los persistentes niveles de desigualdad evidencian la necesidad de repensar las estrategias de inversión, priorizando un enfoque territorial integrado, con mayor participación ciudadana, y que combine infraestructura con el fortalecimiento de capacidades humanas y productivas.

3.1.3. Conflictividad social regional

La región Cusco ha sido escenario de una intensa conflictividad social durante el periodo 2012-2022, con numerosos episodios de protestas, bloqueos de vías y enfrentamientos que han puesto en evidencia las tensiones subyacentes en torno a la distribución de los beneficios del crecimiento económico y la actividad extractiva.

El análisis de los datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo revela patrones significativos en cuanto a la conflictividad social en la región de Cusco en comparación con el promedio nacional.

Gráfico 2.4: Promedio de conflictos sociales en la región de Cusco (2012-2022)



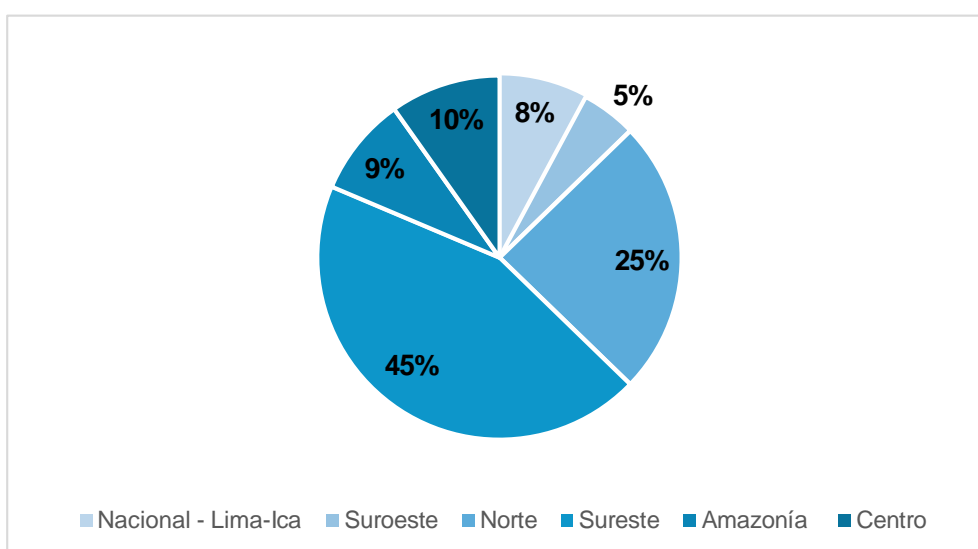
Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes de la Defensoría del Pueblo (2012-2022)

En primer lugar, es notable que el promedio de conflictos sociales en la región de Cusco supera consistentemente el promedio nacional durante el

período 2012-2022. Mientras que el promedio nacional oscila entre 7 y 9 conflictos por año, el promedio en Cusco fluctúa entre 11 y 21 conflictos anuales. Está marcada disparidad sugiere que la región enfrenta desafíos particulares en términos de gestión de conflictos y cohesión social. Los datos revelan una tendencia ascendente preocupante en el número de conflictos sociales en Cusco. A partir de 2015, se observa un incremento sostenido en el promedio anual, alcanzando su punto máximo en 2021 con 21 conflictos registrados. Esta escalada podría ser indicativa de tensiones subyacentes no resueltas, así como de una creciente insatisfacción de diversos sectores de la población con respecto a las políticas públicas implementadas o la gestión de recursos y servicios.

Es importante destacar que detrás de estas cifras se encuentran una multitud de demandas y reivindicaciones sociales, económicas, ambientales y gubernamentales. En ese sentido, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, a finales del año 2022, el 43% de los conflictos sociales se concentraron en la unidad territorial del sur este del Perú, con regiones como Apurímac, Cusco y Puno.

Gráfico 2.5: Distribución de conflictos sociales por Unidad Territorial en 2022 (%)



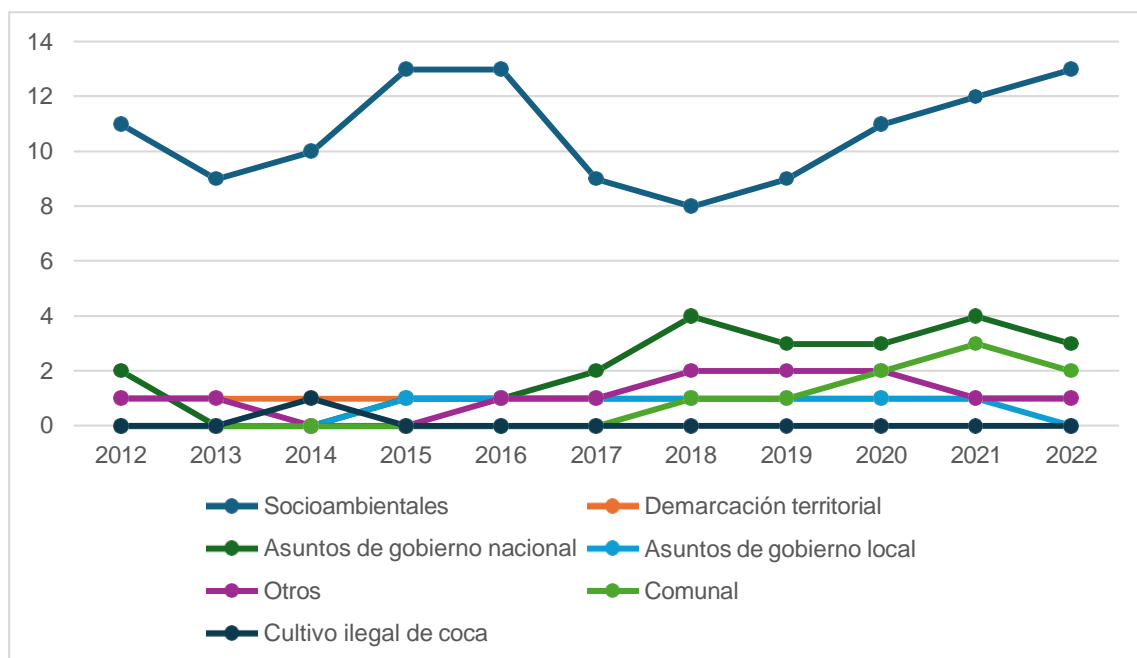
Fuente: Elaboración propia a partir de reportes de la SGSD-PCM (2023)

Esta situación podría estar vinculada a diversos factores como los altos niveles de pobreza, desigualdad y déficit en la provisión de servicios básicos, lo que puede generar malestar y protestas sociales. De hecho, según el reporte de

la SGSD-PCM (2023), el sur este del Perú concentró 21 conflictos en etapa intermedia, siendo los del tipo de conflictividad en minería y bienes y servicios los que más incidencia obtuvieron. La presencia de proyectos mineros, energéticos u otros en estas zonas, a menudo genera disputas por el uso de recursos naturales, impactos ambientales y distribución de beneficios.

Ahora bien, en cuanto a los tipos de conflictos en la región de Cusco se evidencian diversas tendencias. En primera instancia, resulta imperativo destacar la predominancia de los conflictos socioambientales en la región. Esta categoría exhibe los valores más elevados en comparación con otras tipologías, manteniéndose en un promedio de 11 conflictos anuales a lo largo del período analizado. Tal preponderancia sugiere una creciente preocupación por las implicaciones ambientales de las actividades económicas y el impacto en los ecosistemas locales, lo cual podría estar vinculado a la importancia de la actividad minera y el turismo en la zona.

Gráfico 2.6: Distribución de conflictos sociales por tipo en la región de Cusco (2012-2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes de la Defensoría del Pueblo (2012-2022)

Otro aspecto notable radica en la relativa estabilidad de los conflictos relacionados con la demarcación territorial, que se han mantenido en un nivel

constante de un conflicto por año durante la década estudiada. Esta persistencia podría indicar tensiones subyacentes y disputas no resueltas en torno a los límites geográficos y la delimitación de jurisdicciones, aspectos cruciales en una región con una compleja diversidad étnica y cultural.

Por otro lado, los asuntos de gobierno nacional han experimentado fluctuaciones considerables, con un aumento sustancial a partir de 2018, alcanzando un máximo de 4 conflictos en 2021. Esta tendencia ascendente podría reflejar una creciente insatisfacción con las políticas y decisiones tomadas a nivel central, así como una mayor movilización de los actores locales en defensa de sus intereses y reivindicaciones. En contraste, los asuntos de gobierno local han mantenido una presencia relativamente baja, con un conflicto anual desde 2015 hasta 2021, y ninguno registrado en 2022. Esta situación podría sugerir una mayor capacidad de gestión y resolución de conflictos a nivel municipal, o bien, una menor visibilidad de las tensiones a esta escala.

En esa línea, existen casos emblemáticos que reflejan la dinámica compleja de la conflictividad social en Cusco. Uno de los más importantes es el del proyecto Conga de la empresa Newmont, que desató masivas protestas y una crisis política a nivel nacional en 2011-2012. Si bien este proyecto fue finalmente cancelado, las secuelas del conflicto han perdurado en la región.

Otros focos de conflictividad han sido los proyectos mineros Las Bambas y Corocohuayco, donde comunidades campesinas han expresado su rechazo a la expansión de estas operaciones por temor a los impactos ambientales y a no recibir una justa compensación. Las frecuentes paralizaciones y bloqueos de vías de acceso a estas minas han generado cuantiosas pérdidas económicas y han puesto en riesgo la continuidad de estas inversiones millonarias.

No obstante, la conflictividad en Cusco no se limita al sector minero. También se han registrado numerosos conflictos comunales por la disputa de recursos naturales como tierras y agua, así como conflictos laborales y protestas contra autoridades locales y regionales por presuntos actos de corrupción y mal manejo de recursos públicos.

Un factor clave que ha exacerbado la conflictividad social en Cusco es la percepción generalizada de falta de transparencia y rendición de cuentas en torno al uso de los recursos provenientes de la actividad extractiva. A pesar de las cuantiosas transferencias de canon minero que ha recibido la región, persiste

un sentimiento de que estos ingresos no se están revirtiendo en beneficios tangibles para las poblaciones más vulnerables y afectadas por los impactos socioambientales de la minería.

Esta desconexión entre los ingresos fiscales y la inversión social ha socavado la legitimidad de las instituciones públicas regionales y locales, alimentando un círculo vicioso de protestas, paralizaciones y respuestas represivas que ahondan aún más la desconfianza ciudadana. Se requiere una profunda reforma de los mecanismos de gestión y fiscalización de estos recursos, con una mayor participación y control ciudadano, para revertir esta espiral de conflictividad.

En este contexto, es fundamental revalorizar el diálogo intercultural y los mecanismos de consulta previa como herramientas clave para prevenir y gestionar los conflictos sociales de manera pacífica y constructiva. Solo a través de un verdadero entendimiento de las cosmovisiones y aspiraciones de las comunidades locales se podrán diseñar políticas públicas e intervenciones de inversión que sean percibidas como legítimas y aceptadas por la ciudadanía.

En resumen, la intensa conflictividad social que ha experimentado Cusco en la última década es un llamado de atención sobre los límites de un modelo de crecimiento económico que no ha logrado redistribuir equitativamente sus beneficios. Si bien la inversión pública es una pieza clave, se requiere complementarla con reformas institucionales profundas que fortalezcan la transparencia, la participación ciudadana y el diálogo intercultural, a fin de encauzar las demandas sociales por vías democráticas y favorecer una mayor cohesión social en esta emblemática región del país.

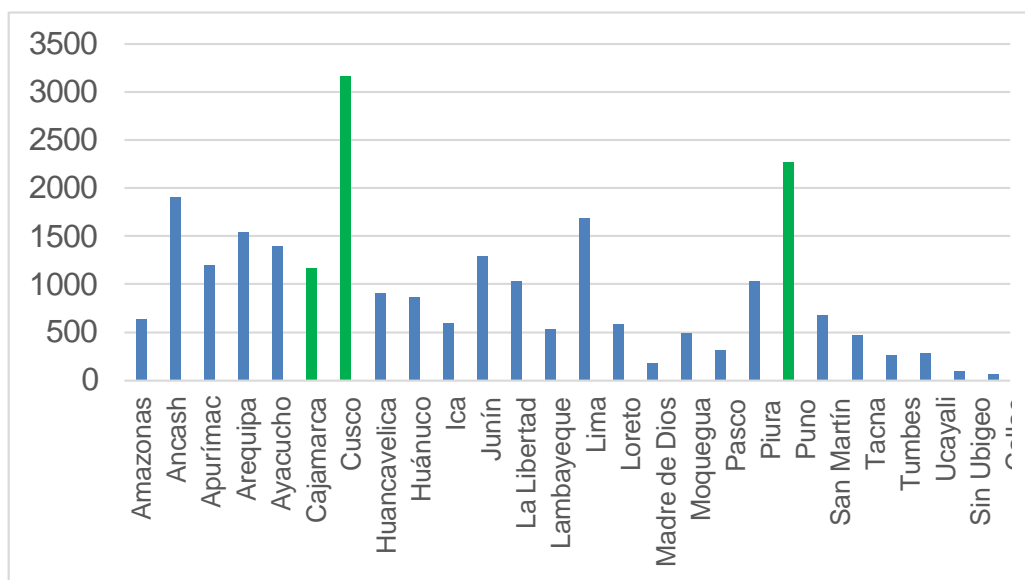
3.2. Cajamarca

3.2.1. Inversión en infraestructura 2012-2022

La región Cajamarca ha sido escenario de cuantiosas inversiones públicas en el último decenio, impulsadas principalmente por los ingresos provenientes del canon minero generado por los megaproyectos extractivos que operan en su territorio. Sin embargo, la ejecución de estas inversiones ha estado plagada de dificultades y cuestionamientos en torno a su eficiencia, transparencia y real contribución al desarrollo equitativo de la región.

Según cifras de la Contraloría de la República, hasta diciembre de 2023 se ejecutaron obras públicas en Cajamarca por un monto superior a los S/ 1, 702 millones, ubicándola entre las regiones con mayor inversión per cápita a nivel nacional. Asimismo, concentra un total de 1172 obras, ubicándose entre las siete regiones con más obras en ejecución.

Gráfico 2.7: Obras públicas a nivel nacional en mayo de 2024



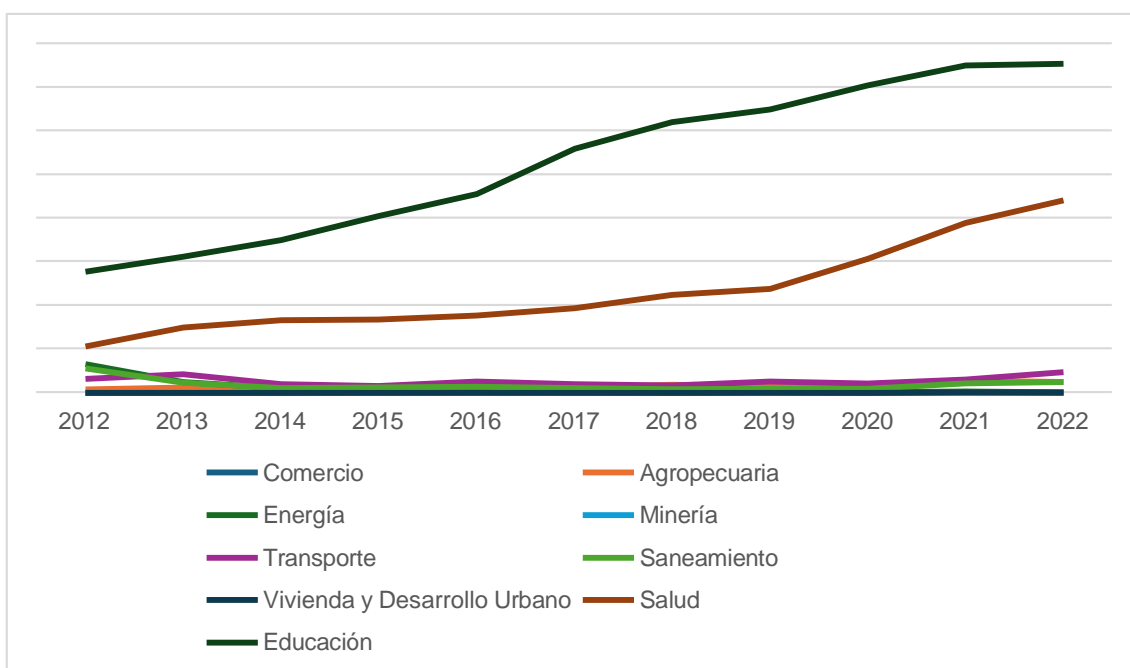
Fuente: Elaboración propia a partir de Infobras (s.f.)

Una porción significativa de la inversión se destinó a obras de infraestructura vial, como la rehabilitación de la Carretera Longitudinal de la Sierra, la vía Cajamarca-Bambamarca y múltiples carreteras vecinales. También se ejecutaron proyectos de saneamiento básico, como las plantas de tratamiento

de aguas residuales de Cajamarca y Jaén, así como obras de electrificación rural y la ampliación del aeropuerto de Cajamarca.

Según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el monto de inversión pública ejecutada en Cajamarca pasó de S/ 1,486 millones en 2012 a S/ 2,800 millones en 2022, lo que representa un aumento del 88% en el periodo. Este crecimiento ha sido particularmente notable a partir de 2017, cuando se dio un impulso significativo a las inversiones en infraestructura vial y de transportes, así como en educación.

Gráfico 2.8: Inversión Pública ejecutada por función en la región de Cajamarca (2012-2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Transparencia Económica (s.f.)

No obstante, la inversión pública realizada en Cajamarca ha experimentado una dinámica fluctuante a lo largo de los años, con períodos de aumento y disminución en diversos sectores. Por ejemplo, en el sector comercio, se observa una tendencia relativamente estable hasta el año 2017, con un pico de inversión en 2016 de 925,281 soles. Sin embargo, a partir de 2018, la inversión disminuyó drásticamente, alcanzando su punto más bajo en 2022 con 194,325 soles. Esta caída sustancial podría estar asociada a factores como cambios en las prioridades de inversión o restricciones presupuestarias.

Por otro lado, el sector agropecuario ha sido uno de los principales destinatarios de la inversión pública en la región de Cajamarca. Aunque ha experimentado fluctuaciones, se aprecia un aumento significativo en los últimos años, alcanzando su máximo en 2021 con 53,674,014 soles. Este incremento podría estar vinculado a programas de desarrollo rural, mejora de infraestructura agrícola y promoción de la producción agropecuaria en la región.

En cuanto al sector energético, se observa una tendencia decreciente desde 2012, cuando se registró una inversión de 129,981,829 soles. A partir de ese año, la inversión ha disminuido considerablemente, llegando a 1,453,741 soles en 2022. Esta reducción podría estar relacionada con la finalización de proyectos energéticos importantes o una menor prioridad en este sector en comparación con otros.

El sector minero, a pesar de no ser uno de los más importantes en términos de inversión, ha mantenido un nivel relativamente estable a lo largo de los años, con algunas fluctuaciones menores. Sin embargo, es importante destacar que la minería es un sector clave para la economía de la región y su desarrollo podría requerir una mayor inversión pública en el futuro.

En el ámbito del transporte, se aprecia una tendencia fluctuante, con períodos de aumento y disminución de la inversión. No obstante, en los últimos años, se ha registrado un incremento sustancial, alcanzando su máximo en 2022 con 94,470,669 soles. Esto podría estar vinculado a la construcción o mejora de carreteras, puentes y otros proyectos de infraestructura vial en la región.

El sector de saneamiento ha experimentado una dinámica similar al transporte, con altibajos en la inversión pública. Sin embargo, en los últimos años, se ha observado un aumento significativo, llegando a 47,230,927 soles en 2022. Este incremento podría estar relacionado con la construcción o mejora de sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la región.

En cuanto a vivienda y desarrollo urbano, la inversión ha sido relativamente baja en comparación con otros sectores, manteniéndose estable durante la mayor parte del período analizado. No obstante, en 2022, se registró una inversión mínima de 11,550 soles, lo que podría indicar una priorización de otros sectores o una falta de proyectos significativos en este ámbito.

Los sectores de salud y educación han sido los principales receptores de la inversión pública en la región de Cajamarca. Ambos han experimentado un crecimiento sostenido a lo largo de los años, alcanzando sus máximos en 2022 con 882,325,286 soles y 1,508,078,397 soles, respectivamente. Esto podría estar asociado a la construcción o mejora de infraestructura hospitalaria, centros de salud, instituciones educativas, programas de capacitación docente y otros proyectos orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud y educación en la región.

La data presentada sobre la inversión pública en Cajamarca revela algunos aspectos preocupantes y desafíos que enfrenta la gestión de los recursos públicos en esta región. En primer lugar, se observa una marcada disparidad en la distribución de la inversión entre los diferentes sectores. Mientras que áreas como salud y educación han recibido una considerable inyección de recursos, otros sectores clave para el desarrollo sostenible de la región, como energía, minería y vivienda, han experimentado una disminución sustancial. Esta asignación no equilibrada podría tener implicaciones negativas en el mediano y largo plazo, ya que se estarían descuidando áreas fundamentales para el progreso económico y social de la región.

Un ejemplo concreto de esta situación es el caso del sector energético, cuya inversión ha caído drásticamente desde los 129,981,829 soles en 2012 hasta los 1,453,741 soles en 2022. Esta reducción significativa podría poner en riesgo la capacidad de la región para satisfacer la creciente demanda energética, lo que a su vez podría limitar el desarrollo de otras actividades económicas y la calidad de vida de la población.

En segundo lugar, es importante cuestionar la eficacia y el impacto real de la inversión pública en cada sector. Por ejemplo, a pesar del aumento sustancial en la inversión en educación, persisten desafíos significativos, como la deserción escolar, la falta de acceso equitativo a la educación en zonas rurales y la calidad deficiente de la enseñanza (Quispe et al., 2024). Esto podría sugerir que la inversión no se está canalizando de manera efectiva o que existen otros factores subyacentes que deben abordarse, como la infraestructura inadecuada o los problemas socioeconómicos que enfrentan las familias.

Además, es fundamental analizar la distribución geográfica de la inversión pública dentro de la región. Cajamarca es una región diversa, con áreas urbanas

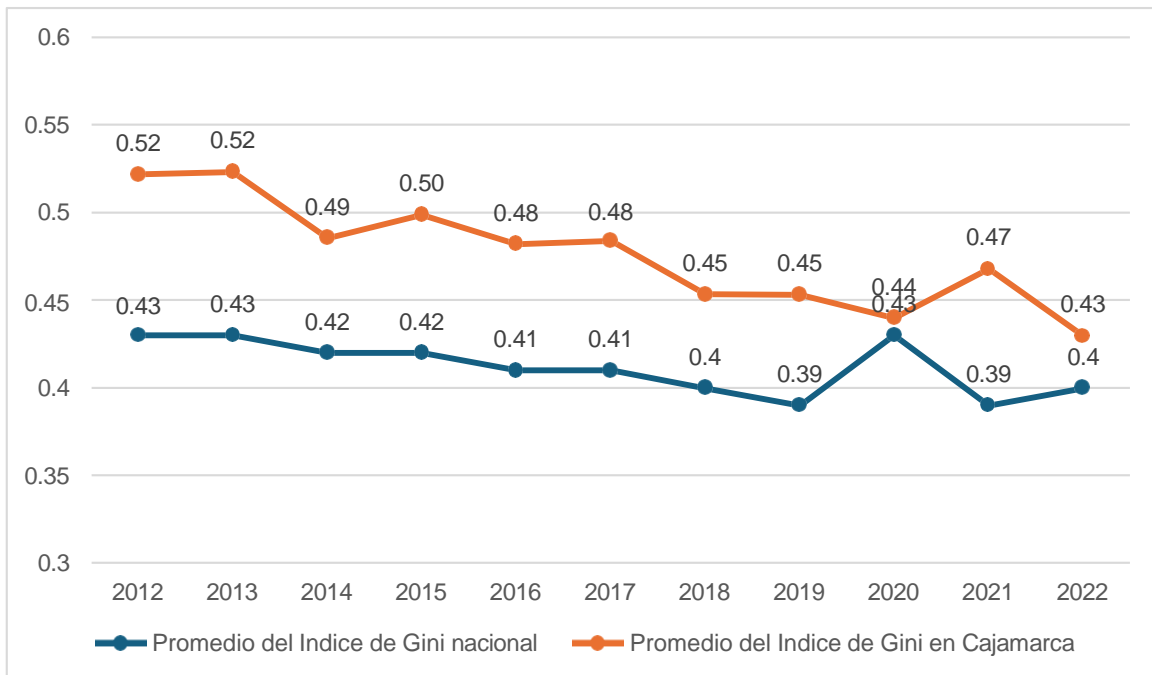
y rurales, y es posible que la inversión se haya concentrado en ciertas zonas, dejando otras áreas rezagadas.

3.2.2. Evolución de indicadores socioeconómicos

A pesar de los ingentes recursos invertidos en Cajamarca durante el período 2012-2022, los indicadores de desigualdad en la región no muestran una mejora sustancial, situación que pone en tela de juicio la efectividad redistributiva de esta masiva inversión pública.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, se ha mantenido prácticamente estancado en Cajamarca, pasando de 0.43 en 2012 a 0.36 en 2022. Esta persistencia de altos niveles de desigualdad es preocupante considerando que Cajamarca ha sido una de las regiones que más recursos ha recibido por concepto de canon minero. Solo en el período 2012-2022 se estima que ingresaron más de S/ 5,000 millones por esta fuente de financiamiento.

Gráfico 2.9: Índice de Gini en la región de Cajamarca (2012-2022)



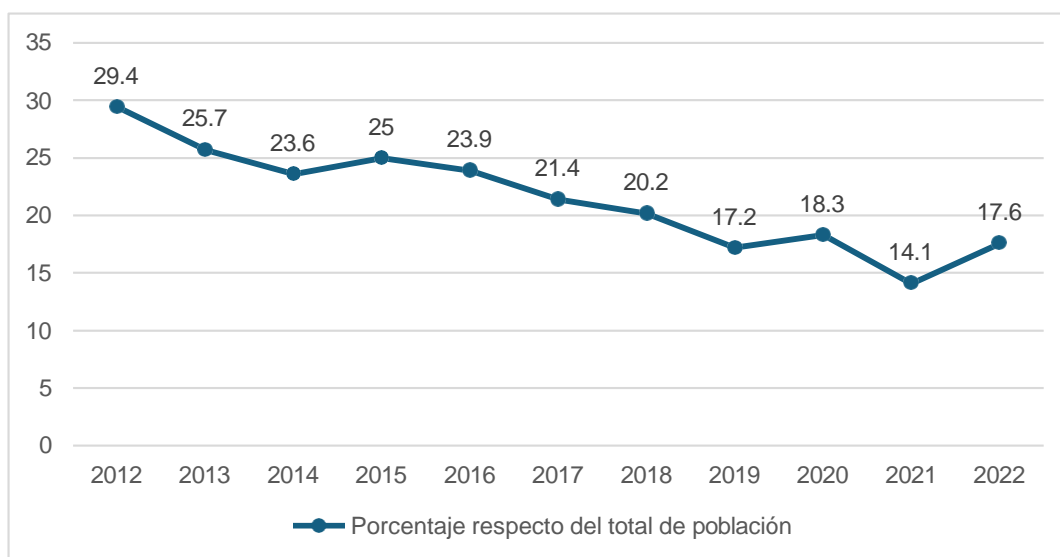
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENAHO (INEI, 2012-2022)

El análisis de los datos del índice de Gini y el porcentaje de población con al menos una necesidad básica insatisfecha en la región de Cajamarca entre 2012 y 2022 arroja luz sobre el estado de la desigualdad y su posible relación con la inversión pública en la región.

En primer lugar, el índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos, muestra una tendencia general a la baja durante el período analizado. En 2012 y 2013, el índice se situó en 0.52, lo que indica una desigualdad relativamente alta. Sin embargo, a partir de 2014, se observa una disminución gradual, alcanzando su punto más bajo en 2020 con un valor de 0.44. Si bien hubo un ligero repunte en 2021 (0.47), en 2022 el índice volvió a descender a 0.43, lo que sugiere una mejora en la distribución de los ingresos y una reducción de la desigualdad en la región.

Por otro lado, el porcentaje de población con al menos una necesidad básica insatisfecha también ha experimentado una disminución significativa durante el período analizado. En 2012, el 29.4% de la población de Cajamarca tenía al menos una necesidad básica insatisfecha, lo que indica un alto nivel de pobreza y carencias. Sin embargo, esta cifra se redujo gradualmente a lo largo de los años, alcanzando su punto más bajo en 2021 con un 14.1%. Si bien en 2022 se observó un ligero repunte al 17.6%, este valor sigue siendo considerablemente menor que el registrado en 2012.

Gráfico 2.10: Población con al menos una necesidad básica insatisfecha en la región de Cusco (2012 – 2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENAHO (INEI, 2012-2022)

Estos datos sugieren que, a pesar de los desafíos persistentes, se han logrado avances significativos en la reducción de la desigualdad y la satisfacción de las necesidades básicas de la población en Cajamarca. Sin embargo, es importante analizar críticamente la relación entre estos indicadores y la inversión pública realizada en la región.

Es posible que la inversión pública en sectores clave, como educación, salud y saneamiento, haya contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población y, por lo tanto, a reducir la desigualdad y las carencias. Por ejemplo, las inversiones en infraestructura educativa y programas de acceso a la educación pueden haber facilitado una mayor inclusión y oportunidades para los segmentos más desfavorecidos de la población. De manera similar, las inversiones en salud y saneamiento pueden haber mejorado las condiciones de vida y el bienestar de las comunidades más vulnerables.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la inversión pública por sí sola no garantiza una distribución equitativa de los beneficios. Factores como la eficacia en la implementación de los programas, la focalización adecuada de los recursos y la participación de las comunidades locales pueden influir significativamente en el impacto real de la inversión pública en la reducción de la desigualdad y la satisfacción de las necesidades básicas.

Además, es necesario considerar el contexto socioeconómico y las disparidades regionales dentro de Cajamarca. Es posible que algunas áreas o sectores hayan experimentado avances más significativos que otros, lo que podría explicar las fluctuaciones observadas en los indicadores de desigualdad y carencias. Por lo tanto, es crucial analizar la distribución geográfica y sectorial de la inversión pública y su impacto diferencial en las distintas zonas de la región.

En resumen, si bien los datos sugieren una tendencia positiva en la reducción de la desigualdad y la satisfacción de las necesidades básicas en Cajamarca, es fundamental realizar un análisis más profundo que considere la eficacia de la inversión pública, las disparidades regionales y los factores contextuales que pueden influir en el impacto real de estas inversiones. Solo mediante un enfoque integral y una evaluación crítica se podrán identificar las áreas de oportunidad y diseñar estrategias más efectivas para abordar los desafíos persistentes en materia de desigualdad y desarrollo humano en la región.

Estas disparidades se acentúan aún más al considerar las desigualdades entre zonas urbanas y rurales. Según el INEI, en 2022 el 45% de la población rural de Cajamarca se encontraba en situación de pobreza monetaria, frente a solo el 15% en áreas urbanas. Esta brecha impacta negativamente en el acceso a servicios básicos, educación de calidad y oportunidades económicas.

Un factor clave que podría explicar la persistencia de la desigualdad en Cajamarca es la falta de una visión estratégica de desarrollo regional que articule de manera coherente las diferentes intervenciones de inversión pública. En su lugar, lo que se observa es la ejecución de proyectos desarticulada de cada sector (transportes, saneamiento, energía, salud, etc.), sin una mirada integral sobre las sinergias que podrían potenciarse.

Esta fragmentación impide maximizar el impacto redistributivo de la inversión, pues se requieren intervenciones multidimensionales que aborden simultáneamente los diversos factores que reproducen la desigualdad, como las brechas de acceso a servicios básicos, las limitadas oportunidades económicas, la falta de activos productivos y el déficit de capacidades humanas en las poblaciones más vulnerables.

Otro elemento que considerar es la debilidad institucional de los gobiernos regionales y locales para una adecuada gestión de las cuantiosas transferencias por canon minero que reciben. Persisten deficiencias en los sistemas de planificación, ejecución y fiscalización del gasto público que han permitido casos de corrupción, malversación de fondos y obras sobredimensionadas, restando eficiencia al uso de estos recursos.

Revertir esta situación requiere una profunda reforma de la institucionalidad pública regional, que incluya la profesionalización de la función pública, la implementación de sistemas de control y rendición de cuentas robustos, y una mayor participación ciudadana en la vigilancia y priorización de las inversiones.

En este punto, es crucial fortalecer los espacios de diálogo y concertación entre los diferentes actores sociales, económicos y políticos de Cajamarca. Sólo a través de la construcción de consensos amplios y el involucramiento activo de la sociedad civil se podrá definir una visión compartida de desarrollo regional que guíe la inversión pública hacia la reducción efectiva de las brechas socioeconómicas.

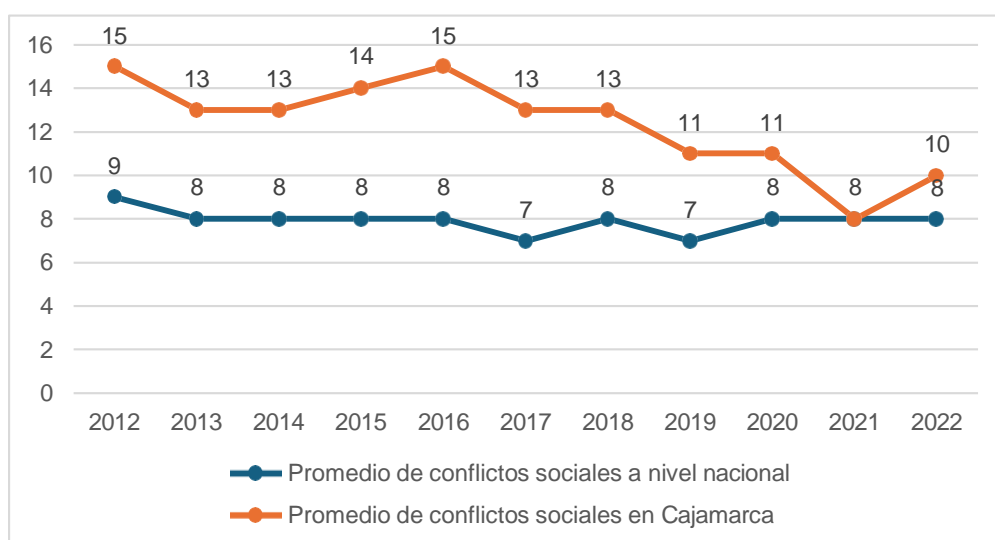
En síntesis, si bien Cajamarca ha tenido acceso a ingentes recursos por concepto de canon minero en la última década, la persistencia de altos niveles de desigualdad evidencia las limitaciones de un modelo de inversión pública fragmentado, poco transparente y con serias deficiencias de planificación estratégica. Para revertir esta situación, se requiere una reingeniería institucional profunda, que promueva intervenciones articuladas e integrales, con un enfoque territorial y de desarrollo humano que involucre activamente a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el uso de estos recursos. Solo así se podrá encauzar efectivamente la inversión pública hacia la reducción sostenible de las desigualdades que aquejan a esta diversa y emblemática región.

3.2.3. Conflictividad social regional

Cajamarca ha sido escenario de una intensa conflictividad social durante el período 2012-2022, destacando como una de las regiones con mayor número de conflictos socioambientales activos a nivel nacional según los reportes de la Defensoría del Pueblo.

El análisis de los datos sobre conflictos sociales en Cajamarca y su comparación con el promedio nacional durante el período 2012-2022 arroja luz sobre la compleja dinámica de la conflictividad social en la región y su posible relación con factores como la desigualdad y la inversión pública.

Gráfico 2.11: Promedio de conflictos sociales en la región de Cajamarca (2012-2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes de la Defensoría del Pueblo (2012-2022)

En primer lugar, es evidente que Cajamarca ha experimentado niveles de conflictividad social significativamente más altos que el promedio nacional durante la mayor parte del período analizado. Por ejemplo, en 2012, mientras que el promedio nacional de conflictos sociales fue de 9, Cajamarca registró un promedio de 15 conflictos. Esta tendencia se mantuvo en los años siguientes, con Cajamarca superando consistentemente el promedio nacional hasta 2020.

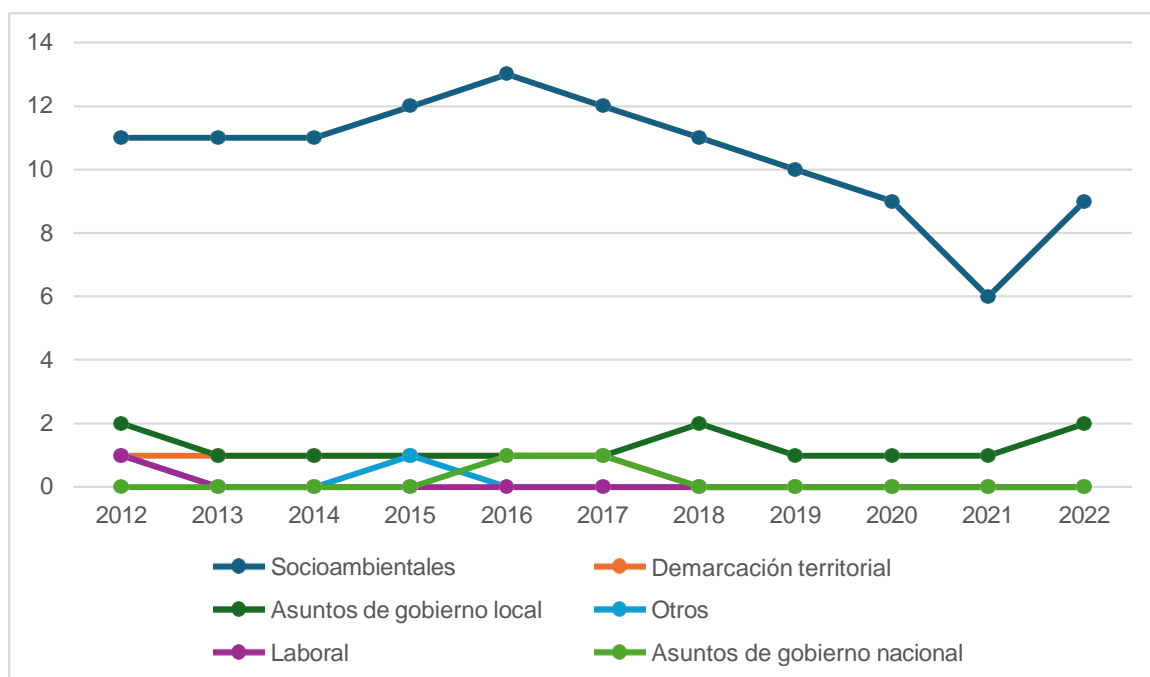
Esta alta conflictividad social en Cajamarca puede estar relacionada con diversos factores subyacentes, como la desigualdad persistente y las carencias en el acceso a servicios básicos y oportunidades económicas. A pesar de los avances observados en la reducción de la desigualdad y la satisfacción de necesidades básicas, es posible que estos cambios no se hayan distribuido de manera equitativa en toda la región, lo que ha generado tensiones y conflictos sociales.

Además, es importante considerar el papel que ha desempeñado la inversión pública en la dinámica de la conflictividad social. Si bien se han destinado recursos significativos a sectores clave como educación, salud y transporte, es posible que la implementación de estos proyectos no haya sido adecuada o que no haya abordado las preocupaciones y necesidades específicas de las comunidades locales.

Un ejemplo concreto de esto podría ser el caso de los conflictos socioambientales relacionados con actividades extractivas en la región. A pesar de las inversiones en infraestructura y desarrollo, es posible que las comunidades afectadas por estos proyectos perciban que sus preocupaciones sobre el impacto ambiental y social no han sido debidamente atendidas, lo que ha generado tensiones y protestas.

En ese contexto, a partir del análisis de los datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo sobre el tipo de conflictos en Cajamarca se pueden extraer varias conclusiones relevantes sobre la conflictividad social durante el período comprendido entre 2012 y 2022. Es fundamental abordar este fenómeno desde una perspectiva multidimensional, considerando los diversos factores que influyen en su dinámica y evolución.

Gráfico 2.12: Distribución de conflictos sociales por tipo en la región de Cajamarca (2012-2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes de la Defensoría del Pueblo (2012-2022)

En primer lugar, los conflictos de carácter socioambiental constituyen la principal fuente de tensiones en la región, con un promedio de 10.5 casos anuales durante el período analizado. Esta tendencia refleja la creciente preocupación por los impactos ambientales y sociales de las actividades extractivas, particularmente en una zona con una larga tradición minera. La interacción entre las empresas, las comunidades locales y el Estado ha sido un foco constante de controversias y reclamos, lo cual ha exacerbado las tensiones existentes.

Otro aspecto destacable es la persistencia de los conflictos relacionados con los asuntos de gobierno local, que han mantenido una presencia estable a lo largo de los años, con un promedio de 1.3 casos anuales. Esto sugiere la existencia de desafíos recurrentes en la gobernanza municipal, tales como la gestión de recursos, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, que han generado descontento y movilizaciones sociales.

Por otro lado, resulta preocupante la ausencia de una disminución significativa en los conflictos socioambientales a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades y los diferentes actores involucrados. Esta

situación podría indicar la necesidad de abordar las causas subyacentes de manera más efectiva, promoviendo un diálogo genuino, la transparencia y la búsqueda de soluciones consensuadas que equilibren los intereses de todas las partes implicadas.

Asimismo, es importante destacar que, si bien los conflictos de demarcación territorial han mantenido una presencia constante, aunque menor, durante la mayor parte del período analizado, a partir de 2018 se observa una ausencia de este tipo de conflictos. Este cambio podría atribuirse a la implementación de mecanismos más eficaces para la resolución de disputas territoriales o a una mayor claridad en los límites jurisdiccionales.

En resumen, el análisis de los datos revela la complejidad de la conflictividad social en Cajamarca, donde los factores socioambientales, la gobernanza local y, en menor medida, la demarcación territorial han sido las principales fuentes de tensión.

Es importante destacar que, a partir de 2019, se observa una disminución gradual en el promedio de conflictos sociales en Cajamarca, acercándose más al promedio nacional. Esta tendencia podría estar relacionada con los esfuerzos realizados por las autoridades regionales y nacionales para abordar las causas subyacentes de la conflictividad, como la implementación de políticas de inclusión social, el diálogo con las comunidades y la búsqueda de soluciones consensuadas.

No obstante, a pesar de esta disminución, los niveles de conflictividad social en Cajamarca siguen siendo relativamente altos en comparación con el promedio nacional, lo que sugiere la necesidad de un enfoque más integral y sostenido para abordar los desafíos persistentes en materia de desigualdad, desarrollo sostenible y gobernanza participativa.

Esta situación se ha visto exacerbada por las tensiones distributivas en torno a la actividad minera y el manejo de los recursos provenientes del canon. El punto álgido de esta conflictividad fue el violento enfrentamiento de 2011-2012 en torno al proyecto minero Conga de la empresa Newmont, que dejó un saldo trágico de vidas humanas y evidenció la profunda polarización social en la región. Si bien este proyecto fue finalmente suspendido, sus secuelas han perdurado y alimentado un creciente malestar y desconfianza ciudadana hacia la actividad extractiva y el rol de las autoridades regionales.

Pero los conflictos socioambientales no se limitan al caso Conga. Otros focos de tensión han sido el proyecto Galeno de la minera Yanacocha, así como la expansión de operaciones en la mina Michiquillay. En estas disputas se expresan los temores de las comunidades campesinas por los impactos sobre sus fuentes de agua y tierras agrícolas, así como la percepción de una injusta distribución de los beneficios económicos de estas actividades extractivas.

Un factor clave que ha alimentado la conflictividad social en Cajamarca es la percepción generalizada de falta de legitimidad y representatividad de las autoridades regionales y locales. Estas son vistas por amplios sectores como entes distantes, cooptados por intereses particulares y ajenos a las necesidades y demandas de las comunidades, especialmente las más vulnerables.

Esta desconexión entre las instituciones públicas y la ciudadanía ha dificultado la construcción de canales efectivos de diálogo y participación para la prevención y gestión pacífica de los conflictos sociales. En su lugar, ha primado una lógica confrontacional donde los diferentes actores asumen posiciones radicalizadas dificultando la búsqueda de soluciones concertadas.

En este sentido, es crucial robustecer los mecanismos de participación ciudadana vinculantes en los procesos de toma de decisiones sobre el desarrollo regional, especialmente en lo que respecta al manejo de los cuantiosos recursos provenientes de la actividad extractiva. Sólo a través de un involucramiento y fiscalización activa de la sociedad civil se podrá revertir la desconfianza imperante y asegurar que estos ingresos se reviertan efectivamente en beneficios tangibles para toda la población.

Asimismo, es fundamental emprender un verdadero proceso de diálogo intercultural que permita incorporar las cosmovisiones, saberes y aspiraciones de las comunidades locales, principalmente indígenas y campesinas, en la definición de las políticas públicas regionales. Sólo desde el reconocimiento y valoración de esta diversidad cultural se podrán construir consensos duraderos en torno al modelo de desarrollo a implementar en Cajamarca.

En resumen, la aguda conflictividad social que ha aquejado a Cajamarca evidencia las limitaciones de un modelo de crecimiento económico excluyente, donde las actividades extractivas conviven con altos niveles de pobreza, desigualdad y desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas. Revertir esta espiral requiere reformas estructurales que fortalezcan la democracia y la

participación a nivel regional, promuevan el diálogo intercultural y permitan redistribuir de manera más justa y transparente los beneficios económicos del sector primario-exportador.

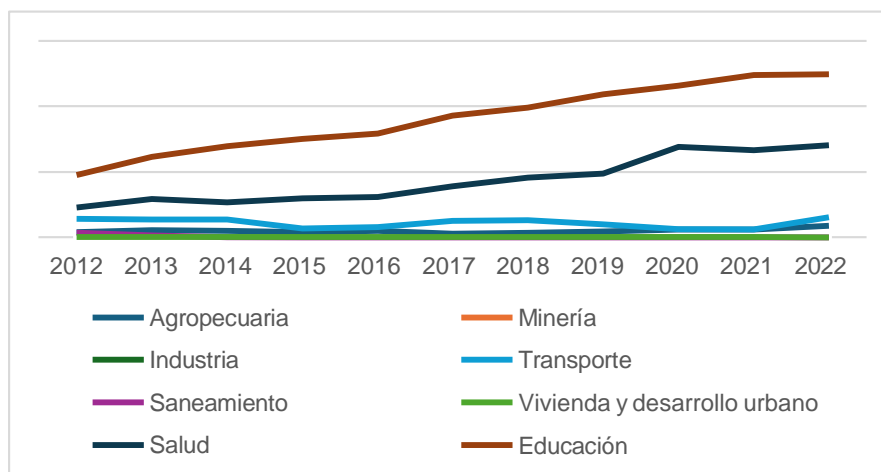
3.3. Puno

3.3.1. Inversión en infraestructura 2012-2022

La región Puno ha sido escenario de importantes esfuerzos de inversión pública durante el periodo 2012-2022, impulsados principalmente por los ingresos provenientes del canon minero generado por megaproyectos extractivos como Las Bambas. Sin embargo, un análisis de la ejecución de la inversión pública revela deficiencias en términos de eficiencia, transparencia y alineamiento con las reales necesidades de desarrollo de esta región del sur peruano. Un análisis de los datos de inversión pública ejecutada por función en la región Puno entre los años 2012 a 2022, nos permite obtener una visión integral y comprender el estado situacional de la misma.

En primer lugar, es notable el predominio de la inversión en educación y salud, las cuales concentran la mayor parte de los recursos asignados, lo que refleja una priorización de la inversión pública hacia sectores sociales para el desarrollo humano. Sin embargo, es importante examinar si esta asignación de recursos ha sido efectiva en mejorar los indicadores de calidad educativa y de cobertura y acceso a servicios de salud en la región.

Gráfico 2.13: Inversión Pública ejecutada por función en la región de Puno (2012-2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Transparencia Económica (s.f.)

Por otro lado, se observa una tendencia fluctuante en la inversión destinada a sectores clave como Transporte y Agropecuaria. Mientras que en Transporte se evidencia una disminución sostenida desde el año 2017, después de un pico en el año anterior, la inversión en Agropecuaria muestra altibajos considerables a lo largo del período. Estas variaciones podrían responder a cambios en las prioridades de inversión o a la implementación de proyectos específicos de gran envergadura en determinados años.

Un aspecto preocupante es la escasa inversión en saneamiento, la cual es fundamental para impulsar el desarrollo económico sostenible y garantizar condiciones básicas de salubridad para la población. Si bien se observa un ligero incremento en los últimos años, los montos destinados a estas áreas son aún insuficientes para atender las necesidades de la región.

Otro factor que considerar es la ejecución efectiva de la inversión pública y su impacto en el cierre de brechas de infraestructura y servicios básicos. Según el INEI, al 2022 el 26% de los hogares punenses carecían de acceso a agua potable y el 36% no contaba con servicios higiénicos adecuados, cifras muy superiores al promedio nacional. Esta situación evidencia serias deficiencias en la planificación y priorización de las inversiones ejecutadas, muchas de las cuales han privilegiado la ejecución de obras de gran envergadura y visibilidad política por sobre intervenciones más focalizadas en cerrar las brechas de servicios básicos que afectan a los sectores más vulnerables de la región.

Otro factor es la limitada articulación de las intervenciones de inversión pública con las dinámicas económicas y potencialidades productivas de la región. Puno sigue siendo una de las regiones más pobres del país, con una economía mayoritariamente de subsistencia, bajos niveles de productividad y empleos precarios e informales. A pesar de los masivos recursos invertidos en infraestructura, no se han implementado programas y proyectos integrales para impulsar el desarrollo de cadenas productivas, innovación, emprendimientos locales y transferencia de capacidades técnicas

Estas deficiencias ponen en tela de juicio la capacidad de la inversión pública ejecutada para generar verdaderos impactos en términos de reducción de brechas sociales y dinamización económica en Puno. Se evidencia así la urgencia de repensar las estrategias de inversión, fortalecer los mecanismos de

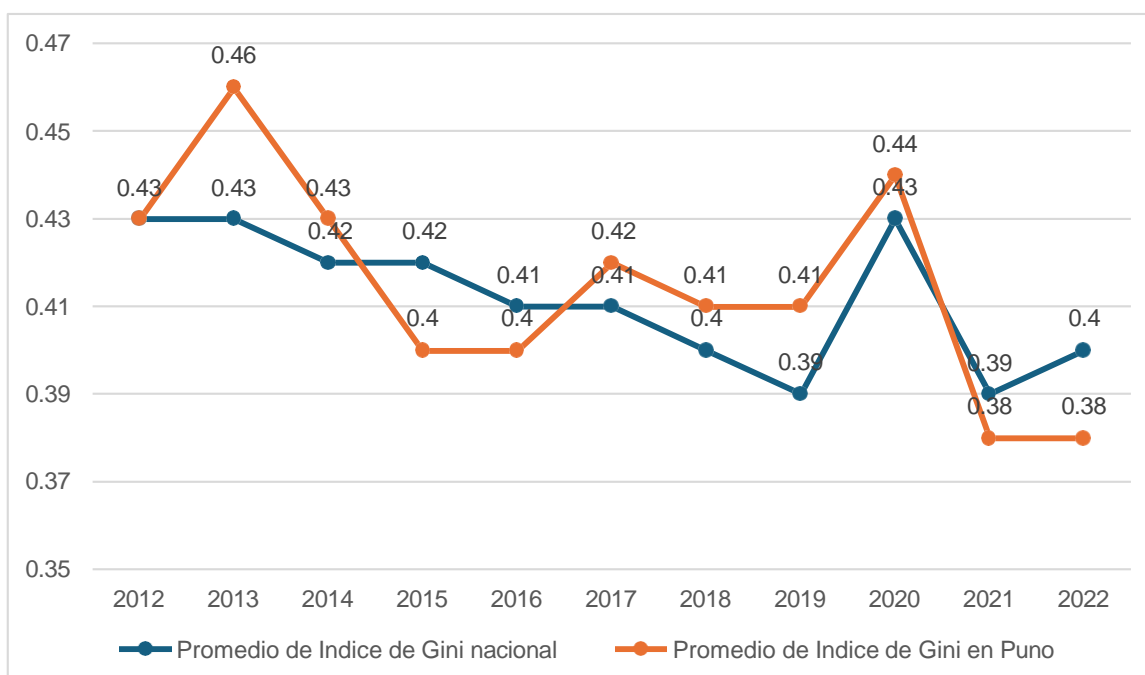
transparencia y rendición de cuentas, e involucrar activamente a la ciudadanía en la priorización de los recursos, a fin de que éstos se traduzcan efectivamente en bienestar concreto para la población punense, especialmente aquella más rezagada y en situación de vulnerabilidad.

3.3.2. Evolución de indicadores socioeconómicos

Pese a los ingentes recursos de inversión pública recibidos en la última década, los indicadores de desigualdad en Puno no mejoraron sustancialmente, evidenciando las limitaciones redistributivas de estas inversiones y la persistencia de profundas brechas socioeconómicas estructurales.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, si bien se observa una tendencia general decreciente, con un valor de 0.43 en 2012 y 0.38 en 2022, los valores intermedios muestran variaciones significativas, alcanzando su punto máximo de 0.46 en 2013. Esta inestabilidad sugiere que, a pesar de los esfuerzos realizados, persisten desafíos sustanciales en la reducción sostenida de la desigualdad en la región.

Gráfico 2.14: Índice de Gini en la región de Puno (2012-2022)



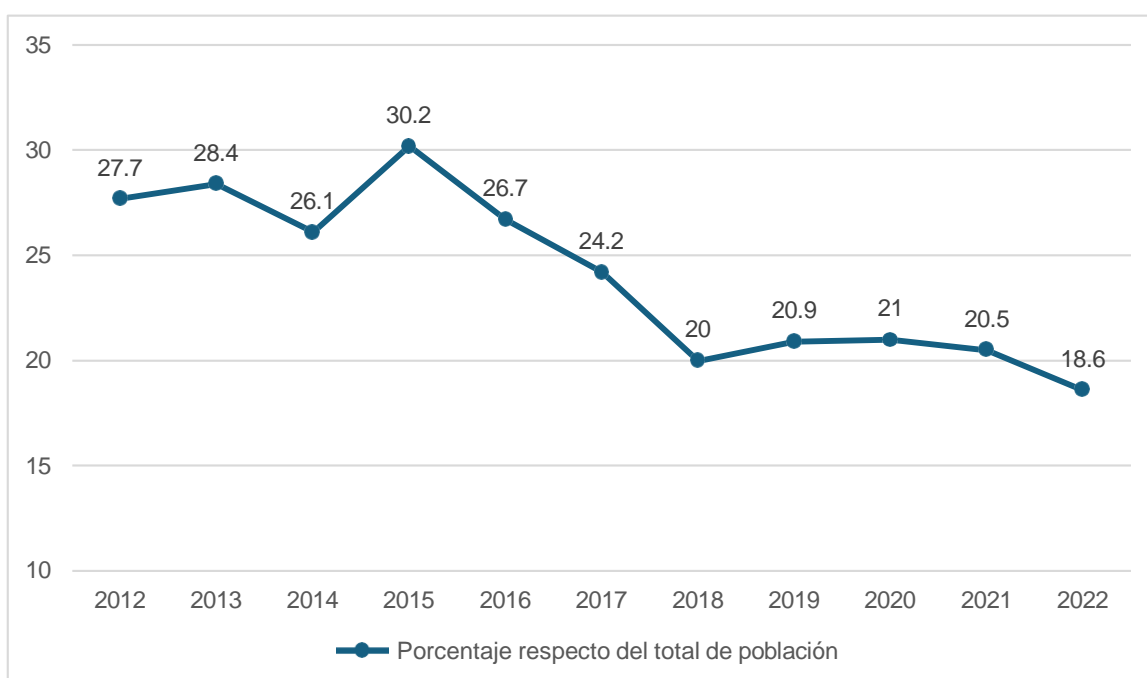
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENAHO (INEI, 2012-2022)

Esta persistencia de niveles relativamente altos de desigualdad es preocupante considerando que Puno ha sido una de las regiones del país que más ingresos ha captado por concepto de canon minero, principalmente por la operación del proyecto Las Bambas. Solo en el período 2016-2022 se estima que recibió más de S/ 2,000 millones por esta fuente de financiamiento.

Estas brechas se acentúan aún más al considerar las desigualdades entre áreas urbanas y rurales. Según el INEI, en 2022 el 38 % de la población rural de Puno estaba en situación de pobreza monetaria, en contraste con solo el 12 % en zonas urbanas. Esta brecha impacta directamente en las oportunidades de acceso a servicios básicos, educación de calidad y empleo digno.

En cuanto al porcentaje de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha se observa una tendencia decreciente, pasando de 27.7% en 2012 a 18.6% en 2022. Pese a esta mejora, casi una quinta parte de la población de Puno aún carece de acceso a servicios básicos, lo que constituye un indicador preocupante de la persistencia de la pobreza y la desigualdad.

Gráfico 2.15: Población con al menos una necesidad básica insatisfecha en la región de Puno (2012 – 2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENAHO (INEI, 2012-2022)

Al analizar estos datos, surgen varias interrogantes críticas. En primer lugar, es imperativo cuestionar la efectividad de las políticas públicas implementadas para abordar la desigualdad y la pobreza en Puno. Si bien se observan avances, la magnitud de los cambios y la persistencia de niveles significativos de desigualdad sugieren que las estrategias adoptadas han sido insuficientes o inadecuadas.

Otro aspecto fundamental que considerar es la distribución geográfica de la inversión pública dentro de la región. Es posible que ciertas áreas hayan experimentado un mayor progreso en comparación con otras, lo que podría explicar las fluctuaciones observadas en el Índice de Gini. Una distribución desigual de los recursos y las oportunidades económicas podría estar contribuyendo a la perpetuación de la desigualdad en determinadas zonas de Puno.

En este sentido, se evidencia la falta de una estrategia de desarrollo integral que articule la inversión en infraestructura con programas productivos, transferencia tecnológica y creación de oportunidades económicas formales para los sectores más vulnerables, principalmente las poblaciones rurales e indígenas de la región. No puede soslayarse el impacto negativo que han tenido los constantes conflictos socioambientales, en particular aquellos vinculados al proyecto Las Bambas, en socavar los eventuales impactos redistributivos de la inversión pública en Puno. Estos episodios de protesta y violencia han polarizado a la sociedad punense, generando desconfianza ciudadana en las instituciones regionales y dificultando la construcción de consensos sobre el uso de los recursos del canon minero.

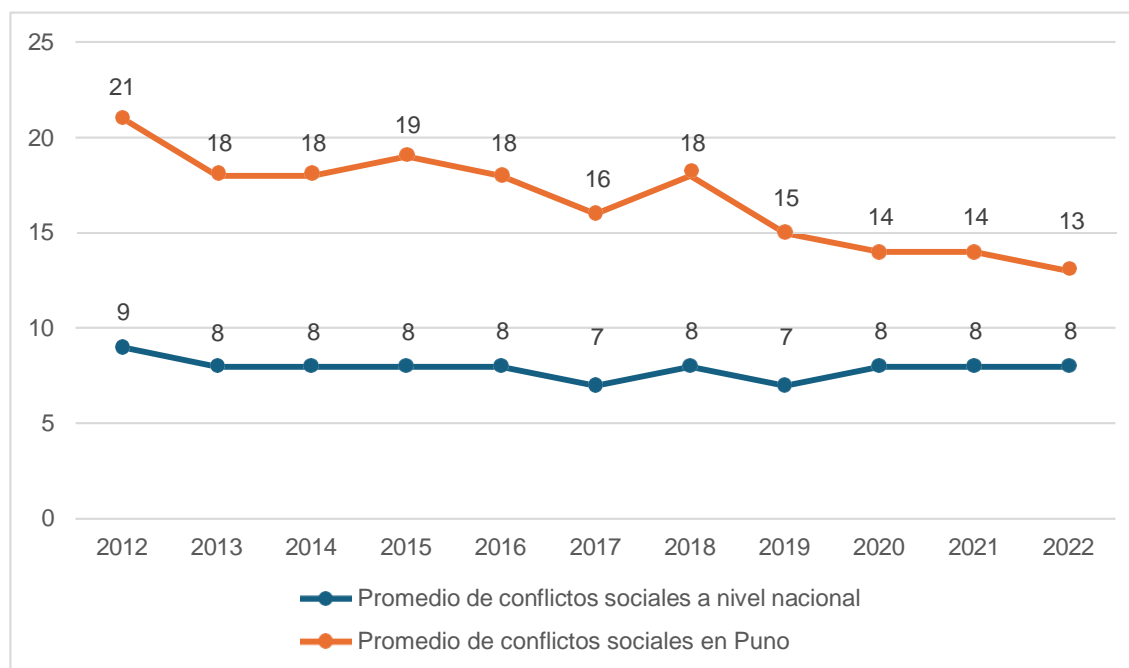
3.3.3. Conflictividad social regional

La región Puno se ha posicionado como uno de los principales escenarios de conflictividad social en el Perú durante la última década, registrando numerosos episodios de protestas, bloqueos de vías y enfrentamientos violentos que han puesto en evidencia las profundas tensiones subyacentes en torno al modelo de desarrollo y la distribución de sus beneficios económicos.

Según los reportes de la Defensoría del Pueblo, se advierte que el promedio de conflictos sociales en Puno supera el promedio nacional de los años

analizados, lo que constituye un indicador elocuente de la convulsión sociopolítica de esta circunscripción territorial.

Gráfico 2.16: Promedio de conflictos sociales en la región de Puno (2012-2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes de la Defensoría del Pueblo (2012-2022)

En el año 2012, mientras que a nivel nacional se registraron 9 conflictos sociales en promedio, en Puno esta cifra ascendió a 21, esto es, más del doble del promedio nacional. Esta tendencia se mantuvo a lo largo de la década, con Puno reportando sistemáticamente promedios que duplicaron e incluso triplicaron los niveles de conflictividad social a escala nacional. Resulta sumamente revelador que, en el periodo analizado, el promedio más bajo de conflictos sociales en Puno (13 en 2022) superó holgadamente el promedio más elevado a nivel nacional (9 en 2012).

Un hito crítico en esta escalada de tensiones fue el violento enfrentamiento en Las Bambas en 2022, que dejó decenas de heridos y al menos cuatro fallecidos, desnudando la fragilidad del orden público y la falta de mecanismos efectivos de diálogo y prevención de conflictos.

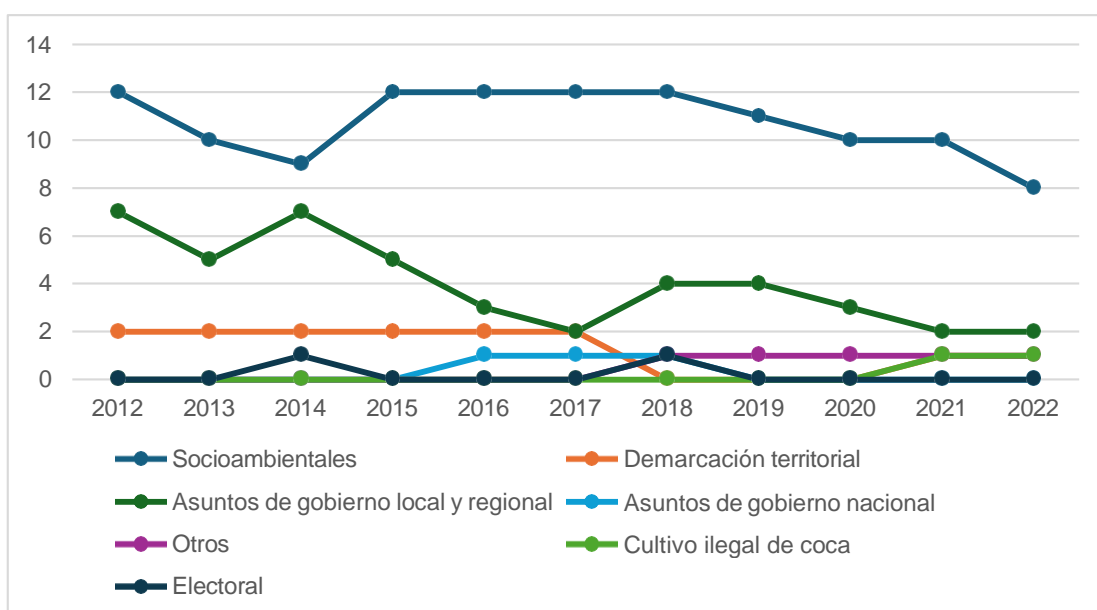
Pero la conflictividad social en Puno no se circunscribe únicamente a la actividad minera. También se han registrado numerosos conflictos comunales

por la disputa de recursos naturales como tierras y fuentes de agua, así como protestas contra autoridades regionales y locales por presuntos actos de corrupción y malversación de los cuantiosos recursos provenientes del canon minero.

Los datos de la Defensoría del Pueblo revelan que los conflictos socioambientales han sido predominantes en Puno durante el período analizado. Estos conflictos se mantuvieron relativamente estables, con un promedio anual de 11 casos, lo que sugiere una preocupación constante por los impactos ambientales de las actividades económicas y el uso de recursos naturales en la región. Este patrón podría asociarse a la importancia de la actividad minera y agrícola en Puno, así como a la creciente conciencia sobre la preservación del ecosistema y los derechos de las comunidades locales.

Por otro lado, los conflictos por demarcación territorial han sido menos frecuentes. Estos conflictos, que giran en torno a disputas limítrofes entre comunidades o regiones, podrían reflejar tensiones históricas y una falta de resolución efectiva de estas controversias. Aunque el número de casos ha sido relativamente bajo, su presencia constante sugiere la necesidad de abordar estas disputas de manera más efectiva para prevenir posibles escaladas.

Gráfico 2.17: Distribución de conflictos sociales por tipo en la región de Puno (2012-2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes de la Defensoría del Pueblo (2012-2022)

En cuanto a los asuntos de gobierno local y regional, se observa una tendencia decreciente en el número de conflictos a lo largo de los años. Esto podría indicar una mejora gradual en la gestión y la respuesta a las demandas de las comunidades locales por parte de las autoridades regionales y municipales. Sin embargo, la persistencia de estos conflictos, aunque en menor medida, sugiere que aún existen desafíos por abordar en cuanto a la gobernanza y la participación ciudadana.

Los conflictos relacionados con el gobierno nacional han sido escasos, con un pico en 2016 y 2017. Esto podría reflejar tensiones específicas durante ese período, posiblemente relacionadas con políticas o decisiones gubernamentales que afectaron a la región de Puno.

Es importante destacar que, a partir de 2021, se registraron conflictos relacionados con el cultivo ilegal de coca en Puno. Aunque el número de casos es bajo, este fenómeno podría tener implicaciones significativas en términos de seguridad, economía y conflictos sociales en la región.

Finalmente, los conflictos electorales han sido esporádicos y de baja incidencia, lo que sugiere que, en general, los procesos electorales en Puno han sido relativamente pacíficos durante el período analizado.

De esta manera, los datos de la Defensoría del Pueblo revelan una compleja dinámica de conflictos sociales en Puno, con predominancia de conflictos socioambientales y una persistencia de disputas territoriales y asuntos de gobernanza local y regional. Estos conflictos pueden tener múltiples causas subyacentes, como tensiones históricas, desigualdades socioeconómicas, falta de participación ciudadana efectiva y desafíos ambientales y territoriales. Es fundamental abordar estas causas de manera integral y promover el diálogo y la resolución pacífica de conflictos para construir una sociedad más estable y cohesionada en la región de Puno.

En conclusión, los datos analizados sugieren una relación compleja entre la desigualdad, la inversión pública y la conflictividad social en el Perú. Si bien se observó un aumento significativo en la inversión pública en las tres regiones durante el período estudiado, los niveles de desigualdad y conflictividad social no mostraron una disminución proporcional. Esto podría indicar que la inversión no se ha canalizado de manera efectiva hacia los segmentos más vulnerables

de la población o que existen otros factores que contribuyen a la persistencia de las desigualdades y tensiones sociales.

Por otra parte, los datos revelan la influencia de variables contextuales, como la dinámica económica de cada región y la eficacia en la implementación de programas e intervenciones. La inversión pública no es suficiente para reducir la desigualdad y la conflictividad social si no se aborda de manera integral, con una visión estratégica de desarrollo y una participación de las comunidades locales en la toma de decisiones. Si bien los datos muestran una relación compleja entre la inversión pública, la desigualdad y la conflictividad social, también resaltan la necesidad de un enfoque holístico y participativo en la ejecución de los recursos públicos.

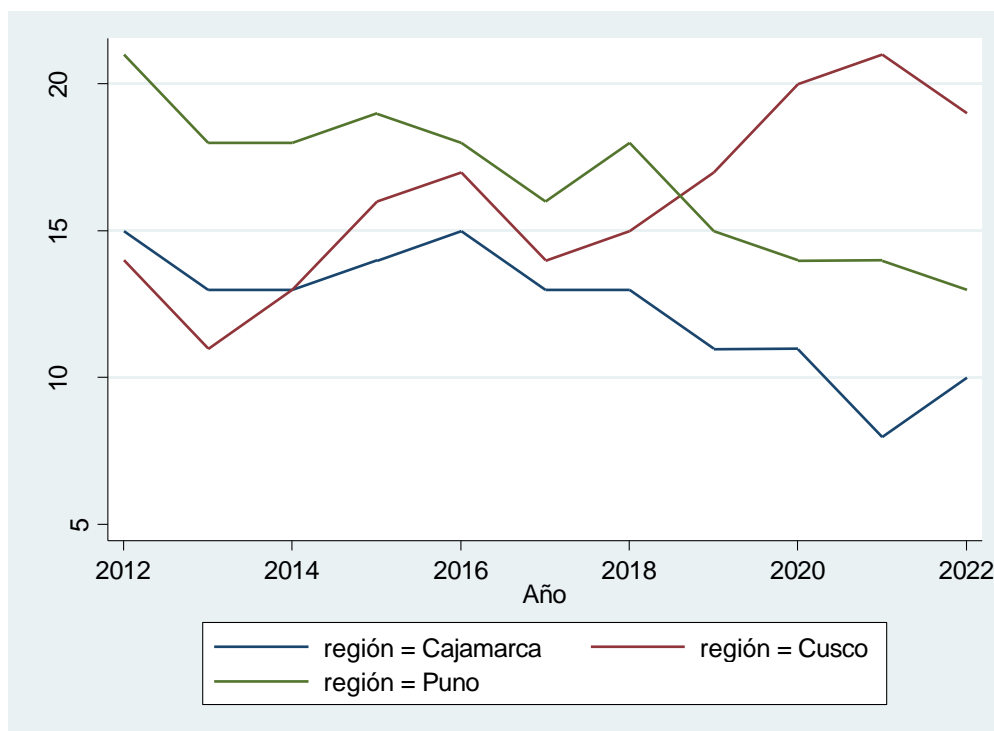
CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y PROPUESTA DE VALOR

4.1. Estadística descriptiva

El análisis descriptivo de las variables centrales de esta investigación revela patrones complejos y matizados que merecen una reflexión en el contexto de la idea central sobre la relación entre inversión pública, desigualdad y conflictividad social en las regiones de Cusco, Cajamarca y Puno durante el período 2012-2022.

En primer lugar, la variable de conflictos sociales presenta un promedio de 15.06 conflictos por año en las regiones estudiadas. Este dato, por sí solo, sugiere un nivel considerable de tensión social, con una desviación estándar de 3.19, lo que indica una variabilidad moderada en la incidencia de conflictos entre las regiones y a lo largo del tiempo. El rango de conflictos, que va desde un mínimo de 8 hasta un máximo de 21, refleja la existencia de períodos de relativa conflictividad. Esta variabilidad nos invita a considerar los factores contextuales y de recojo de información que podrían estar influyendo en los datos sobre los conflictos sociales en estas regiones.

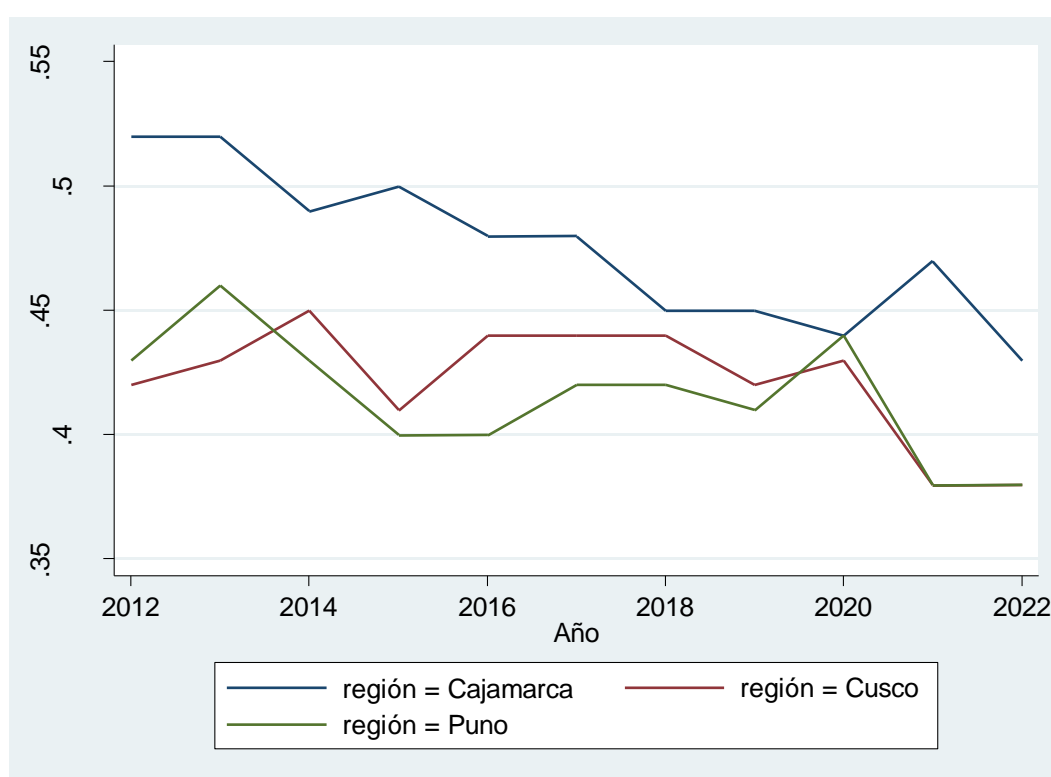
Gráfico 3.1: Evolución de conflictos sociales por región



Fuente: Elaboración propia a partir de los reportes de la Defensoría del Pueblo (2012-2022)

Al analizar el índice de Gini, encontramos un valor promedio de 0.4376, lo que indica un nivel de desigualdad moderado a alto. La desviación estándar de 0.0375 sugiere que, si bien hay variaciones en la desigualdad entre las regiones y a lo largo del tiempo, estas no son extremadamente pronunciadas. El rango del índice de Gini, que va desde 0.38 hasta 0.52, revela que incluso en los mejores escenarios, persiste un nivel significativo de desigualdad. Este hallazgo es crucial ya que subraya la persistencia de las disparidades socioeconómicas en estas regiones, a pesar de los esfuerzos de inversión pública.

Gráfico 3.2: Evolución del Índice de Gini por región

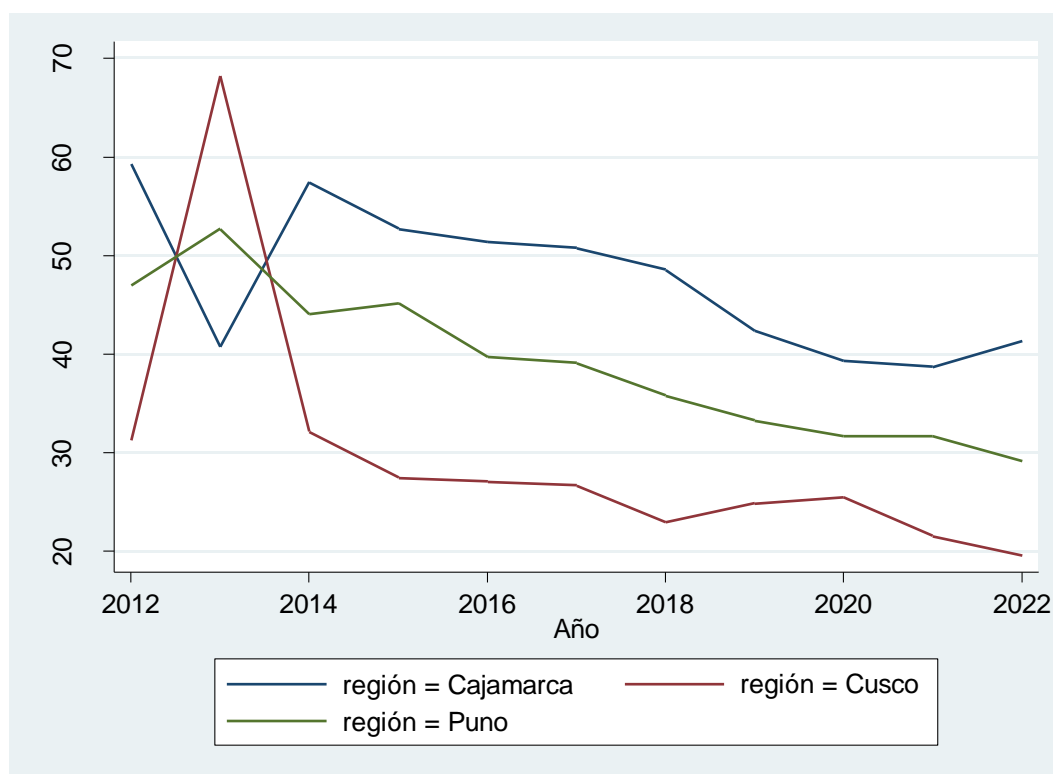


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENAHO (INEI, 2012-2022)

La variable de pobreza multidimensional presenta un panorama aún más preocupante. Con un promedio del 38.81% de la población clasificada como pobre multidimensionalmente, y una desviación estándar de 11.99, observamos una situación de privación generalizada pero también altamente variable. El rango, que va desde un mínimo del 19.62% hasta un máximo del 68.2%, sugiere disparidades dramáticas en las condiciones de vida entre las regiones y a lo largo del tiempo. Este amplio espectro de pobreza multidimensional plantea

interrogantes cruciales sobre la efectividad y focalización de las políticas de desarrollo e inversión pública.

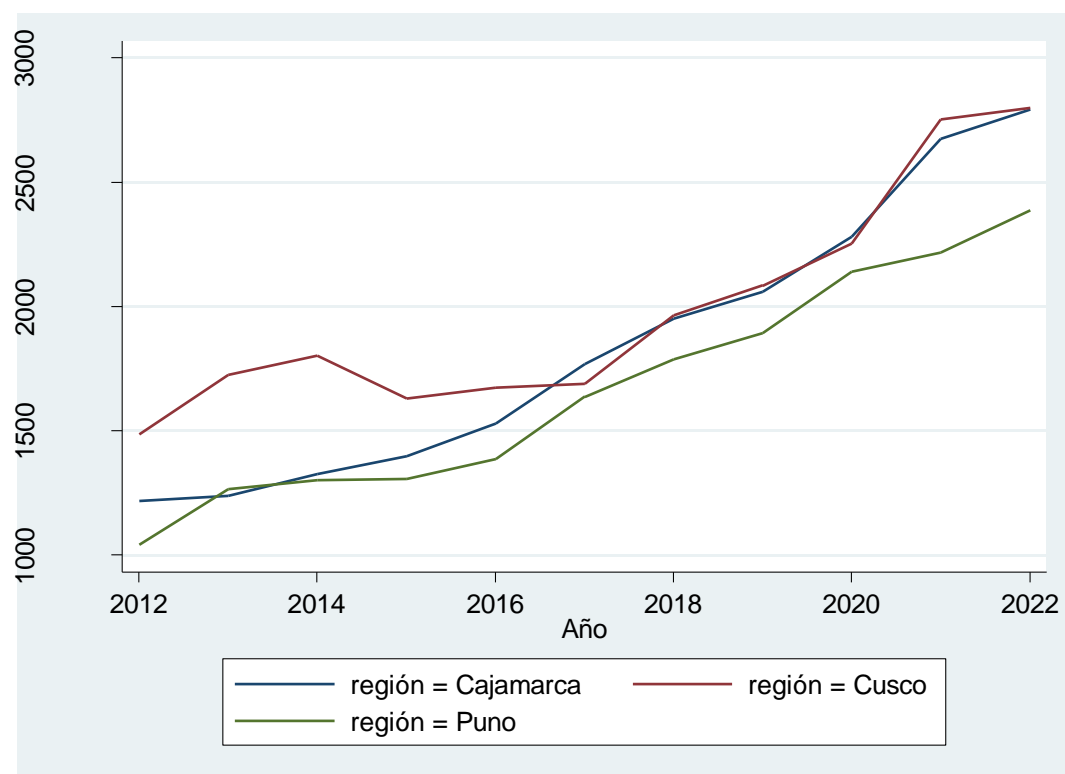
Gráfico 3.3: Evolución del porcentaje de personas pobres multidimensional por región



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENAHO (INEI, 2012-2022)

Finalmente, al examinar la inversión pública, se observa un promedio de 1,833.62 millones de soles por año, con una desviación estándar considerable de 491.59 millones. El rango de inversión, que va desde 1,042.5 hasta 2,800.9 millones de soles, indica una variabilidad sustancial en los niveles de gasto público entre regiones y años. Esta heterogeneidad en la inversión pública nos lleva a cuestionar la equidad en la distribución de recursos y la eficacia de las estrategias de desarrollo regional.

Gráfico 3.4: Evolución del gasto ejecutado en inversión pública por región



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Transparencia Económica (s.f.)

Al contrastar estos hallazgos descriptivos con la idea central, emergen varias reflexiones críticas. En primer lugar, **la persistencia de niveles moderados a altos de desigualdad y pobreza multidimensional, a pesar de niveles significativos de inversión pública, sugiere que la relación entre gasto público y reducción de brechas socioeconómicas no es tan directa o eficiente como se podría esperar.** Este hallazgo se alinea con las advertencias de Jaramillo y Alcázar (2022) sobre la necesidad de intervenciones integrales y bien focalizadas para lograr impactos redistributivos significativos.

Al profundizar en el análisis descriptivo de las variables por región, emergen patrones distintivos que merecen una reflexión crítica. Comenzando con Cajamarca, se observa que esta región presenta el menor promedio de conflictos sociales (12.36), significativamente por debajo de la media general de 15.06. No obstante, Cajamarca exhibe el índice de Gini más alto (0.4755) y el mayor porcentaje de pobreza multidimensional (47.55%) entre las tres regiones estudiadas. Esta aparente contradicción entre menor conflictividad y mayor

desigualdad y pobreza desafía la idea inicial y obliga a reconsiderar la complejidad de los factores que influyen en la manifestación de conflictos sociales. Es posible que existan mecanismos de contención social o dinámicas culturales específicas en Cajamarca que moderan la expresión del descontento a pesar de las condiciones socioeconómicas adversas.

En cuanto a la inversión pública, Cajamarca muestra un nivel promedio (1,841.72 millones de soles) cercano a la media general, pero con la mayor variabilidad (desviación estándar de 563.04 millones). Esta fluctuación en la inversión podría estar relacionada con ciclos políticos o económicos específicos de la región, y merece un análisis más detallado para comprender su impacto en las dinámicas sociales y económicas locales.

Gráfico 3.5: Descriptivos de variables en Cajamarca

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
conflictos~s	11	12.36364	2.15744	8	15
indice_gini	11	.4754545	.0307778	.43	.52
pobreza_mu~l	11	47.55182	7.38828	38.76	59.3
inversion_~a	11	1841.718	563.041	1220.4	2794.1

Por su parte, Cusco presenta un panorama contrastante. Con un promedio de conflictos sociales (16.09) ligeramente superior a la media general, Cusco exhibe el menor índice de Gini (0.4218) y el menor porcentaje promedio de pobreza multidimensional (29.82%) entre las tres regiones. Sin embargo, es importante notar la alta variabilidad en la pobreza multidimensional (desviación estándar de 13.27), que oscila entre 19.62% y 68.2%. Esta amplia dispersión sugiere la presencia de desigualdades intrarregionales significativas o cambios drásticos en las condiciones socioeconómicas a lo largo del período estudiado.

Cusco también destaca por tener el mayor nivel promedio de inversión pública (1,988.83 millones de soles). La conjunción de mayor inversión, menor desigualdad y pobreza promedio parecería respaldar parcialmente la idea sobre el impacto positivo de la inversión pública. No obstante, el nivel de conflictividad social superior al promedio obliga a cuestionar la linealidad de esta relación y a considerar otros factores que podrían estar influyendo en la dinámica de los conflictos sociales en Cusco.

Gráfico 3.6: Descriptivos de variables en Cusco

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
conflictos~s	11	16.09091	3.080732	11	21
indice_gini	11	.4218182	.0235874	.38	.45
pobreza_mu~l	11	29.81636	13.27216	19.62	68.2
inversion_~a	11	1988.828	446.8351	1486.05	2800.9

Finalmente, Puno presenta el mayor promedio de conflictos sociales (16.73), a pesar de tener un índice de Gini (0.4155) y un nivel de pobreza multidimensional (39.07%) intermedios entre Cajamarca y Cusco. Este hallazgo es particularmente intrigante y sugiere que la relación entre desigualdad, pobreza y conflictividad social puede ser más compleja de lo inicialmente planteado. Es posible que factores históricos, culturales o políticos específicos de Puno estén jugando un papel crucial en la intensificación de los conflictos sociales.

Paradójicamente, Puno muestra el menor nivel promedio de inversión pública (1,670.31 millones de soles) entre las tres regiones. Esta combinación de menor inversión y mayor conflictividad podría alinearse con la idea inicial, pero la posición intermedia de Puno en términos de desigualdad y pobreza obliga a ser cautelosos en las interpretaciones.

Gráfico 3.7: Descriptivos de variables en Puno

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
conflictos~s	11	16.72727	2.493628	13	21
indice_gini	11	.4154545	.0246429	.38	.46
pobreza_mu~l	11	39.07182	7.512743	29.16	52.8
inversion_~a	11	1670.307	448.0429	1042.5	2388.8

Al contrastar estos hallazgos regionales, emergen varias reflexiones críticas. En primer lugar, la relación entre inversión pública, desigualdad, pobreza

y conflictividad social parece ser altamente contextual y no lineal. Cada región presenta una combinación única de estos factores, lo que subraya la importancia de considerar las particularidades históricas, culturales y socioeconómicas de cada territorio en el diseño e implementación de políticas públicas.

En segundo lugar, la aparente desconexión entre los niveles de desigualdad y pobreza y la intensidad de los conflictos sociales en algunas regiones obliga a reconsiderar los mecanismos a través de los cuales las condiciones socioeconómicas se traducen en acciones colectivas de protesta. Es posible que factores como la capacidad de organización social, la percepción de agravio comparativo o la eficacia de los canales institucionales para la resolución de conflictos estén jugando un papel mediador crucial.

En conclusión, este análisis descriptivo por región revela la complejidad y heterogeneidad de las dinámicas socioeconómicas y políticas en Cajamarca, Cusco y Puno. Lejos de proporcionar respuestas definitivas, estos hallazgos invitan a profundizar en la investigación, considerando una gama más amplia de factores y explorando las interacciones complejas entre inversión pública, desigualdad, pobreza y conflictividad social en cada contexto regional específico.

En las siguientes etapas del análisis, será fundamental examinar las tendencias temporales de estas variables en cada región, así como explorar posibles variables mediadoras o moderadoras que puedan ayudar a explicar las aparentes contradicciones observadas. Solo a través de un análisis multidimensional y contextualizado se podrá desarrollar una comprensión más profunda de las dinámicas sociales en estas regiones y proponer recomendaciones de política más efectivas y adaptadas a sus realidades específicas.

4.1.1. Correlaciones entre variables

La prueba de correlación es una herramienta estadística fundamental en el análisis de datos que permite evaluar la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables cuantitativas. En el contexto de esta investigación, la matriz de correlación presentada ofrece una visión preliminar de las interrelaciones

entre las variables clave del estudio: conflictos sociales, índice de Gini, pobreza multidimensional e inversión pública.

La utilidad de esta prueba radica en su capacidad para proporcionar una primera aproximación a las posibles asociaciones entre las variables de interés, antes de proceder con análisis más complejos. Los coeficientes de correlación, que oscilan entre -1 y 1, indican la fuerza y dirección de estas relaciones. Un valor cercano a 1 sugiere una fuerte relación positiva, mientras que un valor cercano a -1 indica una fuerte relación negativa. Un coeficiente cercano a 0 sugiere una ausencia de relación lineal entre las variables.

Al analizar los resultados de la matriz de correlación, se observan varios patrones interesantes que merecen una reflexión detallada:

1. Conflictos sociales y desigualdad: El coeficiente de correlación entre conflictos sociales y el índice de Gini es -0.3930, lo que indica una relación negativa moderada. Este hallazgo es contraintuitivo y desafía la idea inicial de que una mayor desigualdad se asociaría con más conflictos sociales. Esta correlación negativa sugiere que, en el contexto de las regiones estudiadas, otros factores podrían estar mediando o moderando la relación entre desigualdad y conflictividad social.
2. Conflictos sociales y pobreza multidimensional: La correlación entre conflictos sociales y pobreza multidimensional es -0.2944, indicando una relación negativa débil. Nuevamente, este resultado contrasta con la expectativa teórica de que mayores niveles de pobreza se asociarían con más conflictos. Esta discrepancia podría indicar la presencia de factores contextuales específicos que influyen en la manifestación de conflictos sociales más allá de las condiciones de pobreza.
3. Conflictos sociales e inversión pública: La correlación entre conflictos sociales e inversión pública es -0.2401, sugiriendo una relación negativa débil. Aunque esta dirección se alinea con la idea de que mayor inversión pública podría reducir la conflictividad, la debilidad de la relación indica que el vínculo no es tan directo o fuerte como se podría esperar.

4. Desigualdad y pobreza multidimensional: La correlación positiva moderada (0.5873) entre el índice de Gini y la pobreza multidimensional es coherente con la literatura que vincula estos dos fenómenos. Este resultado sugiere que, en las regiones estudiadas, la desigualdad y la pobreza tienden a coexistir y posiblemente se refuerzan mutuamente.
5. Inversión pública, desigualdad y pobreza: Las correlaciones negativas entre inversión pública y tanto el índice de Gini (-0.4485) como la pobreza multidimensional (-0.5340) son particularmente relevantes. Estos resultados sugieren que mayores niveles de inversión pública se asocian con menores niveles de desigualdad y pobreza, lo cual respalda parcialmente la idea sobre el papel positivo de la inversión pública en la reducción de brechas socioeconómicas.

Estos hallazgos correlacionales, aunque preliminares, plantean interrogantes significativos sobre la complejidad de las dinámicas socioeconómicas en las regiones estudiadas. La aparente desconexión entre conflictos sociales y las medidas de desigualdad y pobreza desafía las suposiciones simplistas sobre las causas de la conflictividad social. Por otro lado, las correlaciones negativas entre inversión pública y las medidas de desigualdad y pobreza ofrecen un respaldo inicial a la idea de que la inversión pública puede tener un efecto positivo en la reducción de disparidades socioeconómicas.

Es importante señalar que estas correlaciones no implican causalidad y pueden estar influenciadas por factores no observados o relaciones no lineales. Además, al ser un análisis agregado de las tres regiones, podrían estar ocultando variaciones importantes entre y dentro de las regiones.

Estos resultados correlacionales sientan las bases para análisis más profundos y sofisticados. Sugieren la necesidad de explorar modelos multivariados que puedan capturar la complejidad de las interacciones entre estas variables, así como la incorporación de variables adicionales que puedan ayudar a explicar las aparentes contradicciones observadas. Asimismo, subrayan la importancia de considerar análisis desagregados por región y a lo largo del tiempo para capturar dinámicas específicas que podrían estar ocultas en este análisis agregado.

4.2. Estimación del modelo econométrico

La complejidad inherente a las dinámicas socioeconómicas en las regiones de Cusco, Cajamarca y Puno demanda un análisis cuantitativo riguroso que permita desentrañar las relaciones causales entre la inversión pública, la desigualdad socioeconómica y la conflictividad social. En este contexto, la aplicación de un modelo econométrico se erige como una herramienta fundamental para examinar empíricamente las ideas planteadas y contribuir al corpus de conocimiento sobre el desarrollo regional en el Perú.

El objetivo primordial del modelo econométrico propuesto es doble. En primera instancia, se busca cuantificar el impacto de la inversión pública sobre los indicadores de desigualdad y pobreza multidimensional en las regiones mencionadas. Subsecuentemente, el modelo se propone evaluar cómo las variaciones en estos indicadores socioeconómicos influyen en la incidencia de conflictos sociales. Este enfoque bifásico permite una aproximación holística a la problemática, facilitando la identificación de los mecanismos a través de los cuales la política de inversión pública podría incidir, directa e indirectamente, en la estabilidad social de las regiones estudiadas.

La selección de un modelo de regresión lineal simple como base para este análisis se fundamenta en diversas consideraciones metodológicas y pragmáticas. Primordialmente, este enfoque ofrece una clara ventaja en términos de interpretabilidad, un factor crucial cuando se busca traducir hallazgos econométricos en recomendaciones de política pública tangibles y accesibles para los tomadores de decisiones.

No obstante, es imperativo reconocer que esta elección metodológica conlleva ciertas limitaciones, particularmente en lo que respecta a la captura de efectos no lineales o interacciones complejas entre variables. Sin embargo, se argumenta que, en esta etapa de la investigación, la claridad y la directa interpretabilidad del modelo lineal simple ofrecen ventajas que superan estas limitaciones, proporcionando una base sólida para análisis más sofisticados en etapas posteriores de la investigación.

4.2.1. Especificación del modelo

La especificación formal del modelo econométrico se estructura en torno a dos ecuaciones fundamentales, cada una diseñada para abordar un aspecto específico de las ideas de investigación planteadas.

Las ecuaciones que conforman el núcleo del modelo se presentan a continuación:

- $Desigualdad_{it} = \beta_0 + \beta_1 \times Inversion\ Publica_{it} + \varepsilon_{it}$
- $Conflictos\ Sociales_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 \times Desigualdad_{it} + \gamma_2 \times Pobreza\ Multidimensional_{it} + \mu_{it}$

Donde:

- i denota la región (Cusco, Cajamarca o Puno)
- t representa el año dentro del período de estudio 2012-2022
- ε_{it} y μ_{it} son los términos de error estocástico para cada ecuación respectivamente

La primera ecuación modela la relación entre la inversión pública y la desigualdad, mientras que la segunda examina cómo la desigualdad y la pobreza multidimensional influyen en la incidencia de conflictos sociales.

4.2.2. Descripción de las variables

Las variables incorporadas en el modelo se definen y operacionalizan de la siguiente manera:

- $Desigualdad_{it}$: Operacionalizada mediante el índice de Gini para la región i en el año t . Este coeficiente, que oscila entre 0 y 1, proporciona una medida sintética de la desigualdad en la distribución del ingreso, donde valores más altos indican mayor desigualdad.

- *Inversión_Pública_it*: Cuantificada como el gasto ejecutado en inversión pública en millones de soles para la región *i* durante el año *t*. Esta variable captura el esfuerzo gubernamental en términos de asignación de recursos para el desarrollo regional.
- *Conflictos_Sociales_it*: Operacionalizada como el promedio anual de conflictos sociales registrados en la región *i* durante el año *t*. Esta medida proporciona una aproximación cuantitativa a la intensidad de la conflictividad social en cada región.
- *Pobreza_Multidimensional_it*: Definida como el porcentaje de la población clasificada como pobre según el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en la región *i* para el año *t*. El IPM captura privaciones en dimensiones críticas del bienestar más allá del ingreso, como salud, educación y condiciones de vida.

La selección de estas variables se fundamenta en su relevancia teórica y su capacidad para capturar los fenómenos de interés de manera cuantificable y comparable entre regiones y a lo largo del tiempo. El índice de Gini y el IPM, en particular, son medidas ampliamente reconocidas en la literatura sobre desarrollo y desigualdad, lo que facilita la comparabilidad de los resultados con estudios previos y su contextualización en el marco más amplio de la investigación sobre desarrollo regional.

Es importante señalar que, si bien estas variables proporcionan una aproximación robusta a los fenómenos de interés, no capturan la totalidad de la complejidad inherente a conceptos como desigualdad o conflictividad social. Esta limitación se reconoce explícitamente y se abordará en la discusión de los resultados y las implicaciones del modelo.

La especificación propuesta, aunque parsimoniosa, permite un examen directo de las relaciones clave postuladas en las ideas de investigación. La estructura secuencial de las ecuaciones facilita la exploración de efectos tanto directos como indirectos de la inversión pública sobre la conflictividad social, mediados por cambios en la desigualdad y la pobreza multidimensional. Este enfoque proporciona un marco analítico robusto para desentrañar las complejas interacciones entre política pública, condiciones socioeconómicas y estabilidad social en las regiones de Cusco, Cajamarca y Puno.

4.3. Resultados del modelo econométrico

La fase de estimación del modelo econométrico constituye un paso crucial en la transición desde la especificación teórica hacia la obtención de resultados empíricos cuantificables. Esta etapa implica la aplicación de técnicas estadísticas rigurosas para calcular los parámetros del modelo, permitiendo así la evaluación de las ideas planteadas y la cuantificación de las relaciones entre las variables de interés.

Para la estimación de los parámetros en ambas ecuaciones del modelo, se emplea el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Esta elección metodológica se fundamenta en varias consideraciones teóricas y prácticas.

Primero, el MCO proporciona estimadores lineales insesgados y eficientes bajo los supuestos del teorema de Gauss-Markov, lo que lo convierte en una herramienta robusta y ampliamente aceptada en la literatura econométrica. La linealidad de los parámetros en nuestro modelo se ajusta perfectamente a los requerimientos de esta técnica.

Segundo, el MCO ofrece una interpretación directa de los coeficientes estimados, facilitando la traducción de los resultados estadísticos en implicaciones de política pública comprensibles. Cada coeficiente β o γ estimado representa el cambio marginal en la variable dependiente asociado con un cambio unitario en la variable independiente correspondiente, *ceteris paribus*.

Tercero, la relativa simplicidad computacional del MCO, combinada con su eficiencia asintótica bajo condiciones estándar, lo hace particularmente adecuado para nuestro conjunto de datos, que abarca un período de tiempo limitado (2012-2022) para las tres regiones de interés.

No obstante, es necesario reconocer las limitaciones potenciales de este método. En particular, la posible presencia de heterocedasticidad o autocorrelación en los errores podría afectar la eficiencia de los estimadores MCO. Para abordar estas preocupaciones, se implementarán pruebas de diagnóstico post-estimación, incluyendo el test de Breusch-Pagan para heterocedasticidad y el test de Durbin-Watson para autocorrelación.

Además, para mitigar posibles sesgos derivados de la naturaleza de panel de nuestros datos, se considerará la estimación de errores estándar robustos agrupados por región. Esto permitirá una inferencia estadística más

conservadora y robusta, particularmente importante dado el número limitado de unidades transversales en nuestro estudio.

4.3.1. Resultados de la estimación: Inversión pública y desigualdad

El modelo de regresión lineal estimado para examinar la relación entre la inversión pública y el índice de Gini en las regiones de Cusco, Cajamarca y Puno presenta los siguientes resultados:

Linear regression		Number of obs	=	33	
		F(1, 2)	=	7.84	
		Prob > F	=	0.1074	
		R-squared	=	0.2012	
		Root MSE	=	.03406	
(Std. Err. adjusted for 3 clusters in id_region)					
indice_gini	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
inversion_publica	-.0000342	.0000122	-2.80	0.107	-.0000868 .0000184
_cons	.5003134	.0397166	12.60	0.006	.3294266 .6712003

1. El coeficiente de la variable 'inversion_publica' es -0.0000342, con un error estándar robusto de 0.0000122.
2. El estadístico t asociado es -2.80, con un valor p de 0.107.
3. El R-cuadrado del modelo es 0.2012, indicando que aproximadamente el 20.12% de la variación en el índice de Gini es explicada por la inversión pública.
4. El modelo se basa en 33 observaciones y utiliza errores estándar robustos ajustados para 3 clusters (las regiones estudiadas).
5. La constante del modelo es 0.5003134, con un error estándar de 0.0397166 y un valor p de 0.006.

Los resultados obtenidos ofrecen una perspectiva interesante sobre la relación entre la inversión pública y la desigualdad en las regiones estudiadas, aunque es necesario interpretarlos con cautela debido a las limitaciones del modelo y la muestra.

En primer lugar, el coeficiente negativo de la variable 'inversion_publica' (-0.0000342) sugiere una relación inversa entre la inversión pública y el índice de Gini. Esto implica que, en promedio, un aumento en la inversión pública está asociado con una disminución en el índice de Gini, lo que se traduce en una reducción de la desigualdad. Este hallazgo está en línea con la idea planteada inicialmente y respalda los argumentos teóricos presentados por autores como Jaramillo y Alcázar (2022), quienes sostienen que la inversión pública puede tener un efecto positivo en la reducción de la desigualdad al mejorar la dotación de capital físico y humano de los hogares más vulnerables.

Sin embargo, es crucial notar que el valor p asociado a este coeficiente (0.107) supera el umbral convencional de significancia estadística del 0.05 o incluso del 0.10. Esto implica que, aunque observamos una tendencia hacia la reducción de la desigualdad con el aumento de la inversión pública, no podemos rechazar con confianza la idea nula de que no existe relación entre estas variables. Esta falta de significancia estadística podría deberse a varios factores, incluyendo el tamaño limitado de la muestra (33 observaciones) y la posible presencia de otros factores no considerados en el modelo que influyen en la desigualdad.

El R-cuadrado de 0.2012 indica que aproximadamente el 20.12% de la variación en el índice de Gini es explicada por la inversión pública. Aunque este valor puede parecer modesto, es importante considerar que la desigualdad es un fenómeno complejo influenciado por múltiples factores, muchos de los cuales no están incluidos en este modelo simplificado. En este contexto, explicar más del 20% de la variación en la desigualdad únicamente a través de la inversión pública es un resultado relevante.

La constante del modelo (0.5003134) es estadísticamente significativa ($p = 0.006$) y representa el valor esperado del índice de Gini cuando la inversión pública es cero. Este valor es consistente con los niveles de desigualdad observados en las regiones estudiadas, como se mencionó en la introducción, donde se indicaba que el coeficiente de Gini se ubicaba alrededor de 0.35-0.37 en estas regiones en 2020.

Estos resultados deben interpretarse en el contexto del marco teórico presentado inicialmente. La relación negativa observada entre inversión pública y desigualdad, aunque no estadísticamente significativa al nivel convencional, se

alineada con los argumentos de Zhang, Wang y Chen (2012), quienes sostienen que el gasto público tiene un efecto progresivo al expandir la actividad económica e impulsar la productividad de los factores vía mejoras en infraestructura. Asimismo, respalda parcialmente la idea de Becker (2007) sobre cómo los proyectos públicos pueden fomentar la acumulación de capital humano, con efectos positivos en el crecimiento y la equidad a largo plazo.

No obstante, la falta de significancia estadística robusta también refleja la advertencia de Jaramillo y Alcázar (2022) sobre que la mayor inversión pública no se traduce automáticamente en mejoras tangibles en términos de reducción de disparidades sociales. Esto subraya la importancia de considerar la calidad y focalización de la inversión pública, no solo su cantidad.

Es importante reconocer las limitaciones de este análisis. El modelo no captura la totalidad de factores que influyen en la desigualdad, como pueden ser las políticas fiscales, las dinámicas del mercado laboral, o los shocks económicos externos. Además, la naturaleza agregada de los datos a nivel regional podría estar ocultando disparidades intrarregionales importantes.

En conclusión, aunque los resultados sugieren una tendencia hacia la reducción de la desigualdad con el aumento de la inversión pública en las regiones de Cusco, Cajamarca y Puno, la evidencia estadística no es concluyente. Esto resalta la necesidad de investigaciones más detalladas que consideren un espectro más amplio de variables y posiblemente un período de tiempo más extenso. También subraya la importancia de complementar el análisis cuantitativo con estudios cualitativos que puedan capturar las complejidades y particularidades de cada región en la implementación y los efectos de la inversión pública.

Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para la política pública, sugiriendo que, si bien la inversión pública puede ser una herramienta para reducir la desigualdad, su efectividad puede depender de factores adicionales que requieren un examen más detallado. Futuras investigaciones podrían beneficiarse de la inclusión de variables que capturen la calidad y el tipo de inversión pública, así como de un análisis más granular a nivel de provincias o distritos dentro de estas regiones.

4.3.2. Resultados de la estimación: Desigualdad y conflictividad social

El modelo de regresión lineal estimado para examinar la relación entre el índice de Gini, la pobreza multidimensional y los conflictos sociales en las regiones de Cusco, Cajamarca y Puno presenta los siguientes resultados:

Linear regression		Number of obs	=	33	
		F(1, 2)	=	.	
		Prob > F	=	.	
		R-squared	=	0.1606	
		Root MSE	=	3.0195	
(Std. Err. adjusted for 3 clusters in id_region)					
conflictos_sociales	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
indice_gini	-28.58972	9.18072	-3.11	0.089	-68.09117 10.91173
pobreza_multidimensional	-.0258437	.1044497	-0.25	0.828	-.4752545 .423567
_cons	28.57386	2.335419	12.24	0.007	18.52536 38.62235

1. El coeficiente de la variable 'indice_gini' es -28.58972, con un error estándar robusto de 9.18072.
2. El estadístico t asociado al índice de Gini es -3.11, con un valor p de 0.089.
3. El coeficiente de la variable 'pobreza_multidimensional' es -0.0258437, con un error estándar robusto de 0.1044497.
4. El estadístico t asociado a la pobreza multidimensional es -0.25, con un valor p de 0.828.
5. El R-cuadrado del modelo es 0.1606, indicando que aproximadamente el 16.06% de la variación en los conflictos sociales es explicada por el índice de Gini y la pobreza multidimensional.
6. El modelo se basa en 33 observaciones y utiliza errores estándar robustos ajustados para 3 clusters (las regiones estudiadas).
7. La constante del modelo es 28.57386, con un error estándar de 2.335419 y un valor p de 0.007.

Los resultados obtenidos ofrecen una perspectiva intrigante sobre la relación entre la desigualdad, la pobreza multidimensional y los conflictos sociales en las

regiones estudiadas, aunque es necesario interpretarlos con cautela debido a las limitaciones del modelo y la muestra.

En primer lugar, el coeficiente negativo y relativamente grande de la variable 'índice_gini' (-28.58972) sugiere una relación inversa entre la desigualdad y los conflictos sociales. Este hallazgo es sorprendente y contraintuitivo, ya que implica que, en promedio, un aumento en el índice de Gini (mayor desigualdad) está asociado con una disminución en el número de conflictos sociales. Es importante notar que este coeficiente es marginalmente significativo a un nivel del 10% ($p = 0.089$), lo que sugiere que esta relación, aunque inesperada, merece una consideración seria.

Este resultado contradice la idea inicial basada en la teoría de las necesidades humanas y el enfoque de Galtung sobre la violencia estructural, que sugieren que una mayor desigualdad debería conducir a más conflictos sociales. La aparente relación inversa podría indicar la presencia de factores mediadores o moderadores no capturados en el modelo, o podría ser un artefacto de la limitada muestra y el período de tiempo considerado.

Por otro lado, el coeficiente de la variable 'pobreza_multidimensional' (-0.0258437) también muestra una relación negativa con los conflictos sociales, aunque este efecto es muy pequeño y no es estadísticamente significativo ($p = 0.828$). Esto sugiere que, en el contexto de este modelo, la pobreza multidimensional no parece tener un impacto sustancial en la incidencia de conflictos sociales, lo cual también contradice las expectativas teóricas.

El R-cuadrado de 0.1606 indica que aproximadamente el 16.06% de la variación en los conflictos sociales es explicada por el índice de Gini y la pobreza multidimensional en conjunto. Este valor relativamente bajo sugiere que existen otros factores importantes que influyen en la incidencia de conflictos sociales y que no están capturados en este modelo.

La constante del modelo (28.57386) es estadísticamente significativa ($p = 0.007$) y representa el número esperado de conflictos sociales cuando tanto el índice de Gini como la pobreza multidimensional son cero, una situación hipotética que no se da en la realidad.

Estos resultados plantean varios desafíos interpretativos en el contexto del marco teórico presentado inicialmente. La relación negativa observada entre el índice de Gini y los conflictos sociales parece contradecir la idea de que la

desigualdad profunda implica la privación sistemática de necesidades fundamentales que pueden desembocar en tensiones y conflictos sociales, como sugiere la teoría de las necesidades humanas (Femenia, 2014).

Asimismo, estos hallazgos no se alinean con el enfoque de Galtung sobre la violencia estructural, que postula que la desigualdad extrema constituye una forma de violencia indirecta que genera sufrimiento y siembra las semillas del conflicto (Castro, 2009; Alzate, 2007). La falta de una relación significativa entre la pobreza multidimensional y los conflictos sociales también parece contradecir estas perspectivas teóricas.

Varias explicaciones potenciales podrían ayudar a reconciliar estos resultados inesperados con el marco teórico:

1. Factores mediadores no capturados: Podría haber variables importantes no incluidas en el modelo que median la relación entre desigualdad, pobreza y conflictos sociales. Por ejemplo, la efectividad de las instituciones locales, la presencia de programas de bienestar social, o la fortaleza de las redes de apoyo comunitario podrían moderar el impacto de la desigualdad y la pobreza en la generación de conflictos.
2. Umbral de desigualdad: Es posible que exista un umbral de desigualdad por encima del cual los conflictos sociales aumentan, pero por debajo del cual otras dinámicas sociales prevalecen. Si las regiones estudiadas se encuentran predominantemente por debajo de este umbral, podríamos observar esta relación aparentemente inversa.
3. Temporalidad y rezagos: Los efectos de la desigualdad y la pobreza en los conflictos sociales podrían manifestarse con un rezago temporal significativo, que no está capturado en este modelo de efectos contemporáneos.
4. Complejidad de los conflictos sociales: La naturaleza de los conflictos sociales en estas regiones podría ser más compleja de lo que sugiere la teoría, posiblemente influenciada por factores históricos, culturales o políticos específicos de cada región que no están reflejados en las medidas agregadas de desigualdad y pobreza.
5. Limitaciones de las medidas: El índice de Gini y la medida de pobreza multidimensional podrían no capturar adecuadamente las formas

específicas de desigualdad y privación que son más relevantes para la generación de conflictos en estas regiones.

Estos resultados subrayan la importancia de considerar el contexto específico de cada región y la necesidad de un análisis más detallado y multidimensional de los factores que influyen en la conflictividad social. También resaltan las limitaciones de aplicar teorías generales a contextos locales sin considerar las particularidades históricas, culturales y socioeconómicas de cada región.

En conclusión, aunque los resultados desafían las expectativas teóricas iniciales, ofrecen una valiosa oportunidad para reexaminar nuestras suposiciones sobre la relación entre desigualdad, pobreza y conflictos sociales en el contexto específico de Cusco, Cajamarca y Puno. Sugieren la necesidad de un enfoque más matizado y contextualizado en el estudio de estos fenómenos, que podría incluir:

1. La incorporación de variables adicionales que capturen las dinámicas institucionales, culturales y políticas específicas de cada región.
2. El uso de métodos mixtos que combinen análisis cuantitativo con estudios de caso cualitativos para comprender mejor los mecanismos subyacentes.
3. La consideración de efectos no lineales y umbrales en la relación entre desigualdad, pobreza y conflictos sociales.
4. Un análisis longitudinal más extenso que permita capturar efectos a largo plazo y posibles cambios estructurales en estas relaciones.

CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN Y APORTES

5.1. Análisis y lineamientos para mejorar impacto de las inversiones

5.1.1. Sobre los hallazgos en la ejecución del gasto y sus efectos en la desigualdad y los conflictos

Los resultados encontrados nos llevan a la necesaria discusión sobre los determinantes y condicionantes de la efectividad del gasto e inversión pública en la pobreza monetaria y multidimensional, así como en la reducción de la desigualdad. Pero sobre todo como herramienta para disminuir los conflictos sociales asociados a la desigualdad y al ejercicio de derechos en el acceso a servicios públicos esenciales

En primer lugar, el hecho que los importantes montos ejecutados de canon en las regiones analizadas, no haya tenido resultados significativos en la reducción de niveles de pobreza, sugiere una muy baja eficiencia y efectividad del uso de los recursos públicos. Ello, suele estar asociado a una baja capacidad y calidad de estudios técnicos de los proyectos, deficientes niveles de seguimiento y supervisión, alta informalidad de mercado de proveedores, alta volatilidad en las autoridades y funcionarios, así también a riesgos ambientales y sociales mal administrados. Tampoco puede omitirse la cada vez creciente corrupción en los diferentes niveles de gobierno regional y local, según reportes de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

En segundo lugar, la alta variabilidad en la asignación presupuestal de inversiones es un factor que puede afectar la programación ordenada hacia el cierre de brechas de servicios e infraestructura pública. Especialmente en sectores claves como salud, educación, saneamiento, y sectores productivos como transporte, riego y energía.

En tercer lugar, la ausencia de una cartera articulada e integral de proyectos, con enfoque territorial es otro elemento explicativo. Tal como lo mencionan Jaramilla (2022) y Prialé (2022), un portafolio con sinergias en el territorio puede tener efectos mucho más potentes en la economía y en la población, por sus claros efectos multiplicadores.

Por otro lado, la pobreza multidimensional, que mide entre otros el acceso a servicios básicos refleja los aún importantes desafíos en materia de brechas en el ejercicio de derechos fundamentales, sociales y económicos en las tres regiones analizadas. No se trata entonces solo de un tema de acceso a servicios públicos, sino a aspectos directamente vinculados a la dignidad y a los derechos humanos y que a su vez, están directamente relacionados a los conflictos sociales. Si bien no es la única variable explicativa, dada la volatilidad del número de conflictos observados, sí es posible considerar que hay condicionantes vinculados a la baja capacidad del Estado para gastar los recursos adecuadamente en las inversiones necesarias y urgentes.

5.1.2. Propuesta de lineamientos

Si entendemos el efecto y la potencia de la inversión pública en servicios e infraestructura desde una perspectiva de ejercicio de derechos fundamentales, la lógica de las decisiones de gobierno y de gasto adquieren otro matiz, más allá del estrictamente económico de la eficiencia. Adquiere mayor protagonismo, los conceptos de efectividad y de sostenibilidad. Por ejemplo, se valora más el hecho de cubrir las zonas con mayor incidencia, y no solo las zonas con mayores brechas absolutas y con menores costos por intervención.

Desde esta perspectiva, se pueden proponer lineamientos de política para mejorar el impacto de las inversiones públicas en la reducción de brechas y desigualdad por cierto; pero también mirando la reducción de los conflictos sociales asociados. Así, la programación y la evaluación del gasto público de proyectos y obras incorpora otros criterios, no excluyente sino complementario, a la toma de decisiones del Estado.

En primer lugar, respecto al efecto de la inversión en la reducción de brechas desde un punto de vista de desigualdad monetaria (ingresos de las familias), los resultados encontrados en las tres regiones muestran solo una relación débil y poco significativa. Ello sugiere un esfuerzo mayor en tres dimensiones:

- Una mejor focalización del gasto, con un portafolio concentrado en las brechas de infraestructura productiva como caminos, riego, electrificación y comunicaciones (internet) en zonas de muy baja integración económica. Es importante evitar la atomización de pequeñas obras de bajo impacto
- Una mejor programación del gasto, para asegurar los recursos presupuestales para la oportuna ejecución de las inversiones, y muy especialmente, su mantenimiento (sostenibilidad). Aquí es necesario trabajar con el MEF para que las transferencias y procesos de programación no sufran retrasos o bloqueos innecesarios.
- Una herramienta de gestión que puede ser muy útil es trabajar un programa de transferencias complementarios y asistencia técnica desde el Gobierno Central para apoyar el mantenimiento de caminos rurales e infraestructura de riego en los distritos con mayores niveles de pobreza, por ejemplo. Debemos recordar que la fuente de canon que reciben Cusco, Cajamarca y Puno, pueden asignar hasta en 20% a mantenimiento de infraestructura
- Una mejor cartera de proyectos con enfoque territorial, donde se aprovechen las sinergias en corredores económicos y logísticos con potencial económico: agrario, turismo, comercio, entre otros. Ello puede mejorar de manera importante el efecto final en los ingresos monetarios de las familias.

En segundo lugar, respecto al efecto de la inversión pública en la reducción de brechas de servicios públicos esenciales como salud, educación y saneamiento, directamente vinculados al ejercicio de derechos fundamentales. Los niveles de gasto observados en las tres regiones y su bajo efecto en las brechas sociales sugieren que el cuello de botella para reducir desigualdad no está en la cantidad sino en la calidad del gasto. Al respecto, podemos proponer algunos lineamientos:

- Trabajar metodologías directas que incorporen los beneficios sociales indirectos y beneficios intangibles en la evaluación económica de los proyectos.

- Mejorar la calidad de los expedientes técnicos, a fin de asegurar la ejecución física constructiva y viabilidad técnica de los servicios. En el caso de los proyectos de saneamiento, la cantidad y calidad de la fuente de agua; en hospitales y colegios, la adecuada localización y la viabilidad de las instalaciones sanitarias y eléctricas.
- Construir una cartera de proyectos priorizada en el primer nivel de atención, especialmente en las zonas rurales. El sistema de inversiones InviertePE tiene herramientas apropiadas para la preparación de proyectos en redes de servicios, que puede ser utilizado para mejorar la atención en postas y centro de salud (primer nivel de atención).
- Trabajar un programa de operación y mantenimiento de infraestructura que contribuya a garantizar un nivel de servicio adecuado. Especialmente en las condiciones de seguridad, funcionalidad y salubridad de los centros de educación y salud. Asimismo, una programación aceptable del personal para la atención regular y oportuna de las personas. En el caso de salud, asegurar las actividades del trabajo extramural que tiene mucho contacto directo con las familias, especialmente con los programas de lucha contra la anemia y la desnutrición.
- Desarrollar herramientas para medir los niveles de satisfacción de las familias. Esto puede ser de enorme utilidad para entender las expectativas y las restricciones que enfrentan las personas en el acceso a los servicios y al ejercicio de sus derechos.

Finalmente, en relación con el efecto final de la inversión pública sobre los conflictos sociales. Los resultados observados con información secundaria no muestran una correlación directa y clara entre desigualdad y conflictos. Ello hace más compleja el canal de transmisión entre inversión pública y desigualdad. No obstante, es cierto también que no existen estudios que hayan medido directamente este efecto con casuística e información primaria. Sin embargo, sí hay evidencia que la percepción de injusticia social en la igualdad de ejercicio de derechos y de oportunidades, sí genera condiciones para que existan conflictos sociales.

En esta línea, los proyectos de inversión pública pueden ser una herramienta útil en la gestión y prevención de conflictos sociales. Si partimos del hecho que existe una alta insatisfacción y desconfianza de las personas en el Estado y sus servicios públicos, se pueden plantear algunos lineamientos que reviertan esta situación:

- Construir una cartera de proyectos de rápida ejecución en aquellas zonas donde existen compromisos suscritos del Estado relacionados a conflictos sociales. De existir proyectos de alta complejidad y tamaño, trabajar alternativas de solución con la población de acuerdo a las condiciones presupuestales, pero atendiendo el servicio público esencial.
- La preparación, la ejecución y el seguimiento de los proyectos debe buscar la más alta participación de la población y de las comunidades involucradas. Ello requiere equipos competentes y capacitados en la comunicación y el diálogo. Importante incluir en el diseño un componente de fortalecimiento de capacidades locales y de mecanismos de información participativos.
- Promover y trabajar con proveedores locales para los trabajos que puedan asumir. Quizás al inicio, de baja calificación pero luego pueden asumir funciones de mediana calificación técnica administrativa. Existe ya experiencia con lecciones positivas en núcleos ejecutores y programas de mantenimiento de caminos rurales y caminos de herradura.
- Trabajar una relación estrecha entre el sistema de inversiones, el sistema de presupuesto y el sistema de prevención de conflictos. Una tarea ciertamente compleja pero que puede empezar con pasos simples como un sistema de información integrado entre los tres sistemas, y un sistema de seguimiento bajo responsabilidad de PCM y con participación del MEF y los sectores involucrados según corresponda.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

El presente estudio sobre la interrelación entre inversión pública, desigualdad y conflictividad social en las regiones de Cusco, Cajamarca y Puno ha arrojado resultados que, por un lado, desafían ciertas suposiciones teóricas iniciales y, por otro lado, subrayan la complejidad inherente a estas dinámicas en contextos regionales específicos. En consecuencia, estas conclusiones buscan no solo sintetizar los hallazgos, sino también proporcionar una reflexión crítica sobre sus implicaciones teóricas y prácticas.

En primer lugar, la relación inversa observada entre inversión pública y desigualdad, aunque no alcanza el umbral convencional de significancia estadística, sugiere un potencial efecto positivo de la inversión pública en la reducción de la desigualdad. No obstante, la falta de robustez estadística advierte contra interpretaciones simplistas. Por consiguiente, este hallazgo subraya la necesidad de considerar no solo la magnitud de la inversión pública, sino también su calidad, focalización y los mecanismos específicos a través de los cuales puede impactar la desigualdad.

En segundo lugar, los resultados relativos a la relación entre desigualdad, pobreza multidimensional y conflictos sociales desafían frontalmente las expectativas derivadas de la teoría de las necesidades humanas y el concepto de violencia estructural. La aparente relación inversa entre desigualdad y conflictividad social, junto con la ausencia de un efecto significativo de la pobreza multidimensional, sugiere la presencia de dinámicas complejas y específicas del contexto que trascienden los marcos teóricos generales. Por lo tanto, estos hallazgos cuestionan la aplicabilidad universal de estas teorías y demandan una reconsideración de cómo conceptualizamos y medimos la desigualdad, la pobreza y el conflicto social en contextos regionales diversos.

En tercer lugar, la complejidad revelada por estos resultados subraya la imperativa necesidad de adoptar enfoques más matizados y contextualizados en el estudio de las relaciones entre inversión pública, desigualdad y conflictividad social. En efecto, las políticas públicas y las intervenciones de desarrollo deben fundamentarse en una comprensión profunda y multidimensional de las

realidades locales, que vaya más allá de las medidas agregadas de desigualdad y pobreza.

En el ámbito académico, estos resultados abren nuevas y prometedoras líneas de investigación. Por un lado, es crucial explorar con mayor profundidad los mecanismos específicos a través de los cuales la inversión pública afecta la desigualdad en diferentes contextos regionales. Por otro lado, se hace necesario identificar y analizar los factores mediadores y moderadores en la relación entre desigualdad, pobreza y conflictividad social. Asimismo, la investigación futura debería considerar la posible existencia de umbrales o efectos no lineales en estas relaciones, así como el papel fundamental de las instituciones locales, las redes comunitarias y los factores culturales en la mediación de estas dinámicas.

En cuanto a la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas, este estudio sugiere una serie de consideraciones críticas. En primer lugar, las políticas de inversión pública deben diseñarse con un enfoque holístico que considere no solo su magnitud sino también su calidad, focalización y potencial impacto diferenciado en distintos segmentos de la población. En segundo lugar, los programas de reducción de la desigualdad y la pobreza deben adaptarse meticulosamente a las realidades específicas de cada región, evitando enfoques uniformes que puedan resultar ineficaces o incluso contraproducentes. En tercer lugar, la prevención y gestión de conflictos sociales requiere un análisis más profundo y multidimensional de los factores contextuales, que vaya más allá de las medidas tradicionales de desigualdad y pobreza para incorporar variables culturales, históricas y sociopolíticas.

Adicionalmente, es imperativo desarrollar sistemas de monitoreo y evaluación más sofisticados y sensibles al contexto, capaces de capturar las complejidades de estas relaciones a lo largo del tiempo. Estos sistemas deberían incorporar tanto indicadores cuantitativos como cualitativos, y ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las particularidades de cada región.

En última instancia, este estudio pone de manifiesto la urgente necesidad de un cambio de paradigma en la forma en que abordamos el desarrollo regional y la cohesión social. En lugar de aplicar modelos uniformes basados en teorías generales, se requiere un enfoque que reconozca y se adapte a la diversidad y complejidad de cada contexto regional. Esto implica no solo una reconsideración

de nuestros marcos teóricos y metodológicos, sino también un replanteamiento de cómo diseñamos, implementamos y evaluamos las políticas públicas.

En conclusión, este estudio no solo destaca la complejidad de las interacciones entre inversión pública, desigualdad y conflictividad social en las regiones peruanas estudiadas, sino que también cuestiona fundamentalmente nuestras suposiciones sobre cómo estas variables se relacionan entre sí. Si bien sugiere un potencial positivo de la inversión pública en la reducción de la desigualdad, también revela la necesidad de reconsiderar profundamente nuestro entendimiento de cómo la desigualdad y la pobreza se vinculan con los conflictos sociales.

Estos hallazgos, por lo tanto, no solo contribuyen al cuerpo de conocimiento académico, sino que también tienen implicaciones directas y significativas para la formulación de políticas y la práctica del desarrollo. Exigen un enfoque más matizado, contextualizado y adaptativo en la investigación académica y la formulación de políticas, reconociendo la diversidad de factores que influyen en el desarrollo y la estabilidad social de las regiones.

En última instancia, este estudio nos insta a adoptar una perspectiva más holística y reflexiva sobre el desarrollo regional, una que reconozca la interconexión de los factores económicos, sociales y políticos, y que esté dispuesta a cuestionar y revisar constantemente nuestros modelos y supuestos a la luz de la evidencia empírica. Solo a través de este enfoque crítico y adaptativo podremos desarrollar estrategias efectivas para promover un desarrollo equitativo y sostenible en contextos regionales diversos y complejos.

Finalmente, en términos de propuesta de política, el estudio sugiere ir un paso más allá del enfoque económico en las decisiones de inversiones, para ir hacia un enfoque de derechos y de prevención de conflictos. Ello implica incluir criterios de efectividad, beneficios intangibles, y asegurar la sostenibilidad de las inversiones en el acceso a servicios universales esenciales, más allá del enfoque de rentabilidad y eficiencia del gasto. Adicionalmente, es importante trabajar la integración del sistema de presupuesto y de inversiones, con el sistema de prevención de conflictos. Empezando con un sistema de información y un sistema de seguimiento efectivo y en el más alto nivel de gobierno.

Bibliografía

- Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (2018, 5 de octubre). *¿Qué es la desigualdad económica y por qué se produce?* Conciencia Social y Económica. https://eacnur.org/es/blog/desigualdad-economica-que-es-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst
- Alesina, A., & Angeletos, G. (2005). Corruption, inequality, and fairness. *Journal of Monetary Economics*, 52(7), 1227–1244. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2005.05.003>
- Alzate, R. (2007). *Teoría del Conflicto*. Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid.
- Aparicio, C., Jaramillo, M., San Román, C. (2011). *Desarrollo de la infraestructura y reducción de la pobreza: el caso peruano*. Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC). https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2016/07/desarrollo-de-la-infraestructura-y-reduccion-de-la-pobreza_0.pdf
- Aragón, J. y Guibert, Y. (2016). *Metodología y diseños de investigación en Política Comparada*. PUCP.
- Arce, M. (2017). *La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú*. Fondo Editorial de la PUCP.
- Arellano-Yanguas, J. (2011). Aggravating the resource curse: decentralization, mining and conflict in Peru. *The Journal of Development Studies*, 47(4), 617-638. <https://doi.org/10.1080/00220381003706478>

- Armendáriz, E., Andrián, L., Contreras, E., & Hirs, J. (2021). *Planificación y priorización ex ante de la inversión pública en los Países Andinos* (Nota Técnica N°2171). Banco Interamericano de Desarrollo. <https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Planificacion-y-priorizacion-ex-ante-de-la-inversion-publica-en-los-paises-andinos.pdf>
- Arteaga, G., García, J., Tejeda, J., & Rodríguez, R. (2019). *Estrategia alternativa para la priorización de proyectos de infraestructura* (Nota Técnica N°1764). Banco Interamericano de Desarrollo. <http://dx.doi.org/10.18235/0001987>
- Atkinson, T., Cantillon, B., Marlier, E. & Nolan, B. (2002). *Social Indicators: The EU and Social Inclusion*. Oxford University Press.
- Ballón, E. (2006). Crecimiento económico, crisis de la democracia y conflictividad social Notas para un balance del toledismo. *Democracia inconclusa: transición y crecimiento*, 17.
- Banco Mundial. (2023). Resurgir fortalecidos: Evaluación de pobreza y equidad en el Perú. *Banco Mundial*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099042523145515085/pdf/P176738041a16e0100a70e0c7343035f58e.pdf>
- Banco Mundial. (s.f.). Índice de Gini [Datos web]. Base de Datos del Banco Mundial. <https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI>
- Basombrío, C., Rospigliosi, F., & Valdés, R. (2016). Conflictos sociales en el Perú (2008-2015). *Lima: Capital Humano y Social SA*.
- Becker, G. S. (2007). Health as Human Capital: Synthesis and Extensions. *Oxford Economic Papers*, 59(3), 379-410. https://ucema.edu.ar/u/je49/capital_humano/Health_as_Human_Capital_Becker.pdf

- Bonifaz, J., Urrunaga, U., Aguirre, J. y Quequezana, P. (2020). *Brecha de infraestructura en el Perú: estimación de la brecha de infraestructura de largo plazo 2019-2038*. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). <https://publications.iadb.org/es/brecha-de-infraestructura-en-el-peru-estimacion-de-la-brecha-de-infraestructura-de-largo-plazo-2019>
- Brahmachari, D. (2019). *Economic Determinants of Ethnic and Insurgent Conflict: an empirical study of northeast Indian states*. Munich Personal RePEc Archive
- Braithwaite, A., Dasandi, N., & Hudson, D. (2016). Does poverty cause conflict? Isolating the causal origins of the conflict trap. *Conflict Management and Peace Science*, 33(1), 45-66.
- Calderón, L. Carranza, L. Laguna, R. y Prialé, M (2022). Infraestructura para el desarrollo regional: Enfoque de cierre de brechas y corredores económicos. *Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la USMP*.
- Calderón, P. (2009). Teoría de conflictos de Johan Galtung. *Revista de Paz y Conflictos*, (2), 60-81. <https://www.redalyc.org/pdf/2050/205016389005.pdf>
- Calle, I. (2016). *Infraestructura vial en la Amazonía peruana: hacia una gestión sostenible*. SPDA. https://biblioteca.spda.org.pe/biblioteca/catalogo/_data/20180625123107_Cuaderno%20Legal%204%20-%20Infraestructura%20vial%20en%20la%20amazonia%20peruana.pdf
- Castellares, R., y Fouché, M. (2017). *Determinantes de los conflictos sociales en zonas de producción minera* (Documentos de Trabajo BCRP DT 005-2017). Banco Central de Reserva del Perú. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2017/documento-de-trabajo-05-2017.pdf>

- Castro, S. (2013). *Pobreza, minería y conflictos socio ambientales en el Perú*. INTE PUCP.
- Caumartin, C., Molina, G. G., & Thorp, R. (2008). Inequality, ethnicity and political violence in Latin America: The cases of Bolivia, Guatemala and Peru. En F. Stewart (Eds.), *Horizontal inequalities and conflict: Understanding group violence in multiethnic societies* (pp. 227-251). Palgrave Macmillan UK.
- Cavero, O. (2017). El trabajo en una economía heterogénea y marginal: Un panorama general de la situación socioeconómica de los trabajadores en el Perú. En Manky, O (Ed), *Trabajo y sociedad. Estudios sobre el mundo del trabajo en el Perú*. CISEPA-PUCP.
- CEPLAN (2024, 5 de mayo). Persistencia de la pobreza. *Observatorio CEPLAN-PCM*. <https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/t9>
- Colafranceschi, M., Failache, E., Vigorito, A. (2013). Desigualdad multidimensional y dinámica de la pobreza en Uruguay en los años recientes. *El Futuro en Foco. Cuadernos sobre Desarrollo Humano*. PNUD Uruguay. Naciones Unidas. <https://www.undp.org/es/uruguay/publications/cuaderno-sobre-desarrollo-humano-2-desigualdad-multidimensional-y-din%C3%A1mica-de-la-pobreza-en-uruguay-en-los-a%C3%B1os-recientes>
- ComexPerú. (2019, 9 de agosto). *Brecha de infraestructura, una alta valla por superar*. Semanario (995). <https://www.comexperu.org.pe/articulo/brecha-de-infraestructura-una-alta-valla-por-superar>
- ComexPerú. (2022a, 22 de julio). *Un año más de nuestra independencia: ¿Cómo va la evolución de la economía peruana?* Semanario (1129). <https://www.comexperu.org.pe/articulo/un-ano-mas-de-nuestra-independencia-como-va-la-evolucion-de-la-economia-peruana>

ComexPerú. (2022b, 18 de noviembre). *Los departamentos más pobres a nivel multidimensional y su avance en la ejecución de inversión pública*. Semanario (1144). <https://www.comexperu.org.pe/articulo/los-departamentos-mas-pobres-a-nivel-multidimensional-y-su-avance-en-la-ejecucion-de-inversion-publica>

ComexPerú. (2023). *Reporte eficacia del gasto público: Resultados para el año 2022* (Reporte). Sociedad de Comercio Exterior del Perú. <https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/reportes/reporte-eficacia-010.pdf>

ComexPerú. (2024, 17 de mayo). *Pobreza Multidimensional afecta a 1.4 millones más que la monetaria*. Semanario (1208). <https://www.comexperu.org.pe/articulo/pobreza-multidimensional-afecta-a-14-millones-mas-que-la-monetaria#:~:text=La%20pobreza%20multidimensional%20afect%C3%B3%20a%2011.3%20millones%20de%20peruanos%20en,cobertura%20de%20los%20servicios%20p%C3%ABlicos>.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2018). *La ineficiencia de la desigualdad*. (LC/SES.37/3-P). CEPAL. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cd373168-ed4d-4bb7-b70a-4d9fd80c68a9/content>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). *Distribución de los ingresos de las personas por deciles de ingreso per cápita* [Base de Datos]. Portal de desigualdades en América Latina. <https://statistics.cepal.org/portal/inequalities/incomes.html?lang=es&indicator=3291>

Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict* (Vol. 9). Routledge.

Defensoría del Pueblo. (2020). *Los costos del conflicto social. Una aproximación metodológica a las dimensiones económicas, sociales e institucionales del*

conflicto social en el Perú (Informe Defensorial N° 001-2019-DP). Defensoría del Pueblo. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/Informe-de-adjunt%C3%ADa-N%C2%BA-001-2019-DP-APCSG-Los-costos-del-conflicto-social.pdf>

Defensoría del Pueblo. (2022). *Pobreza Multidimensional en el Perú: Un enfoque desde los derechos humanos* (Informe Defensorial N° 188-2022-DP). Defensoría del Pueblo. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3810418/Pobreza%20Multidimensional%20y%20DDHH.pdf.pdf>

Defensoría del Pueblo. (2023). *Reporte mensual de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad – diciembre de 2023* (Reporte Defensorial N° 238). Defensoría del Pueblo.

Degregori, C. I. (2017). *El surgimiento de sendero luminoso: Ayacucho 1969-1979* (Vol. 40). Instituto de estudios peruanos.

Del Carpio, L. (2023). Impacto de las asociaciones público-privadas de infraestructura de transporte en el desarrollo económico en Perú. *Global Business Administration Journal*, 7(1), 27-46. https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Global_Business/article/view/5776/9222

Del Castillo, M. (2015). *La magnitud de la desigualdad en el ingreso y la riqueza en México Una propuesta de cálculo*. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/39531-la-magnitud-la-desigualdad-ingreso-la-riqueza-mexico-propuesta-calculo>

Della Porta, D. (Ed.). (2009). *Democracy in social movements*. Springer.

Durand, A. (2011). La conflictividad irresuelta. Movimientos sociales; percepciones de desigualdad y crisis de representación en el Perú. En Cueto, M. y Lerner, A. (Eds.), *Desarrollo, desigualdades y conflictos*

sociales. Una perspectiva desde los países andinos (pp. 167-184). Instituto de Estudios Peruanos. <https://repositorio.iep.org.pe/server/api/core/bitstreams/398fcd4b-26c0-4330-9f0e-1e0901d0c913/content>

Escobar, J. y Ponce, J. (2002). El beneficio de los caminos rurales: ampliando oportunidades de ingreso para los pobres. *GRADE*, (40), 7-45. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/grade/20100511023603/ddt40ES.pdf>

Fay, M., Andres, L., Fox, C., Narloch, U., Straub, S. & Slawson, M. (2017). *Rethinking infrastructure in Latin America and the Caribbean: spending better to achieve more*. The World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/676711491563967405/pdf/114110-REVISED-Rethinking-Infrastructure-Low-Res.pdf?_gl=1*1bin2h9*_gcl_au*MTUyNzk2MDcxLjE3Mjl5MTQ4Nzg.

Femenia, N. (2014). *Una teoría posmoderna de conflictos sociales*. Creative Conflict Resolutions. https://www.academia.edu/3530418/Una_Teoria_Posmoderna_de_Conflictos_Sociales?sm=b

Figueroa, A (1995). Desigualdad y democracia. En Portocarrero, G. y Valcárcel, M. (Eds.), *El Perú frente al siglo XXI* (pp. 53-76). Fondo editorial PUCP.

Figueroa, A. (2003). *La sociedad sigma: una teoría del desarrollo económico*. Fondo Editorial PUCP.

Fondo Monetario Internacional (FMI). (2020). *Fiscal Monitor: Policies for the Recovery* (Reporte). FMI. <https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2020/09/30/october-2020-fiscal-monitor>

Fondo Monetario Internacional (FMI). (2021). *Fiscal Monitor: A Fair Shot* (Reporte). <https://www.imf.org/en/Publications/FM>

- Francke, P. (2023a, 22 febrero). *Desigualdad y Democracia*. IDEHPUCP. <https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis1/desigualdad-y-democracia/>
- Francke, P. (2023b, 1 de diciembre). Perú, Desigualdades y salidas desde la economía [Video]. En Facultad de Ciencias Sociales PUCP (Coords.), *Brechas, desigualdades y discriminaciones en la sociedad peruana: ¿nuevas aproximaciones?* YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=WyN76rF7i1Q>
- Gaudin, Y. y Pareyón Noguez, R. (2020). *Brechas estructurales en América Latina y el Caribe: una perspectiva conceptual-metodológica* (Documento de Proyectos). CEPAL. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46435/1/S2000836_es.pdf
- Gonzales de Olarte, E., y Samamé, L. (1991). *Péndulo peruano: políticas económicas, gobernabilidad y subdesarrollo (1963-1990)*. Instituto de Estudios Peruanos.
- Guild, R. (1998). *Infrastructure Investment and Regional Development: Theory and Evidence*. University of Auckland.
- Gujarati, D. y Porter, D. (2010). *Econometría (Quinta edición)*. McGraw Hill. https://www.academia.edu/37303940/Econometria_Damodar_N_Gujarati
- Guzmán-Barrón S., C. (2011). Crecimiento y desigualdad: conflicto social y gobernabilidad. En *Aula Magna: crecimiento y desigualdad: conflicto social y gobernabilidad* (pp. 149-154). Fondo Editorial de la PUCP.
- Haslam, P. A., & Ary Tanimoune, N. (2016). The Determinants of Social Conflict in the Latin American Mining Sector: New Evidence with Quantitative Data. *World Development*, 78, 401–419.

Instituto de Estudios Peruanos (IEP). (2023). *El Barómetro de las Américas de LAPOP toma el Pulso de la democracia en Perú – 2023* (Reporte). IEP. <https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2024/04/AB-2023-Peru.-Presentacion-23-de-abril-de-2024.pdf>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2021). *Acceso a los servicios básicos en el Perú* (Reporte). INEI. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1863/libro.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2022). *Pobreza monetaria afectó al 27,5% de la población del país en el año 2022* [Nota de prensa]. INEI. <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/pobreza-monetaria-afecto-al-275-de-la-poblacion-del-pais-en-el-ano-2022-14391/#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%202022%2C%20el%2027%2C8%25%20de%20la,de%2017%20a%C3%B1os%20de%20edad>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2023). *Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2011-2022. Informe Técnico*. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/pobreza2022/Pobreza2022.pdf

IPSOS (2020, 4 enero). *Desigualdad social, causa principal de conflictos en Latinoamérica*. Lima: Ipsos. <https://www.ipsos.com/es-co/desigualdad-social-causa-principal-de-conflictos-en-latinoamerica>

Jaramillo, M. & Alcázar, L. (2022). *Inversión pública y desigualdad en América Latina* (Documento de Investigación). GRADE. <https://www.grade.org.pe/publicaciones/inversion-publica-y-desigualdad-en-america-latina/>

Joko, D. W. U. (2017). The Impact of income disparity on social conflicts. *Sociology and Anthropology*, 5(12), 985-990.

- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 15(1), 2-28. <https://assets.aeaweb.org/asset-server/files/9438.pdf>
- Lardé, J. y Sánchez, R. (2014). La brecha de infraestructura económica y las inversiones en América Latina. *Boletín FAL: Facilitación del Transporte y el Comercio en América Latina y el Caribe*, 332(4), 1-9. <https://hdl.handle.net/11362/37286>
- Luna, J. (2023, 19 de mayo). *Pobreza Multidimensional: El 35.8% de peruanos no cuenta con al menos un servicio básico*. *Sociedad de Comercio Exterior del Perú* (Semnario 1165). <https://www.comexperu.org.pe/articulo/pobreza-multidimensional-el-358-de-peruanos-no-cuenta-con-al-menos-un-servicio-basico>
- Maasoumi, E. (1986). The Measurement and Decomposition of Multi-Dimensional Inequality. *Econometrica*, 54(4), 991-997. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=5bd747c47b73f60c6fd7d631502a79716411d804>
- Machado, R. y Toma, H. (2017). Crecimiento económico e infraestructura de transportes y comunicaciones en el Perú. *Economía*, 40(79), 9-46. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/download/19271/19416/>
- Medina, F. (2001). *Consideraciones sobre el índice de Gini para medir la concentración del ingreso*. División de Estadística y Proyecciones Económicas. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4788/S01020119_es.pdf
- Mendoza, L. y Celestino, J. (2019). Determinantes económicos y sociopolíticos de los conflictos socioambientales en el Perú. *Revista de Investigaciones Altoandinas*, 21(2), 122-138.

- Miller, S., Rein, P., & Gross, B. (2020). Poverty, inequality, and conflict. En P. Robson (Eds.), *Welfare Law* (pp. 19-55). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003073246-4/poverty-inequality-conflict-miller-martin-rein-pamela-roby-bertram-gross>
- Muñoz, I., Paredes, M., & Thorp, R. (2006). Acción colectiva, violencia política y etnicidad en el Perú. *Cuadernos de Investigación Política, Documento de Trabajo*.
- Ojo Público. (2022, 3 julio). "La insatisfacción [con la democracia] desnuda nuestras carencias". *Ojo Público*. <https://ojo-publico.com/politica/la-insatisfaccion-la-democracia-desnuda-nuestras-carencias>
- Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2009). *The Role of Public Investment in Social and Economic Development. Public Investment: Vital for Growth and Renewal, but should it be a Countercyclical Instrument?* ONU. https://unctad.org/system/files/official-document/webdiae20091_en.pdf
- Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2019, 17 de julio). *¿Qué es la desigualdad?* ONU. <https://news.un.org/es/story/2019/07/1459341>
- Østby, G. (2008). Polarization, Horizontal Inequalities and Violent Civil Conflict. *Journal of Peace Research*, 45(2), 143-162. <https://doi.org/10.1177/0022343307087169>
- OXFAM (2019). *Inequality and conflict (Brief)*. OXFAM <https://oxfam.dk/documents/artikler/inequality-and-conflict-oxfam-ibis-brief-28feb2019.pdf>
- Panfichi, A., & Coronel, O. (2014). Régimen político y conflicto social en el Perú: 1968-2011. *Conflicto social en los Andes: protestas en el Perú y Bolivia*, 13-64.

- Paredes, M. (2017). Conflictos mineros en el Perú: entre la protesta y la negociación. *Debates en sociología*, (45), 5-32.
- Perrotti, D. y Sánchez, R. (2011). *La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe* (Reporte). CEPAL. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/7aba496b-2e71-4c39-8134-4855b450dcd2/content>
- Pessino, C., Izquierdo, A., y Guillermo, V. (2018). *Mejor gasto para mejores vidas: Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos*. BID. <https://publications.iadb.org/es/mejor-gasto-para-mejores-vidas-como-america-latina-y-el-caribe-puede-hacer-mas-con-menos-resumen>
- Podestá, A. (2020). *Gasto público para impulsar el desarrollo económico e inclusivo y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. CEPAL. https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46276/S2000670_es.pdf
- Quispe Mamani, E. (2021). Corrupción, conflictos y crisis de gobernabilidad democrática en Puno, Perú. *Trabajo y sociedad*, 22(37), 419-437.
- Quispe, C., Apaza, R., y Blanco, M. (2024). Eficiencia de la inversión pública en educación en el Perú, 2016-2022: Un análisis comparativo por regiones. *Comuni@cción*, 15(1), 66-78. <https://www.redalyc.org/journal/4498/449877649006/html/>
- Remy, M. (2015). *Desigualdad Territorial en el Perú. Reflexiones preliminares*. (Documento de Trabajo). Instituto de Estudios Peruanos. https://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/iep/20170328053540/pdf_1430.pdf
- Regjo, L. C., Ugarte, C. L., Inocente, L. R., y Ugás, P. M. (2022). *Infraestructura para el desarrollo regional: enfoque de cierre de brechas y corredores*

económicos territoriales. Fondo Editorial Universidad de San Martín de Porres.

Roemer, J. (1988), Igualdad de oportunidades. *Isegoría: Revista de filosofía moral y política*, (18), 71-87.

Royce, E. (2008). *Poverty and Power. A Structural Perspective on American Inequality*. Londres, Reino Unido. Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
https://ds.amu.edu.et/xmlui/bitstream/handle/123456789/17895/%5BEdward_Royce%5D_Poverty_and_Power_The_Problem_of_S%28BookSee.org%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Schuldt, J. (2011). Desigualdad Económica y conflicto social. En *Aula Magna: crecimiento y desigualdad: conflicto social y gobernabilidad* (pp. 181-184). Fondo Editorial de la PUCP.

Seminario, B., Zegarra, M. A., y Palomino, L. (2019). *Estimación del PIB departamental y análisis de la desigualdad regional en el Perú: 1795-2017*. (Documento de trabajo). BID. <https://doi.org/10.18235/0002004>

Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD-PCM). (2023, 19 de enero). *Reporte de conflictos sociales - Diciembre 2022* (Reporte mensual). PCM
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4053998/Reporte%20de%20Conflictos%20Sociales%20-%20Diciembre%202022.pdf.pdf?v=1674141342>

Souza, W., Annegues, A. y Rodrigues de Oliveira, V. (2017). *Consideraciones sobre la desigualdad de oportunidades: nueva evidencia*. Revista CEPAL.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41150/1/REV121_Souza.pdf

Stewart, F. (2008). Horizontal inequalities and conflict: An introduction and some hypotheses. En F. Stewart (Eds.). *Horizontal inequalities and conflict*:

Understanding group violence in multiethnic societies (pp. 3-24). Palgrave Macmillan UK.

Stezano, F. (2021). *Enfoques, definiciones y estimaciones de pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe: un análisis crítico de la literatura* (Documentos de Proyectos). CEPAL. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46405/4/S2100026_es.pdf

Tanaka, M., Zárate, P., & Huber, L. (2011). Mapa de la conflictividad social en el Perú: análisis de sus principales causas. *PrevCon-PCM*.

Tanaka, M. (2012). *¿Por qué el Estado no responde adecuadamente a los conflictos sociales? ¿Qué hacer al respecto?* (Documento de trabajo). CIES. <https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2016/07/05-tanaka.pdf>

Tansey, O. (2007). Process Tracing and Elite Interviewing: A Case for Non-probability Sampling. *Political Science & Politics*, 40(4), 765-772. <https://doi.org/10.1017/S1049096507071211>

USAID (2012). Programa de capacitación en gestión de Conflictos Sociales para gobiernos regionales y locales: Análisis de conflictos sociales. *ProDescentralización-USAID*.

Vásquez, E. (2012). El Perú de los pobres no visibles para el Estado: la inclusión social pendiente a julio de 2012 (Documento de Discusión). Universidad del Pacífico. <https://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/1497/El%20Per%c3%ba%20de%20los%20pobres%20no%20visibles%20para%20el%20Estado-JULIO2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

World Inequality Report. (2020). World Inequality Lab. https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022_Full_Report.pdf

Zhang, Y., Wang, X. y Chen, K. Z. (2012). *Growth and Distributive Effects of Public Infrastructure Investments in China*. SSRN Electronic Journal.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2351148